

REPUBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

15ª REUNION - 11ª SESION ORDINARIA - 13/14 DE MAYO DE 1998

Presidencia del señor presidente provisional del H. Senado, doctor **EDUARDO MENEZES**
del señor vicepresidente 1º del H. Senado, doctor **ANTONIO CAFIERO**, y
del doctor **JORGE RAUL YOMA**, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales

Secretarios: doctor **EDGARDO R. PIUZZI** y doctora **MATILDE DEL VALLE GUERRERO**

Prosecretarios: señor **MARIO L. PONTAQUARTO**, señora **BERTA ALDALUR**,
doctor **ALFREDO A. LUQUES** y señor **TAHA AHMAD**

PRESENTES:

AGUIRRE LANARI, Juan R.
AGÜNDEZ, Jorge A.
ALASINO, Augusto
AVELÍN, Alfredo
BARTOLUCCI, Mario L.
BAUM, Daniel
BAUZÁ, Eduardo
BERHONGARAY, Antonio T.
BRAVO, Leopoldo
CABANA, Fernando V.
CAFIERO, Antonio F.
CANTARERO, Emilio Marcelo
COSTANZO, Remo J.
DE LA ROSA, Carlos L.
DE LA SOTA, José-Manuel
DEL PIERO, Pedro
FIGUEROA, José O.
GAGLIARDI, Edgardo
GALVÁN, Raúl A.
GARCÍA ARECHA, José M.
GENOUD, José
GIOJA, José L.
HUMADA, Julio C.
LEÓN, Luis A.
LÓPEZ, Alcides H.
LOSADA, Mario A.
MAC KARTHY, César
MAGLIETTI, Alberto
MARANGUELLO, Pedro C.
MARTÍNEZ ALMUDEVAR, Enrique M.
MASSACCESI, Horacio
MASSAT, Jorge
MAYA, Héctor M.
MELGAREJO, Juan I.
MENEGHINI, Javier R.
MENEM, Eduardo
MIRANDA, Julio

PARDO, Angel F.
PEÑA de LÓPEZ, Ana M.
REUTEMANN, Carlos A.
RIVAS, Olijela del Vallé
ROMERO FERIS, José A.
SÁEZ, José María
SAGER, Hugo Abel
SALA, Osvaldo R.
SALUM, Humberto E.
SAN MILLÁN, Julio A.
SAPAG, Felipe R.
SOLANA, Jorge D.
STORANI, Conrado H.
TELL, Alberto Maximo
ULLOA, Roberto Augusto
USANDIZAGA, Horacio Daniel
VAQUIR, Omar M.
VERNA, Carlos Alberto
VILLARROEL, Pedro G.
VILLAYERDE, Jorge A.
YOMA, Jorge R.
ZALAZAR, Horacio Aníbal

AUSENTES, CON AVISO:

ALMIRÓN, Carlos H.
BRANDA, Ricardo A.
LUDUEÑA, Felipe E.
MANFREDOTTI, Carlos
MOREAU, Leopoldo R. G.
OYARZÚN, Juan C.
PRETO, Ruggero
VARIZAT, Daniel A.

EN COMISION:

LOUDÍN, Ernesto

POR SUSPENSION:

ANGELOZ, Eduardo C.

SUMARIO

1. Manifestaciones en minoría. (Pág. 2622.)

2. Por invitación del señor presidente provisional del Honorable Senado, el señor senador De la Rosa procede al izamiento de la bandera nacional en el mástil del recinto. (Pág. 2623.)

3. Asuntos entrados:

I. Comunicaciones de la Presidencia de la Nación al Honorable Senado. (Pág. 2623.)

II. Mensaje y decreto del Poder Ejecutivo por el que se ratifica un Convenio entre el Estado nacional y la provincia de La Pampa sobre cancelación de acreencias por la privatización de Gas del Estado. (P.E.-94/98). (Pág. 2623.)

III. Mensaje y decreto del Poder Ejecutivo por el que se dispone habilitar el puerto de la firma Multipuerto Sociedad Anónima en el río Paraná de las Palmas, Zárate, Buenos Aires (P.E.-95/98). (Pág. 2625.)

IV. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se incorpora la Región Aérea Sur a la ley 22.767 (condecoración a banderas de unidades participantes en la guerra de Malvinas, (P.E.-96/98). (Pág. 2625.)

V. Comunicaciones de la Presidencia de la Nación. (Pág. 2626.)

VI. Proyecto de ley en revisión sobre Régimen Tributario Especial para Pequeños Contribuyentes (C.D.-16/98). (Página 2626.)

VII. Comunicaciones de la Honorable Cámara de Diputados. Devolución de la sanción del Honorable Senado del proyecto de ley de prevención y control del tabaquismo (C.D.-89/94). (Pág. 2637.)

VIII. Comunicaciones de comisiones. (Página ...)

IX. Comunicaciones de señores senadores. (Pág. 2639.)

X. Comunicaciones oficiales. (Pág. 2639.)

XI. Dictámenes de comisiones. (Pág. 2640.)

XII. Peticiones particulares. (Pág. 2642.)

XIII. Proyecto de comunicación del señor senador Losada por el que se solicitan informes respecto de la construcción de una línea de alta tensión entre Yacvretá y la represa brasileña de Itá (S.-617/98). (Pág. 2642.)

XIV. Proyecto de declaración del señor senador Cantarero por el que se solicita se financie la realización de un censo de viecuñas en Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan (S.-618/98). (Página 2643.)

XV. Proyecto de declaración del señor senador Massacecesi por el que se manifiesta preocupación por un proyecto de ley de regionalización del país (S.-620/98). (Pág. 2644.)

XVI. Proyecto de ley de los señores senadores Maranguello y Bartolucci sobre régimen de distribución de la coparticipación federal de impuestos (S.-621/98). (Pág. 2644.)

XVII. Proyecto de declaración del señor senador Alasino por el que se expresa pesar por el fallecimiento del realizador cinematográfico don René Mugica (S.-622/98). (Pág. 2648.)

XVIII. Proyecto de declaración del mismo señor senador por el que se expresa beneplácito por la designación del obispo de la Diócesis de Concordia, Entre Ríos (S.-623/98). (Pág. 2648.)

XIX. Proyecto de comunicación del señor senador Berhongaray por el que se solicitan informes sobre medidas instrumentadas para el control del parásito "mosca de los cuernos" (S.-624/98). (Pág. 2649.)

XX. Proyecto de resolución del señor senador Gioja por el que se declara de interés parlamentario el Primer Congreso Nacional de Autoridades Mineras a realizarse en La Rioja (S.-625/98). (Página 2650.)

XXI. Proyecto de declaración del señor senador Moreau por el que se manifiesta preocupación y rechazo por los términos utilizados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de América respecto del caso de IBM-Banco Nación (S.-626/98). (Pág. 2650.)

XXII. Proyecto de declaración del señor senador Ludueña por el que se expresa beneplácito por el premio obtenido por el fotógrafo argentino Aldo Omar Grangetto en el concurso Fotonatura 97 realizado en España (S.-627/98). (Página 2651.)

XXIII. Proyecto de resolución del mismo señor senador por el que se declara de interés para el Honorable Senado el "Proyecto Luisito - Mirando Nuestra Historia" (S.-628/98). (Pág. 2651.)

to ante el logro obtenido por el nadador **Gabriel Chaillou** en el VIII Campeonato Mundial de Natación que se realizó en **Perth, Australia** (S.-2.642/97). Se aprueba. (Pág. 2796.)

40. Consideración del dictamen de la Comisión de Deportes en el proyecto de declaración del señor senador **Romero Feris** por el que se manifiesta beneplácito ante la obtención del **Mundialito Juvenil de Fútbol Sub-20**, disputado en **Uruguay** por nuestra Selección Nacional (S.-2.571/97). Se aprueba. (Página 2797.)

41. Consideración del dictamen de la Comisión de Transportes en el proyecto de ley de los señores senadores **Sala y Mac Karthy** por el que se modifica el capítulo III de la ley **24.449** (reglas para vehículos de transporte) (S.-5/98). Se aprueba. (Página 2798.)

42. Consideración del dictamen de las comisiones de Cultura y de Obras Públicas en el proyecto de comunicación del señor senador **Oudín** por el que se solicitan informes acerca de las ruinas jesuíticas de **Misiones** (S.-2.338/97). Se aprueba. (Pág. 2799.)

43. Consideración del dictamen de la Comisión de Transportes en el proyecto de resolución del señor senador de la Sota por el que se solicita se impida la suspensión de los vuelos de **Aerolíneas Argentinas S.A.** en la ruta **Buenos Aires-Lima-Los Angeles** (S.-2.322/97). Se aprueba. (Pág. 2801.)

44. Consideración del dictamen de la Comisión de Transportes en el proyecto de comunicación del señor senador **Meneghini** por el que se solicitan informes referidos a la prestación del servicio de transporte público de pasajeros en el área metropolitana (S.-2.554/97). Se aprueba con modificaciones. (Pág. 2802.)

45. Consideración del dictamen de la Comisión de Transportes en el proyecto de comunicación de los señores senadores **Mac Karthy y Sala** por el que se solicita la aplicación de tarifas promocionales por parte de las empresas que operan la ruta aérea **Buenos Aires-Esquel** (S.-2.559/97). Se aprueba. (Pág. 2803.)

46. Consideración del dictamen de la Comisión de Transportes en el proyecto de comunicación del señor senador **León** por el que se solicitan informes acerca de la ley de tránsito **24.449** (S.-2.579/97). Se aprueba. (Pág. 2805.)

47. Consideración del dictamen de la Comisión de Transportes en el proyecto de comunicación del señor senador **Figuroa** por el que se solicita el establecimiento de la prestación de un servicio aéreo entre **Buenos Aires y Santiago del Estero** (S.-187/98). Se aprueba. (Pág. 2806.)

48. Consideración del dictamen de la Comisión de Transportes en el proyecto de comunicación de los señores senadores **Cafiero y Martínez Almudevar** por el que se solicitan informes acerca de diversos aspectos relacionados con la vía férrea trasandina que vincula **Argentina (Mendoza)** con **Chile (Valparaíso)** (S.-228/98). Se aprueba. (Pág. 2807.)

49. Consideración del dictamen de la Comisión de Transportes en dos proyectos de comunicación: del señor senador **Martínez Almudevar** y del señor senador **Verna**, respectivamente, por los que se solicitan informes acerca de la suspensión del servicio ferroviario entre **General Pico (La Pampa)** y la **Ciudad de Buenos Aires** (S.-258 y 285/98). Se aprueba. (Pág. 2808.)

50. Consideración del dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Economía en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el aumento del aporte de la **República Argentina** a la **Asociación Internacional de Fomento**, organismo integrante del grupo **Banco Mundial** (P.E.-801/97). Se aprueba. (Pág. 2809.)

51. Consideración del dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Pesca, Intereses Marítimos y Portuarios y de Recursos Hídricos en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el **Convenio sobre Conservación y Desarrollo de los Recursos ícticos en los Tramos Limítrofes de los Ríos Paraná y Paraguay** (P.E.-852/97). Se aprueba. (Pág. 2811.)

52. Manifestaciones de varios señores senadores relacionadas con el tratamiento de los dictámenes en mayoría y en minoría, de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre reforma laboral (P.E.-16/98). (Pág. 2814.)

53. Apéndice:

Sanciones del Honorable Senado. (Pág. 2865.)

—En Buenos Aires, a las 17 y 3 del miércoles 13 de mayo de 1998.

1

MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Avelín. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

Sr. Avelín. — Señor presidente: como de costumbre, quisiera saber cuántos señores senadores hay en el Senado y si realmente va a llamar por algunos minutos más hasta formar quórum.

les dentro de los límites de su territorio, conforme a las cláusulas del convenio.

Asimismo, se fomenta la realización de estudios conjuntos de evaluación del recurso íctico, la instrumentación de proyectos productivos alternativos que generen recursos, planes de acción para la conservación y la elaboración de medidas para prevenir la contaminación de los ríos Paraná y Paraguay por efluentes no tratados y otros desechos de cualquier naturaleza que pudieren dañar la fauna íctica.

A fin de lograr una mayor participación y complementación en el cumplimiento del convenio, ambas partes acuerdan constituir un comité coordinador integrado por seis representantes por cada Estado, que será asistido por un consejo asesor, compuesto por representantes elegidos por el comité, que reflejen competencia institucional, técnica y científica en materia de pesca y conservación de la fauna íctica. Este consejo asesor tendrá como función formular propuestas y recomendaciones al comité.

Dentro de las funciones del comité coordinador se hallan, entre otras, las de dictar normas sobre el control y regulación de la pesca, la preservación y conservación del recurso y fauna íctica; la concertación de acuerdos científicos y técnicos y el dictado de cualquier otra norma relativa a la conservación y explotación racional de los recursos ícticos. Se reunirá al menos una vez al año para establecer épocas y áreas de veda.

Las partes ratifican las obligaciones asumidas por el acuerdo firmado el 29 de septiembre de 1992, en el cual se establece una zona de reserva íctica tres kilómetros aguas arriba y tres kilómetros aguas abajo del eje de la presa de Yacyretá.

La aprobación de este instrumento contribuirá a intensificar la cooperación científica y técnica destinada a la preservación y conservación, estableciendo criterios racionales de pesca y utilización de los recursos.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

CARLOS S. MENEM.

Jorge A. Rodríguez. – Guido Di Tella. – Carlos V. Corach.

Sr. Presidente (Cafiero). – En consideración en general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–La votación resulta afirmativa.

–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente (Cafiero). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.

52

REFORMA LABORAL

Sr. Presidente (Cafiero). – Corresponde considerar los dictámenes en mayoría y en minoría, de

la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre Reforma Laboral. (Orden del Día N° 288 y Anexo)

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (PiuZZi). – (Lee)

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha considerado el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo nacional (16/98), sobre Reforma Laboral; y por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

CAPITULO I

Artículo 1° – Contrato de trabajo de aprendizaje. El contrato de aprendizaje tendrá finalidad formativa teórico-práctica, la que será descrita con precisión en un programa adecuado al plazo de duración del contrato. Se celebrará por escrito entre un empleador y un joven sin empleo, de entre quince (15) y veintiocho (28) años.

Este contrato de trabajo tendrá una duración mínima de tres (3) meses y una máxima de un (1) año.

A la finalización del contrato el empleador deberá entregar al aprendiz un certificado suscrito por el responsable legal de la empresa, que acredite la experiencia o especialidad adquirida.

La jornada de trabajo de los aprendices no podrá superar las cuarenta (40) horas semanales, incluidas las correspondientes a la formación teórica. Respecto de los menores se aplicarán las disposiciones relativas a la jornadas de trabajo de los mismos.

No podrán ser contratados como aprendices aquellos que hayan tenido una relación laboral previa con el mismo empleador. Agotado su plazo máximo no podrá celebrarse nuevo contrato de aprendizaje respecto del mismo aprendiz.

El número total de aprendices contratados no podrá superar el diez por ciento (10 %) de los contratados por tiempo indeterminado en el establecimiento de que se trate. Cuando dicho total no supere los diez (10) trabajadores será admitido un aprendiz. El empresario que no tuviere personal en relación de dependencia también podrá contratar un aprendiz.

El empleador deberá preavisar con treinta (30) días de anticipación la terminación del contrato o abonar una indemnización sustitutiva de medio mes de sueldo.

El contrato se extinguirá por cumplimiento del plazo pactado; en este supuesto el empleador no estará obligado al pago de indemnización alguna al trabajador sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior. En los

demás supuestos regirá el artículo 7° y concordantes de la presente ley.

Si el empleador incumpliera las obligaciones establecidas en esta ley, el contrato se convertirá a todos sus fines en un contrato por tiempo indeterminado.

Las cooperativas de trabajo y las empresas de servicios eventuales no podrán hacer uso de este contrato.

Art. 2° - *Régimen de pasantías.* Cuando la relación se configure entre un empleador y un estudiante y tenga como fin primordial la práctica relacionada con su educación y formación, se configurará el contrato de pasantía.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social establecerá las normas a las que quedará sujeto dicho régimen.

Art. 3° - Sustitúyese el artículo 92 bis del Régimen de Contrato de Trabajo (ley 20.744, t.o.) por el siguiente texto:

Artículo 92 bis: *Período de prueba.* El contrato de trabajo por tiempo indeterminado se entenderá celebrado a prueba durante los primeros treinta (30) días. Cualquiera de las partes podrá extinguir la relación durante ese lapso sin expresión de causa y sin derecho a indemnización alguna con motivo de la extinción.

El período de prueba se regirá por las siguientes reglas:

1. Un mismo trabajador no podrá ser contratado a prueba por el mismo empleador más de una vez.
2. El empleador deberá registrar el contrato a prueba en el libro especial de artículo 52 de esta ley o, en su caso, en el previsto por el artículo 84 de la ley 24.467.
3. Durante el período de prueba el trabajador tendrá los derechos y obligaciones propios de la categoría o puesto de trabajo que desempeñe, incluidos los derechos sindicales, con las excepciones que se establecen en este artículo.
4. Durante los primeros treinta (30) días el empleador, y el trabajador estarán obligados al pago de los aportes y contribuciones para las obras sociales, asignaciones familiares y cuota correspondiente al régimen vigente de riesgo del trabajo, y exentos de los correspondientes a jubilaciones y pensiones, Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y Fondo Nacional de Empleo.
5. El trabajador tendrá derecho durante el período de prueba a las prestaciones por accidente o enfermedad del trabajo, incluidos los derechos establecidos para el caso de accidente o enfermedad inculpable, con excepción de lo prescrito en el cuarto párrafo del artículo 212 de esta ley.

6. Si el contrato continuara luego del período de prueba, éste se computará como tiempo de servicio a todos los efectos laborales y de la seguridad social.

Podrá ampliarse el período de prueba hasta seis (6) meses por convenio colectivo debidamente homologado.

Si se dispusiere la extensión convencional del período de prueba deberán realizarse, a partir del segundo mes, todos los aportes y contribuciones legales y convencionales, rigiendo las normas generales en materia de indemnización y preaviso. La disponibilidad colectiva de las indemnizaciones por falta de preaviso y por antigüedad en el despido incausado será de hasta el cincuenta por ciento (50 %) del régimen general.

Art. 4° - Los contratos de trabajo en período de prueba, que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley se hallaren en curso, continuarán hasta su finalización conforme al régimen en el cual tuvieron origen.

A partir de la vigencia de esta ley se aplicará, en todos los casos, este nuevo régimen, salvo que un convenio colectivo posterior a su sanción establezca uno distinto, dentro de los márgenes de disponibilidad colectiva.

CAPÍTULO II

Art. 5° - Las disposiciones del presente capítulo serán de aplicación a los contratos de trabajo que se celebren a partir de la entrada en vigencia de esta ley. Sin perjuicio de ello, se les aplicarán también todas las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales que no sean modificadas por este capítulo.

Art. 6° - El contrato de trabajo no podrá ser disuelto por voluntad de una de las partes, sin previo aviso, o en su defecto indemnización, además de la que corresponda al trabajador por su antigüedad en el empleo, cuando el contrato se disuelva por voluntad del empleador.

El preaviso, cuando las partes no lo fijen en un término mayor, deberá darse con la siguiente anticipación:

- a) Por el trabajador, de quince (15) días;
- b) Por el empleador, de quince (15) días cuando el trabajador tuviese una antigüedad en el empleo de más de treinta (30) días hasta tres (3) meses; de un (1) mes cuando el trabajador tuviese una antigüedad en el empleo de más de tres (3) meses y no exceda de cinco (5) años y de dos (2) meses cuando fuere superior.

Estos plazos correrán a partir del día siguiente al de la notificación del preaviso.

La parte que omita el preaviso o lo otorgue de modo insuficiente, deberá abonar a la otra una indemnización sustitutiva equivalente a la remuneración que correspondería al trabajador durante los plazos señalados.

Art. 7° - *Indemnización por antigüedad o despido.* En los casos de despido dispuesto por el empleador sin justa causa, habiendo o no mediado preaviso, éste deberá abonar al trabajador una indemnización equi-

valente a una doceava (1/12) parte de la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios, si ésta fuera menor, por cada mes de servicio o fracción mayor de diez (10) días.

En ningún caso la mejor remuneración que se tome como base podrá exceder el equivalente de tres (3) veces el importe mensual de la suma que resulta del promedio de todas las remuneraciones previstas en el convenio colectivo de trabajo aplicable al trabajador al momento del despido por la jornada legal o convencional, excluida la antigüedad. Al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social le corresponderá fijar y publicar el monto que corresponda juntamente con las escalas salariales de cada convenio colectivo de trabajo.

Para aquellos trabajadores no amparados por convenios colectivos de trabajo el tope establecido en el párrafo anterior será el que corresponda al convenio de actividad, aplicable al establecimiento donde preste servicio al convenio más favorable, en el caso de que hubiera más de uno.

Para aquellos trabajadores remunerados a comisión o con remuneraciones variables, será de aplicación el convenio de la actividad a la que pertenezcan o aquél que se aplique en la empresa o establecimiento donde preste servicios, si éste fuere más favorable.

El importe de esta indemnización en ningún caso podrá ser inferior a dos doceavas (2/12) partes del sueldo calculadas en base al sistema establecido en este artículo.

Art. 8º - *Despido indirecto.* Cuando el trabajador hiciere denuncia del contrato de trabajo fundado en justa causa, tendrá derecho a las indemnizaciones previstas en los artículos 6º, 7º u 11, en su caso, de esta ley.

Art. 9º - *Falta de pago en término de la indemnización por despido incausado.* En caso de falta de pago en término y sin causa justificada por parte del empleador, de la indemnización por despido incausado o de un acuerdo rescisorio homologado, se presumirá la existencia de la conducta temeraria y maliciosa contemplada en el artículo 275 de la ley 20.744 (t.o. 1976).

Art. 10. - *Fuerza mayor, falta o disminución de trabajo. Monto de la indemnización.* En los casos que el despido fuese dispuesto por causa de fuerza mayor o por falta o disminución de trabajo no imputable al empleador fehacientemente justificada, el trabajador tendrá derecho a percibir una indemnización equivalente a una dieciochoava (1/18) parte de la mejor remuneración normal y habitual del último año o período de la prestación, si fuere menor, por cada mes de antigüedad o fracción mayor de diez (10) días.

Rige el mismo tope que el establecido en el artículo 7º. El importe de esta indemnización no será inferior a dos dieciochoavas (2/18) partes del salario calculado de la misma forma.

En tales casos, el despido deberá comenzar por el personal menos antiguo dentro de cada especialidad.

Respecto del personal ingresado en un mismo semestre, deberá comenzarse por el que tuviese menos

cargas de familia, aunque con ello se alterara el orden de antigüedad.

Art. 11. - *Despido discriminatorio.* Será considerado despido discriminatorio el originado en motivos de raza, sexo y religión.

En este supuesto la prueba estará a cargo de quien invoque la causal. La indemnización prevista en el artículo 7º de esta ley se incrementará en un treinta (30) por ciento y no se aplicará el tope establecido en el segundo párrafo del mismo.

CAPÍTULO III

Art. 12. - Incorporase como segundo párrafo del artículo 6º de la ley 14.250 (texto ordenado en 1988) el siguiente:

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las convenciones colectivas celebradas con anterioridad a la promulgación de la ley 23.545 y que con posterioridad al 1º de enero de 1988 no hubieran sido objeto de modificaciones por la vía de la celebración de acuerdos colectivos, cualquiera sea su naturaleza y alcance, caducarán, salvo pacto en contrario, en el plazo de dos años contados a partir de la solicitud que en tal sentido formule una de las partes signatarias.

El plazo comenzará a operar a partir de la fecha en que cualquiera de las partes signatarias formalice ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la denuncia de la convención y la solicitud de negociación. Dicha petición debe ser expresa y haber sido admitida.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social declarará la admisibilidad de la solicitud y convocará a las partes para que constituyan la comisión negociadora respectiva.

Las cuestiones relativas a la integración de la comisión negociadora, al nivel de negociación o cualquier otra que pueda suscitarse no suspenden ni interrumpen los plazos fijados precedentemente.

Vencido el plazo sin que se haya obtenido acuerdo respecto de la celebración de un nuevo convenio colectivo se someterán los puntos en conflicto al procedimiento previsto en la ley 14.786. Agotado dicho procedimiento, la convención colectiva cuya renovación no se pudiere acordar, caducará de pleno derecho.

Art. 13. - El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social constituirá un servicio de mediación y arbitraje, previa consulta con las organizaciones de empleadores más representativas y la Confederación General del Trabajo, el que actuará en los conflictos colectivos que puedan plantearse y cuya intervención sea requerida por las partes.

Art. 14. - La representación de los trabajadores en la negociación de los convenios colectivos de trabajo en cualquiera de sus tipos, estará a cargo de la asociación sindical con personería gremial de grado superior.

la que podrá delegar el poder de negociación en sus estructuras descentralizadas.

En unidades que registren la existencia de más de quinientos (500) trabajadores de una misma actividad, incluirán en su composición un representante delegado del personal, que reúna las condiciones establecidas en el artículo 40 y siguientes de la ley 23.551, nominado por la asociación sindical.

Art. 15. — Las convenciones colectivas de trabajo de ámbito superior podrán regular la organización colectiva del trabajo disponiendo la forma de aplicar las normas legales sobre jornadas y descansos, respetando los topes mínimos y máximos respectivos, y lo dispuesto por el artículo 3º *in fine* de esta ley.

Un convenio de ámbito menor vigente podrá prevalecer sobre otro convenio colectivo ulterior de ámbito mayor, siempre que esté prevista su articulación y que las partes celebrantes sean las mismas en ambos casos, de conformidad a lo prescrito por el artículo 14 de la presente ley. Vencido el término de vigencia del convenio colectivo de ámbito menor, el mismo caducará en el plazo de un (1) año, si las partes legitimadas para su renovación no alcanzaran un nuevo acuerdo. En este caso, se aplicará la convención colectiva de trabajo de ámbito mayor.

La facultad de acordar la disponibilidad colectiva prevista en el presente artículo queda condicionada a la generación de empleo.

Art. 16. — En la negociación colectiva las partes deberán observar las siguientes reglas:

1. La concurrencia a la negociaciones y a las audiencias citadas en debida forma.
2. Presentación de pliego.
3. La realización de las reuniones que sean necesarias en los lugares y con la frecuencia y periodicidad que sean adecuadas.
4. La designación de negociadores con idoneidad y representatividad suficiente para discutir y alcanzar acuerdos sobre el contenido del temario de materias propuesto.
5. El intercambio de la información necesaria a los fines del examen de las cuestiones en debate, en especial la relacionada con la distribución de los beneficios de la productividad y la evolución del empleo.
6. La realización de los esfuerzos conducentes a lograr acuerdos que tengan en cuenta las diversas circunstancias del caso.

Ante el incumplimiento de estas obligaciones por alguna de las partes será de aplicación del régimen del artículo 55 de la ley 23.551 y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dará a conocimiento público la situación planteada a través de los medios de difusión.

CAPÍTULO IV

Art. 17. — Sustitúyese el segundo párrafo del artículo 30 del Régimen de Contrato de Trabajo (Ley 20.744, t.o. 1976) por el siguiente texto:

Los cedentes, contratistas o subcontratistas deberán exigir además a sus cesionarios o subcontratistas el número del Código Único de Identificación Laboral de cada uno de los trabajadores que presten servicios y la constancia de pago de las remuneraciones las cuales deberán ser equivalentes a la actividad del principal; copia firmada de los comprobantes de pago mensuales al sistema de la seguridad social, una cuenta corriente bancaria de la cual sea titular y una cobertura por riesgos del trabajo.

Esta responsabilidad del principal de ejercer el control sobre el cumplimiento de las obligaciones que tienen los cesionarios o subcontratistas respecto de cada uno de los trabajadores que presten servicios, no podrá delegarse en terceros y deberá ser exhibido cada uno de los comprobantes y constancias a pedido del trabajador y/o de la autoridad administrativa.

El incumplimiento de algunos de los requisitos hará responsable solidariamente al principal por las obligaciones de los cesionarios, contratistas o subcontratistas respecto del personal que ocuparen en la prestación de dichos trabajos o servicios y que fueren emergentes de la relación laboral incluyendo su extinción y de las obligaciones de la seguridad social.

Art. 18. — Créase una Comisión de Seguimiento del Régimen de Contrato de Trabajo y de las normas de las convenciones colectivas de trabajo, la que evaluará anualmente dicha normativa pudiendo proponer reformas o modificaciones a la misma con el fin de promover y defender el empleo productivo.

Dicha Comisión de Seguimiento estará integrada por dos (2) representantes del gobierno nacional, uno de los cuales ejercerá la presidencia, el presidente del Consejo Federal de Administraciones del Trabajo o un representante miembro que éste designe al efecto, dos (2) representantes de la Confederación General del Trabajo y dos (2) representantes de las organizaciones más representativas de empleadores.

Art. 19. — Todos los contratos de trabajo, así como las pasantías, deberán ser registrados ante los organismos de seguridad social y tributarios en la misma forma y oportunidad que los contratos de trabajo por tiempo indeterminado.

Las comunicaciones pertinentes deberán indicar:

- a) El tipo de que se trate;
- b) En su caso, las fechas de inicio y finalización del contrato.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tendrá libre acceso a las bases de datos que contengan tales informaciones.

Art. 20. — El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social será la autoridad de aplicación de la presente ley.

Art. 21. — Deróganse los artículos 18, inciso b), 31 última parte, 28 a 40 y 43 a 65 de la ley 24.013; los arti-

culos 1º, 3º, 4º y 5º de la ley 24.465, y el artículo 89 de la ley 24.467.

Art. 22. - *Cláusula transitoria.* Los contratos celebrados bajo las modalidades previstas en los artículos 43 a 65 de la ley 24.013 y en los artículos 3º y 4º de la ley 24.465, se convertirán en contratos por tiempo indeterminado a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, siendo de aplicación las modificaciones previstas en la misma.

En cuanto a los aportes y contribuciones, regirá lo establecido en cada una de las modalidades mencionadas en el párrafo anterior, por el plazo que había sido estipulado originariamente en dichos contratos.

El tiempo que los trabajadores estuvieron bajo el régimen de estas modalidades, no será computado como tiempo de servicio a los efectos de la indemnización.

Art. 23. - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

De acuerdo al artículo 123 del reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 5 de mayo de 1998.

Julio A. Miranda. - Alberto M. Tell. - Julio C. Humada. - Augusto Alasino.

En disidencia parcial:

Antonio F. Cafiero

ANTECEDENTE

Mensaje del Poder Ejecutivo

(18 de marzo de 1998)

Al Honorable Congreso de la Nación.

Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de acompañar un proyecto de reforma laboral que incluye la modificación de algunos aspectos del Régimen de Contrato de Trabajo y de las leyes 24.013, 24.465 y 24.467, así como también de la normativa vigente en materia de convenciones colectivas de trabajo.

Las temáticas, materia del presente, han tenido un amplio, público y prolongado debate en el seno de la sociedad, quedando dirimidas con el proyecto de ley que se acompaña, el que incorpora aportes de sectores representativos de los empleadores y trabajadores que —comprendiendo la trascendencia histórica del momento que vivimos— han procurado alcanzar objetivos comunes, para facilitar con su apoyo la creación de instrumentos legales modernos que aseguren la transparencia, la estabilidad y la jerarquía de la relación de trabajo.

Esta propuesta no se ha erigido sobre la derrota de ninguno de los actores sociales que participaron con sus ideas, sino más bien sobre sus coincidencias y su discurrir inteligente, orientado al crecimiento con justicia social, el que posibilitará el anhelo de este presidente de ver a la Argentina, en poco tiempo más, dentro de los diez países más avanzados de la Tierra.

Entre los contenidos del proyecto se propone la derogación de las modalidades promovidas de contratación laboral previstas en la ley 24.013.

En la práctica, esas figuras legales tal cual están legisladas han producido una grave distorsión en las relaciones de trabajo y un impacto negativo en el financiamiento del sistema de seguridad social.

Por tales motivos se propone la eliminación de las modalidades mencionadas y, al mismo tiempo, acentuar la proporcionalidad de la indemnización por despido en el Régimen de Contrato de Trabajo, como se verá más adelante.

El régimen de pasantías previsto en el decreto 340 de fecha 24 de febrero de 1992, quedará estructurado en un nuevo contexto y su autoridad de aplicación será el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Por otro lado, se establece la naturaleza laboral del contrato de aprendizaje.

Para garantizar al trabajador y al sistema de seguridad social el cumplimiento de las obligaciones asumidas a su respecto por el empleador, se propone introducir una modificación en el artículo 30 del Régimen de Contrato de Trabajo estableciendo los recaudos que los cedentes, contratistas o subcontratistas deben requerir a sus co-contratantes para liberarse de la responsabilidad solidaria.

Se contempla un nuevo sistema indemnizatorio modificando el preaviso, suprimiendo la integración del mes de despido y en cuanto a la indemnización por antigüedad en el despido incausado, se deroga el mínimo legal de dos (2) meses y se establece el equivalente a la doceava (1/12) parte de la mejor remuneración mensual, normal y habitual como indemnización por cada mes trabajado o fracción mayor de diez (10) días, con un mínimo de dos doceavas (2/12) partes.

En este orden de ideas, se propone reducir a treinta (30) días el período de prueba establecido en la ley 24.465 e incorporado como artículo 92 bis del Régimen de Contrato de Trabajo.

Esta es otra de las figuras altamente distorsionadas de las relaciones de trabajo, ya que su uso sistemático por parte de empleadores inescrupulosos produjo el efecto inverso al buscado: desestabilizó la relación laboral e impactó negativamente en el sistema de la seguridad social con el consiguiente perjuicio para la sociedad.

El proyecto que se eleva propone que, por medio de la negociación colectiva, el período de prueba pueda ampliarse de treinta (30) a ciento ochenta (180) días, pudiendo las partes pactar para el período de extensión una modificación de hasta el cincuenta por ciento (50 %) de la indemnización por falta de preaviso y por antigüedad en el despido incausado.

Acorde con preceptos constitucionales y con las legislaciones más modernas, se introduce la figura del despido discriminatorio, con un régimen indemnizatorio agravado, quedando la carga de la prueba en cabeza de quien la invoca.

En el despido incausado la falta de pago en término de la indemnización o el incumplimiento de un acuer-

do rescisorio homologado hace presumir la temeridad y malicia que será evaluada por los jueces conforme el artículo 275 del Régimen de Contrato de Trabajo.

En los casos de despido por causas económicas, se fija una indemnización atenuada.

En cuanto a los convenios colectivos, se propone la caducidad de aquellos convenios que con posterioridad al 1° de enero de 1988 no hayan sido renovados o sustituidos por otros acuerdos, cualquiera fuera su naturaleza y alcance. Tal caducidad operará a los dos (2) años, contados a partir de la solicitud expresa de cualquiera de las partes signatarias del convenio colectivo de trabajo.

Este trascendente paso en materia de modernización laboral, será seguido de otros tales como el Plan Nacional de Mejoramiento de la Calidad del Empleo, el fortalecimiento del poder de policía del trabajo a través de un Régimen Federal Unificado de Sanciones, la institucionalización del Consejo Federal de Administraciones del Trabajo y normas referidas a la seguridad e higiene en el trabajo.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

CARLOS S. MENEM.

Jorge A. Rodríguez. - Antonio E. González.
- Raúl E. Granillo Ocampo.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

CAPÍTULO I

Artículo 1° - *Contrato de trabajo de aprendizaje.* El contrato de aprendizaje tendrá finalidad formativa teórico-práctica, la que será descrita con precisión en un programa adecuado al plazo de duración del contrato. Se celebrará por escrito entre un empleador y un joven sin empleo, de entre quince (15) y veintiocho (28) años.

Este contrato de trabajo tendrá una duración mínima de tres (3) meses y una máxima de un (1) año.

A la finalización del contrato el empleador deberá entregar al aprendiz un certificado suscrito por el responsable legal de la empresa, que acredite la experiencia o especialidad adquirida.

La jornada de trabajo de los aprendices no podrá superar las cuarenta (40) horas semanales, incluidas las correspondientes a la formación teórica. Respecto de los menores se aplicarán las disposiciones relativas a la jornada de trabajo de los mismos.

No podrán ser contratados como aprendices aquellos que hayan tenido una relación laboral previa con el mismo empleador. Agotado su plazo máximo, no podrá celebrarse nuevo contrato de aprendizaje respecto del mismo aprendiz.

El número total de aprendices contratados bajo esta modalidad no podrá superar el diez por ciento (10 %) de los contratados por tiempo indeterminado en el establecimiento de que se trate. Cuando dicho total no supere los diez (10) trabajadores será admitido un apren-

diz. El empresario que no tuviere personal en relación de dependencia, también podrá contratar un aprendiz.

El empleador deberá preavisar con treinta (30) días de anticipación la terminación del contrato o abonar una indemnización sustitutiva de medio mes de sueldo.

El contrato se extinguirá por cumplimiento del plazo pactado; en este supuesto el empleador no estará obligado al pago de indemnización alguna al trabajador sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior. En los demás supuestos regirá el artículo 7° y concordantes de la presente ley.

Si el empleador incumpliera las obligaciones establecidas en esta ley el contrato se convertirá a todos sus fines en un contrato por tiempo indeterminado.

Las cooperativas de trabajo y las empresas de servicios eventuales no podrán hacer uso de este contrato.

Art. 2° - *Régimen de pasantías.* Cuando la relación se configure entre un empleador y un estudiante y tenga como fin primordial la práctica relacionada con su educación y formación, se configurará el contrato de pasantía.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social establecerá las normas a la que quedará sujeto dicho régimen.

Art. 3° - Sustitúyese el artículo 92 bis del Régimen de Contrato de Trabajo (ley 20.744, t.o.) por el siguiente texto:

Artículo 92 bis: *Período de prueba.* El contrato de trabajo por tiempo indeterminado se entenderá celebrado a prueba durante los primeros treinta (30) días. Cualquiera de las partes podrá extinguir la relación durante ese lapso sin expresión de causa y sin derecho a indemnización alguna con motivo de la extinción.

El período de prueba se regirá por las siguientes reglas:

1. Un mismo trabajador no podrá ser contratado a prueba, por el mismo empleador, más de una vez.
2. El empleador deberá registrar el contrato a prueba en el libro especial del artículo 52 de esta ley o, en su caso, en el previsto por el artículo 84 de la ley 24.467.
3. Durante el período de prueba el trabajador tendrá los derechos y obligaciones propios de la categoría o puesto de trabajo que desempeñe, incluidos los derechos sindicales, con las excepciones que se establecen en este artículo.
4. Durante los primeros treinta (30) días el empleador y el trabajador estarán obligados al pago de los aportes y contribuciones para las obras sociales y asignaciones familiares y exentos de los correspondientes a jubilaciones y pensiones. Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y Fondo Nacional de Empleo.

5. El trabajador tendrá derecho durante el período de prueba a las prestaciones por accidente o enfermedad del trabajo, incluidos los derechos establecidos para el caso de accidente o enfermedad inculpable, con excepción de lo prescrito en el cuarto párrafo del artículo 212 de esta ley.
6. Si el contrato continuara luego del período de prueba, éste se computará como tiempo de servicio a todos los efectos laborales y de la seguridad social.

Podrá ampliarse el período de prueba hasta seis (6) meses por convenio colectivo debidamente homologado.

Si se dispusiere la extensión convencional del período de prueba deberán realizarse, a partir del segundo mes, todos los aportes y contribuciones legales y convencionales, rigiendo las normas generales en materia de indemnización y preaviso. La disponibilidad colectiva de las indemnizaciones por falta de preaviso y por antigüedad en el despido incausado será de hasta el cincuenta por ciento (50 %) del régimen general.

Art. 4º - Los contratos de trabajo en período de prueba que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley se hallaren en curso, continuarán hasta su finalización conforme al régimen en el cual tuvieron origen.

A partir de la vigencia de esta ley se aplicará, en todos los casos, este nuevo régimen, salvo que un convenio colectivo posterior a su sanción establezca uno distinto, dentro de los márgenes de disponibilidad colectiva.

CAPÍTULO II

Art. 5º - Las disposiciones del presente capítulo serán de aplicación a los contratos de trabajo que se celebren a partir de la entrada en vigencia de esta ley. Sin perjuicio de ello, se les aplicarán también todas las disposiciones legales y reglamentarias que no sean modificadas por este capítulo.

Art. 6º - El contrato de trabajo no podrá ser disuelto por voluntad de una de las partes, sin previo aviso, o en su defecto indemnización, además de la que corresponda al trabajador por su antigüedad en el empleo, cuando el contrato se disuelva por voluntad del empleador.

El preaviso, cuando las partes no lo fijen en un término mayor, deberá darse con la siguiente anticipación:

- a) Por el trabajador, de quince (15) días;
- b) Por el empleador, de quince (15) días cuando el trabajador tuviese una antigüedad en el empleo de más de treinta días y hasta tres (3) meses: de un (1) mes cuando el trabajador tuviese una antigüedad en el empleo de más de tres (3) meses y no exceda de cinco (5) años; de dos (2) meses cuando el trabajador tuviese en el empleo una antigüedad de más de cinco (5) años.

Estos plazos correrán a partir del día siguiente al de la notificación del preaviso.

La parte que omita el preaviso o lo otorgue de modo insuficiente, deberá abonar a la otra una indemnización sustitutiva equivalente a la remuneración que correspondería al trabajador durante los plazos señalados.

Art. 7º - *Indemnización por antigüedad o despido.* En los casos de despido dispuesto por el empleador sin justa causa, habiendo o no mediado preaviso, éste deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a una doceava (1/12) parte de la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios, si éste fuera menor, por cada mes de servicio o fracción mayor de diez (10) días.

En ningún caso la mejor remuneración que se tome como base podrá exceder el equivalente de tres (3) veces el importe mensual de la suma que resulta del promedio de todas las remuneraciones previstas en el convenio colectivo de trabajo aplicable al trabajador al momento del despido por la jornada legal o convencional, excluida la antigüedad. Al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social le corresponderá fijar y publicar el monto que corresponda juntamente con las escalas salariales de cada convenio colectivo de trabajo.

Para aquellos trabajadores no amparados por convenios colectivos de trabajo el tope establecido en el párrafo anterior será el que corresponda al convenio de actividad aplicable al establecimiento donde preste servicios o al convenio más favorable, en el caso que hubiera más de uno.

Para aquellos trabajadores remunerados a comisión o con remuneraciones variables, será de aplicación el convenio de la actividad a la que pertenezcan o aquél que se aplique en la empresa o establecimiento donde preste servicios, si éste fuere más favorable.

El importe de esta indemnización en ningún caso podrá ser inferior a dos doceavas (2/12) partes del sueldo calculadas en base al sistema establecido en este artículo.

Art. 8º - *Despido indirecto.* Cuando el trabajador hiciese denuncia del contrato de trabajo fundado en justa causa, tendrá derecho a las indemnizaciones previstas en los artículos 6º y 7º u 11, en su caso, de esta ley.

Art. 9º - *Falta de pago en término de la indemnización por despido incausado.* En caso de falta de pago en término y sin causa justificada por parte del empleador, de la indemnización por despido incausado o de un acuerdo rescisorio homologado, se presumirá la existencia de la conducta temeraria y maliciosa contemplada en el artículo 275 de la ley 20.744 (t.o. 1976).

Art. 10. - *Fuerza mayor, falta o disminución de trabajo. Monto de la indemnización.* En los casos que el despido fuese dispuesto por causa de fuerza mayor o por falta o disminución de trabajo no imputable al empleador fehacientemente justificada, el trabajador tendrá derecho a percibir una indemnización equivalente a una dieciochoava (1/18) parte de la mejor remun-

5. El trabajador tendrá derecho durante el período de prueba a las prestaciones por accidente o enfermedad del trabajo, incluidos los derechos establecidos para el caso de accidente o enfermedad inculpable, con excepción de lo prescrito en el cuarto párrafo del artículo 212 de esta ley.

6. Si el contrato continuara luego del período de prueba, éste se computará como tiempo de servicio a todos los efectos laborales y de la seguridad social.

Podrá ampliarse el período de prueba hasta seis (6) meses por convenio colectivo debidamente homologado.

Si se dispusiere la extensión convencional del período de prueba deberán realizarse, a partir del segundo mes, todos los aportes y contribuciones legales y convencionales, rigiendo las normas generales en materia de indemnización y preaviso. La disponibilidad colectiva de las indemnizaciones por falta de preaviso y por antigüedad en el despido incausado será de hasta el cincuenta por ciento (50 %) del régimen general.

Art. 4º - Los contratos de trabajo en período de prueba que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley se hallaren en curso, continuarán hasta su finalización conforme al régimen en el cual tuvieron origen.

A partir de la vigencia de esta ley se aplicará, en todos los casos, este nuevo régimen, salvo que un convenio colectivo posterior a su sanción establezca uno distinto, dentro de los márgenes de disponibilidad colectiva.

CAPÍTULO II

Art. 5º - Las disposiciones del presente capítulo serán de aplicación a los contratos de trabajo que se celebren a partir de la entrada en vigencia de esta ley. Sin perjuicio de ello, se les aplicarán también todas las disposiciones legales y reglamentarias que no sean modificadas por este capítulo.

Art. 6º - El contrato de trabajo no podrá ser disuelto por voluntad de una de las partes, sin previo aviso, o en su defecto indemnización, además de la que corresponda al trabajador por su antigüedad en el empleo, cuando el contrato se disuelva por voluntad del empleador.

El preaviso, cuando las partes no lo fijen en un término mayor, deberá darse con la siguiente anticipación:

- a) Por el trabajador, de quince (15) días;
- b) Por el empleador, de quince (15) días cuando el trabajador tuviese una antigüedad en el empleo de más de treinta días y hasta tres (3) meses; de un (1) mes cuando el trabajador tuviese una antigüedad en el empleo de más de tres (3) meses y no exceda de cinco (5) años; de dos (2) meses cuando el trabajador tuviese en el empleo una antigüedad de más de cinco (5) años.

Estos plazos correrán a partir del día siguiente al de la notificación del preaviso.

La parte que omita el preaviso o lo otorgue de modo insuficiente, deberá abonar a la otra una indemnización sustitutiva equivalente a la remuneración que correspondería al trabajador durante los plazos señalados.

Art. 7º - *Indemnización por antigüedad o despido.* En los casos de despido dispuesto por el empleador sin justa causa, habiendo o no mediado preaviso, éste deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a una doceava (1/12) parte de la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios, si éste fuera menor, por cada mes de servicio o fracción mayor de diez (10) días.

En ningún caso la mejor remuneración que se tome como base podrá exceder el equivalente de tres (3) veces el importe mensual de la suma que resulta del promedio de todas las remuneraciones previstas en el convenio colectivo de trabajo aplicable al trabajador al momento del despido por la jornada legal o convencional, excluida la antigüedad. Al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social le corresponderá fijar y publicar el monto que corresponda juntamente con las escalas salariales de cada convenio colectivo de trabajo.

Para aquellos trabajadores no amparados por convenios colectivos de trabajo el tope establecido en el párrafo anterior será el que corresponda al convenio de actividad aplicable al establecimiento donde preste servicios o al convenio más favorable, en el caso que hubiera más de uno.

Para aquellos trabajadores remunerados a comisión o con remuneraciones variables, será de aplicación el convenio de la actividad a la que pertenezcan o aquél que se aplique en la empresa o establecimiento donde preste servicios, si éste fuere más favorable.

El importe de esta indemnización en ningún caso podrá ser inferior a dos doceavas (2/12) partes del sueldo calculadas en base al sistema establecido en este artículo.

Art. 8º - *Despido indirecto.* Cuando el trabajador hiciere denuncia del contrato de trabajo fundado en justa causa, tendrá derecho a las indemnizaciones previstas en los artículos 6º y 7º u 11, en su caso, de esta ley.

Art. 9º - *Falta de pago en término de la indemnización por despido incausado.* En caso de falta de pago en término y sin causa justificada por parte del empleador, de la indemnización por despido incausado o de un acuerdo rescisorio homologado, se presumirá la existencia de la conducta temeraria y maliciosa contemplada en el artículo 275 de la ley 20.744 (t.o. 1976).

Art. 10. - *Fuerza mayor, falta o disminución de trabajo. Monto de la indemnización.* En los casos que el despido fuese dispuesto por causa de fuerza mayor o por falta o disminución de trabajo no imputable al empleador fehacientemente justificada, el trabajador tendrá derecho a percibir una indemnización equivalente a una dieciochoava (1/18) parte de la mejor remun-

CAPÍTULO IV

Art. 17. – Sustitúyese el segundo párrafo del artículo 30 del Régimen de Contrato de Trabajo (ley 20.744, t.o. 1976) por el siguiente texto:

Los cedentes, contratistas o subcontratistas deberán exigir además a sus cesionarios o subcontratistas el número del Código Único de Identificación Laboral de cada uno de los trabajadores que presten servicios, la remuneración que tendrá cada uno de ellos, copia firmada de los comprobantes de pago mensuales al sistema de seguridad social, una cuenta corriente bancaria de la cual sea titular y una cobertura por riesgos del trabajo.

La falta de alguno de estos requisitos hará responsable solidariamente al principal por las obligaciones de dichos cesionarios, contratistas o subcontratistas respecto al personal que ocuparen en la prestación de tales trabajos o servicios y las obligaciones de la seguridad social.

Art. 18. – Créase una Comisión de Seguimiento del Régimen de Contrato de Trabajo y de las normas de las convenciones colectivas de trabajo, la que evaluará anualmente dicha normativa, pudiendo proponer reformas o modificaciones a la misma con el fin de promover y defender el empleo productivo.

Dicha Comisión de Seguimiento estará integrada por dos (2) representantes del gobierno nacional, uno de los cuales ejercerá la presidencia, el presidente del Consejo Federal de Administraciones del Trabajo o un representante miembro que éste designe al efecto, dos (2) representantes de la Confederación General del Trabajo y dos (2) representantes de las organizaciones más representativas de empleadores.

Art. 19. – Todos los contratos de trabajo, así como las pasantías, deberán ser registrados ante los organismos de seguridad social y tributarios en la misma forma y oportunidad que los contratos de trabajo por tiempo indeterminado.

Las comunicaciones pertinentes deberán indicar:

- a) El tipo de que se trate;
- b) En su caso, las fechas de inicio y finalización del contrato.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tendrá libre acceso a las bases de datos que contengan tales informaciones.

Art. 20. – El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social será la autoridad de aplicación de la presente ley.

Art. 21. – Deróganse los artículos 18, inciso b), 31, última parte, 28 a 40 y 43 a 65 de la ley 24.013, los artículos 1º, 3º, 4º y 5º de la ley 24.465, y el artículo 89 de la ley 24.467.

Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

CARLOS S. MENEM.

Jorge A. Rodríguez. – Antonio E. González.
– Raúl E. Granillo Ocampo.

Dictamen de comisión en minoría

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha considerado el proyecto de ley P.E.-16/98 del Poder Ejecutivo nacional, sobre reforma laboral; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja el rechazo total.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 122 del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 5 de mayo de 1998.

Alcides H. López. – Raúl A. Galván. – Luis A. León.

ACLARACIÓN

Los antecedentes no se publican por estar inserto en el Orden del Día N° 288.

Sr. Presidente (Cafiero). – En consideración en general.

Tiene la palabra el señor senador por Tucumán.

Sr. Miranda. – Señor presidente, señores senadores: el mensaje y proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, que lleva el número 16/98, trata sobre la reforma laboral.

Brevemente, haré referencia a algunas consideraciones de orden político que atañen a este proyecto.

La iniciativa del Poder Ejecutivo se muestra como la solución eficiente a las relaciones laborales desde una posición de alto contenido social. Esas relaciones laborales se fueron deteriorando como una consecuencia no querida de las grandes transformaciones de nuestro país.

Rescatar la idea del hombre como centro de todo proceso económico supone elaborar una fórmula social que no está reñida con los postulados y los objetivos económicos. Es necesario –y, por que no, también representa un desafío– poner en práctica nuevas y creativas medidas que contribuyan a revitalizar la dimensión del trabajo como vehículo de desarrollo y crecimiento de los hombres.

Con esta reforma laboral se pretende establecer el equilibrio de las relaciones laborales centrando dentro de un punto esencial el restablecimiento del empleo pleno y estable.

Las modalidades promovidas fueron el resultado de una solución de coyuntura que tuvo un efecto no querido, no deseado, consecuencia de su mala utilización y uso abusivo por falta de fiscalización y de control adecuado. Lo que se quiso poner en marcha fue la contratación por determinado tiempo.

po, no de forma permanente, pero lo que resultó permanente fue su utilización indiscriminada, que llevó a la degradación de la relación laboral.

Una parte del sector empresario hizo uso de estas modalidades con el fin no ya de crear nuevos puestos de trabajo, sino exclusivamente con el objeto de obtener los beneficios económicos que este tipo de contratación le proporcionaba. Como contrapartida, el trabajador se vio sujeto a una rotación y a un régimen contractual que no sólo no garantizaba su estabilidad, sino que, además, lo excluía de los beneficios presentes y futuros que otorga la seguridad social.

Por ello, entiendo que el presente proyecto tiende a restablecer ese equilibrio, que no sólo traerá consecuencias beneficiosas al trabajador y al grupo familiar, sino, además, a las empresas.

El proyecto procura alcanzar objetivos comunes de todos los sectores y será el instrumento legal que asegure la transparencia, la estabilidad y la jerarquía de la relación del trabajo.

Vale aquí considerar que el presente proyecto guarda similitud en cuanto a su fin con el Acuerdo Español celebrado en abril de 1997 entre las centrales de trabajadores y el centro empresario, acuerdo que luego fue ratificado por el gobierno. Este acuerdo privilegiaba el contrato por tiempo indeterminado, en desmedro de las modalidades de contratación promovidas.

El contexto español se caracterizaba por una alta tasa de desempleo y por una grave rotación laboral que traían como consecuencia perjudiciales efectos sobre la población trabajadora, el crecimiento económico, el funcionamiento de las empresas y el sistema de protección social.

A través del acuerdo, los actores sociales especiales crearon las herramientas necesarias no sólo para la mejora del empleo, la reducción de la temporalidad y de la rotación, sino, además, para lograr una mayor competitividad a nivel empresario.

La experiencia española nos demuestra a las claras los beneficios alcanzados por el referido acuerdo.

El secretario General de Empleos español, hace muy poco tiempo, anunció que desde la entrada en vigencia de la reforma laboral se celebró un promedio de 2.400 contratos diarios. Asimismo, mientras la contratación estable en 8 meses superó los 68.000 casos, durante 1996 sólo se registraron 53.000. Incluso, en un solo mes se había registrado el 1,01 por ciento de caída del nivel de desempleo.

En síntesis, podemos decir que la estabilidad en el empleo garantiza al trabajador, además de su tranquilidad, la incorporación a la seguridad social, la posibilidad de acceder a una jubilación en el futuro e, incluso, hasta su incorporación al mercado de consumo (por ejemplo, a través de la obtención de créditos). En la actualidad, el trabajador tiene vedados todos estos beneficios si su relación laboral se encuentra regulada por una modalidad promovida.

Ya en el marco jurídico, y a título de introducción general, diré que el Capítulo I del proyecto de ley de reforma laboral remitido por el Poder Ejecutivo a este Honorable Senado de la Nación enuncia las únicas tres modalidades que subsistirán en el nuevo marco legal que regirá las relaciones del área. Me refiero al contrato de trabajo, al de aprendizaje, al régimen de pasantías y al período de prueba. En consecuencia, se derogan las demás modalidades existentes.

Se mantienen los contratos de aprendizaje y de pasantías en razón de su trascendental importancia, si realmente cumplen con el fin perseguido, que conforme su propia definición, es capacitar a los jóvenes que se insertan en el mercado laboral. Por ello este proyecto de ley, especialmente en lo que se refiere al contrato de aprendizaje, tiende a garantizar el fin antes expuesto.

Por su parte, la reducción del período de prueba es consecuencia lógica del nuevo sistema indemnizatorio que contempla esta iniciativa.

La reforma propuesta tiende a evitar la inestabilidad y la precarización surgidas de las modalidades que se derogan, al permitir que el trabajador cuente con cobertura social, así como con la adecuada defensa de sus derechos laborales.

En el Capítulo II, que abarca los artículos 5° a 11, se modifica el régimen de indemnización previsto por la ley de contrato de trabajo. Se flexibiliza la rigidez de la extinción del contrato de trabajo para todos los que inician una nueva relación laboral, ya que se aplica exclusivamente a los contratos que se celebren con posterioridad a la entrada en vigencia del presente proyecto de ley.

Se contempla un nuevo sistema indemnizatorio por el que se modifica el preaviso y se suprime la integración del mes de despido. En cuanto a la indemnización por antigüedad en el despido incausado, se deroga el mínimo legal de dos meses y se establece el equivalente a la doceava parte de la mejor remuneración mensual, normal y habitual como indemnización por cada mes trabajado o frac-

ción mayor de 10 días, con un mínimo de dos doceavas partes.

Acorde con los preceptos constitucionales y con las legislaciones más modernas, se introduce la figura del despido discriminatorio con régimen indemnizatorio agravado, quedando la carga de la prueba en cabeza de quien la invoca.

Al establecerse un sistema de porcentaje mensual, suprimirse la integración del mes de despido y derogarse el mínimo legal de dos meses, se adecuan considerablemente las indemnizaciones para los trabajadores que tengan un año de antigüedad. Es la manera en que el proyecto trata que la derogación de las modalidades promovidas que estaban exentas de todo pago no impacte en la tasa de desempleo.

El Capítulo III, que abarca desde el artículo 12 al 16 inclusive, trata de la situación de los convenios colectivos en aquellos convenios que con posterioridad al 1º de enero de 1998 no hayan sido renovados o sustituidos por otros acuerdos. Se impide de esta forma un salto al vacío y una extinción masiva de los convenios, que haría que los trabajadores se vieran amparados solamente por la Ley de Contrato de Trabajo, debiendo discutir desde cero, sin tener en cuenta los derechos adquiridos.

Se intenta resolver a partir de esta propuesta el tema que más se ha discutido en el sector empresario, habiéndose incorporado en el articulado pertinente que un acuerdo colectivo de ámbito menor vigente no podrá ser afectado por una ulterior convención colectiva de ámbito mayor. Esta era una de las máximas aspiraciones del sector empresario.

El Capítulo IV en su artículo 17 modifica el sistema de solidaridad establecido por el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, regulando en forma más precisa los requisitos eximentes de la responsabilidad del contratista principal.

La eliminación de las modalidades promovidas de contratación y el acotamiento del período de prueba, por un lado, y la reducción de las indemnizaciones por despido y preaviso, por el otro, establecen un balance o equilibrio de las relaciones individuales del trabajo.

Por estas razones, desde la comisión y desde nuestro bloque vamos a apoyar esta iniciativa, con la convicción de que estas reformas apuntan a hechos sustanciales y de alto contenido social, como es lograr el empleo estable.

Me reservo el derecho de hacer las consideraciones que correspondieren y las modificaciones que la comisión va a proponer en el momento del tratamiento en particular.

Sr. Presidente (Cafiero). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos, del bloque de la Unión Cívica Radical.

Sr. López. — Señor presidente: la Unión Cívica Radical, la Alianza, ha rechazado en comisión, por medio de un dictamen en minoría, el proyecto del Poder Ejecutivo que ha terminado de fundamentar el señor presidente de la comisión.

¿Qué es? ¿A qué se debe? ¿Cómo están las cosas en el mercado laboral argentino? Es evidente que no hay acuerdo social ni político en la Argentina para el tratamiento de este proyecto. Los grupos de manifestantes que hoy pedían frente a las puertas del Congreso que no se tratara esta nueva forma encubierta de seguir flexibilizando la relación laboral; las idas y vueltas del ministro de Trabajo en el Fondo Monetario —adonde viajó a dar explicaciones—, quien presumiblemente habría solicitado que no se incluya un artículo que sorpresivamente fue incluido ayer en la comisión, transformando los contratos promovidos en empleo indeterminado y que fue sacado antes de que empezara la sesión en este recinto; la disconformidad del Grupo de los Ocho, que plantea un proyecto alternativo; y la disconformidad del MTA y del CTA con ese proyecto, hacen que el clima social en el que se pretende sancionar la reforma nos parezca inoportuno.

Puedo mencionar los datos actuales de la encuesta permanente de hogares del INDEC. Hay una población económicamente activa de 12.800.000 trabajadores; una desocupación del 13,8 por ciento —según datos oficiales—, lo que representa 1.766.400 personas; una ocupación que comprende a 11.033.600 personas; el número de ocupados asalariados asciende a 7.723.520 personas; el empleo público comprende a 900.000 trabajadores; el servicio doméstico a 600.000; y el total de trabajadores en relación de dependencia, excluidos los del sector público y del servicio doméstico, asciende a 6.223.520.

Por su parte, en mayo de 1997, el total de aportantes al sistema de jubilaciones y pensiones era de 3.925.215 personas, y a igual fecha el total de aportantes a las ART era de 4.108.602 personas.

Desagregando la estimación por puro empleo, empleo público y empleo doméstico, el total de tra-

trabajadores registrados—calculado sobre la base de importantes al sistema integrado de jubilaciones y pensiones y a aseguradoras de riesgo del trabajo—es de 3.045.863 personas.

La desfinanciación que el empleo en negro provoca a los sistemas de obras sociales y previsionales—tanto al sistema de reparto como al integrado de jubilaciones y pensiones—alcanza al 10 por ciento.

En este marco estamos tratando el proyecto.

Además, hay que decir que en la Argentina prácticamente no existe la policía del trabajo, que no puede controlar el empleo en negro ni el cumplimiento de las condiciones laborales en razón de su desfinanciación. Lo que ocurre es que ha sido transferida a jurisdicción de las provincias, a las que no se les transfirieron los recursos pertinentes. En efecto, los ministerios y las secretarías de Trabajo provinciales carecen de los recursos para fiscalizar las relaciones laborales en los distintos aspectos de la actividad productiva.

En cuanto al trabajo en negro, se encuentran en esta condición tres millones y pico de trabajadores. Pero a esto se le debe agregar el trabajo en negro estatal. Se está pretendiendo, con buenas razones, que se blanquee el trabajo en negro de las empresas privadas, pero sin que haya fiscalización, con lo cual no hay forma de acotarlo. A su vez, el Estado mantiene el empleo en negro a través de los planes Trabajar, de la utilización de pasantías y de sistemas de aprendizaje, también con el fin de evadir de alguna manera las obligaciones previsionales y sociales de los trabajadores, quienes no tienen ninguna garantía de estabilidad, lo que provoca el desaliento de millares de jóvenes argentinos que necesitan ingresar al mercado de trabajo con un empleo estable.

En este marco, es prácticamente imposible acotar el problema.

Recién me preguntaban cuáles son los motivos por los que no hay acuerdo político para el tratamiento del tema. No hay acuerdo social ni acuerdo político, incluso en el oficialismo.

El diputado justicialista Sebastiani, del Grupo de los Ocho, que plantea proyectos alternativos, durante todos estos meses ha estado poniendo palos en la rueda al proyecto de su propio partido y de la CGT. Cuando esto parece una interna del Partido Justicialista, nos ponemos a tratar parcialmente el problema del trabajo en la Argentina, que necesita de un acuerdo social como el logrado en otros países, fundamentalmente en España, según lo mani-

festado por el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

En todo este panorama aparecen resentidos actores sociales que estaban dialogando con el gobierno y que resultaron ser sancionados con esa cláusula transitoria que se incluyó ayer y que se sacó hoy, antes del tratamiento del proyecto en el recinto, por la cual se transformaban los contratos modales vigentes en empleos estables, situación que podría provocar desempleo. A ello se suma el decreto que ayer dictó el Poder Ejecutivo, que otorga a las organizaciones sindicales nacionales derecho a veto con respecto a la elección de las obras sociales. Pareciera que al no poder llegarse a un acuerdo con los grupos empresarios, desde el sector oficialista se los empieza a amenazar con el latiguillo en la mano. Esta es la situación en que nos encontramos para tratar este proyecto.

Se dice que es bueno que se eliminen los contratos basura. Debe tenerse en cuenta que estamos hablando de los contratos basura que instaló el oficialismo. Palabras más o palabras menos de las que decía el señor presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, era lo que señalábamos nosotros cada vez que se traía a la Cámara de Diputados o al Senado una nueva modalidad promovida. Decíamos que esas leyes no generan trabajo legal, sino trabajo en negro y desfinanciación de las obras sociales y del sistema previsional. Asimismo, van a provocar una rotación en el empleo porque en este marco, es decir, sin crecimiento económico, los empleadores van a despedir a los trabajadores más caros, o sea, los antiguos y con cargas de familia, y van a utilizar estas modalidades promovidas para abaratar el costo laboral. Y esto se produjo.

Casualmente, se venía diciendo que ahora, en este marco de crecimiento, desde el oficialismo era posible dar marcha atrás en estas modalidades de contratos basura que promovían el trabajo en negro y la desfinanciación del sistema previsional. Pero hoy, casualmente, todos los matutinos y los noticieros informan que se paró el crecimiento. La Argentina no crece más. No hay recaudación previsional ni tributaria, y existe un grave desfase en el comercio exterior.

Hasta estos argumentos se caen cuando se quiere justificar el tratamiento de este proyecto. ¿Puede ser viable este proyecto teniendo en cuenta las opiniones diversas del propio oficialismo? ¿Puede ser viable este proyecto en el marco de un des- acuerdo social, signado por las expresiones de todos sus componentes? ¡Claro que estamos de

acuerdo con eliminar los contratos basura! Pero esto tiene que hacerse en un marco de regulación total, en el marco de un acuerdo social que posibilite que las leyes que se pongan en práctica se traduzcan en un aumento de la productividad que beneficie en realidad a los trabajadores argentinos, con sentido social.

No es posible, señor presidente, que se deje librada a la disponibilidad colectiva el período de prueba, el preaviso o la antigüedad para que se reduzcan las indemnizaciones de estos dos últimos conceptos hasta en un 50 por ciento. De alguna manera se estaría violando la garantía constitucional contra el despido arbitrario y se estaría dejando que los actores sociales operen sobre algo que debiera ser legislado por el Congreso de la Nación.

Este proyecto también deja librado a la negociación colectiva el período de prueba de 30 días para extenderlo hasta 180 días. Las empresas manejan en este momento una concentración de poder económico jamás vista en la República Argentina, frente a la desprotección y el desentendimiento del Estado en materia de relaciones de trabajo y a la flaqueza de las fuerzas del sector trabajador que está acosado por millones de desocupados que están buscando trabajo y que imperiosamente necesitan conseguirlo. Esta situación promoverá que todas las flexibilidades que se viabilizan en esta iniciativa sean aprovechadas al máximo por las empresas para hacerlas efectivas hasta los límites máximos permitidos por la ley en los convenios que se vayan celebrando.

También se disminuye el preaviso y la indemnización. Incluso, en algunas informaciones oficiales se ha tergiversado la forma en que se abarata el despido con esta legislación; esto, nuevamente, puede promover en el futuro despidos masivos en la Argentina.

Tampoco es cierto que se legisle para el futuro. Se legisla para siempre. Si bien es cierto que esto va a regir para los contratos nuevos, la ley tiene efectos de perdurabilidad.

Esta iniciativa llega al recinto después de haberse dictado una serie de normas que han precarizado el trabajo en la Argentina: los decretos 1.477/89 y 1.478/89, que posibilitaron el pago de las remuneraciones de los trabajadores en vales alimentarios y que fueron calificados por los sectores asalariados como pago en negro; los contratos flexibles de la ley 24.013, de empleo; la ley de accidentes de trabajo, que no dio los resultados previstos, por lo cual miles de trabajadores argen-

tinios están reclamando sus indemnizaciones y compensaciones por los riesgos, accidentes y enfermedades que han sufrido en su trabajo, sin que puedan encontrar una vía práctica para hacerla efectiva; la ley 24.467, que estableció el período de prueba sin aportes ni contribuciones, el contrato de aprendizaje y el contrato de fomento especial de empleo; el decreto 432/95, que estableció el tiempo parcial, merced al cual el trabajador voluntariamente, puede no afiliarse a la obra social sindical; la ley sobre pequeñas y medianas empresas, por la que se crearon cuatro contratos basura; la ley 24.467, que redujo la obligación de otorgar preaviso de un mes para las pequeñas y medianas empresas; se eliminó la integración del mes de despido; se promovió que por el convenio colectivo de trabajo, violándose el orden público laboral, se pueda dividir en tres el pago del aguinaldo; que se puedan otorgar las vacaciones en cualquier momento del año y que se deroguen las indemnizaciones por despido; se terminó o se redujeron tres meses la ultraactividad en las empresas a través de los convenios colectivos de trabajo; la ley 24.522, de concursos y quiebras, que posibilitó que las empresas en convocatoria o en quiebra suspendan la vigencia del convenio colectivo de trabajo; y, finalmente, la ley de conciliación obligatoria.

Todas esas normas han dado como resultado la cantidad de desempleo, de desocupados y de trabajo en negro que hoy tenemos en la Argentina. Es cierto que el oficialismo tiene derecho a rectificar su política, sobre todo cuando está a plazo fijo analizando cómo se va del poder. Y a lo mejor convendría facilitar que lo hagan para ver si con esta nueva ley pueden promover aquello que no pudieron hacer durante los ocho años anteriores.

No hay acuerdo social. No se ve el fin práctico de esta ley para garantizar que los trabajadores argentinos tengan el puesto estable que desean, la obra social y sistema previsional, y que funcionen todos estos mecanismos de seguridad social.

También con esta ley se disminuye el preaviso. Se prevé que corra a partir del día siguiente de su notificación. No hay mes de despido integrado.

Se manifiesta que estas modificaciones solamente afectan a los trabajadores de menor antigüedad en sus empleos.

Por ejemplo, un trabajador que gana 635 pesos mensuales —tengo un trabajo al respecto—, con menos de tres meses de antigüedad, despedido el 31 de marzo no tiene indemnización por despido ni con la ley vigente ni con el proyecto oficial. Según las normas vigentes tiene una indemnización

sustitutiva de 635 pesos y según el proyecto oficial se reduce a la mitad, o sea, 317,50 pesos. El sueldo anual complementario sobre el mes de despido es de 52,91 pesos según la ley vigente y de 26,46 pesos de acuerdo con el proyecto oficial. En estas condiciones el trabajador percibe en total la suma de 687,91 pesos con la ley vigente y solamente 443,96 pesos por el proyecto oficial.

Veamos otro ejemplo. Un trabajador que gana 635 pesos mensuales, con menos de tres meses de antigüedad, despedido el 1° de abril. No se prevé indemnización por despido en la ley vigente ni en el proyecto oficial. La indemnización sustitutiva de preaviso es de 635 pesos en la ley vigente y en el proyecto oficial es la mitad, o sea, 317,50 pesos. El sueldo anual complementario sobre mes de preaviso es de 52,91 pesos en la ley vigente y de 26,46 pesos en el proyecto oficial. La integración del mes de despido es de 635 pesos en la ley vigente y en el proyecto oficial no existe. El sueldo anual complementario sobre mes de despido es de 52,91 pesos en la ley vigente y en el proyecto oficial no se prevé. Este trabajador en estas condiciones cobraría al ser despedido el 1° de abril un total 1.375,82 pesos en la ley vigente y solamente 443,96 pesos según el proyecto oficial.

Pasamos a otro ejemplo. Un trabajador que gane 635 pesos con cuatro meses de antigüedad, despedido el 2 de abril de 1998. La indemnización por despido es de 1.270 pesos en la ley vigente y de 264 pesos en el proyecto oficial. La indemnización sustitutiva de preaviso es de 635 pesos tanto en la ley vigente como en el proyecto oficial. El sueldo anual complementario sobre mes de preaviso sería de 52,91 pesos en los dos casos. La integración del mes de despido es de 635 pesos en la ley vigente y no está prevista en el proyecto oficial. El sueldo anual complementario sobre mes de despido es de 52,91 pesos en la ley vigente y no existe en el proyecto oficial. El trabajador en estas condiciones cobraría un total de 3.145,82 pesos según la ley vigente y 951,91 pesos en el proyecto oficial.

El mismo trabajador con dos años de antigüedad cobra por indemnización por despido 1.270 pesos tanto en la ley vigente como en el proyecto oficial. La indemnización sustitutiva de preaviso es de 635 pesos en la ley vigente y en el proyecto oficial. La integración por mes de despido es de 635 pesos en la ley vigente y no existe en el proyecto oficial. El sueldo anual complementario sobre mes de despido es de 52,91 pesos en la ley vigente y no existe en el proyecto oficial. En estas condiciones el trabajador tiene derecho a percibir

un total de 3.145,82 pesos según la ley vigente y de 1.957,91 pesos de acuerdo con el proyecto oficial.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, senador Jorge R. Yoma.

Sr. López. — Veamos el mismo caso de este trabajador con diez años de antigüedad. La indemnización por despido tiene valores iguales en la ley vigente y el proyecto oficial: 6.350 pesos. La indemnización sustitutiva de preaviso es de 1.270 pesos tanto en la ley vigente como en el proyecto oficial. El sueldo anual complementario sobre mes de preaviso es de 105,83 pesos en la ley vigente y en el proyecto oficial. La integración por mes de despido es de 635 pesos en la ley vigente y no existe en el proyecto oficial. El sueldo anual complementario sobre mes de despido es de 52,91 pesos en la ley vigente y no se prevé en el proyecto oficial.

Este trabajador recibiría en total, según la ley vigente, 8.413,74 pesos y con el proyecto oficial 7.725,83 pesos. Es decir que se disminuyen las indemnizaciones por despido para todos los trabajadores, por más que se argumente y se exprese que solamente se baja para los trabajadores de menor antigüedad y que esto posibilitaría la reducción del período de prueba.

No existe en el proyecto oficial el mes de despido integrado ni tampoco en el supuesto del despido discriminatorio.

Se dice que el artículo 11 es un avance, que ahora se va a pagar la indemnización con más el 30 por ciento por despido discriminatorio y que en este caso no regirán los topes de los tres meses de indemnización máxima que fijan otros artículos de esta ley.

Esto no es cierto. La ley antidiscriminatoria de la República Argentina, la Constitución Nacional y los tratados internacionales garantizan la protección contra el despido discriminatorio. Y el trabajador, ante estas condiciones, no solamente puede reclamar las indemnizaciones de la Ley de Contrato de Trabajo sino que además puede exigir la indemnización integral por el daño material y moral causado por la discriminación.

En este proyecto se acotan las causales. Comparando la ley antidiscriminatoria con los tratados internacionales, estos últimos contemplan muchos más supuestos que el proyecto oficial, el cual habla solamente de tres aspectos: los motivos raciales, sexuales y de religión. En los tratados son

muchos más amplios los motivos por los cuales se entiende que un despido es discriminatorio.

Entonces, esta justificación que se pretende dar tampoco es valiosa para decir que con este proyecto se logra un avance.

Respecto de la negociación del convenio colectivo, se puede negociar por empresa pero solamente en aquellos casos en que tengan más de quinientos trabajadores. Es decir que la ínfima minoría de las empresas que existen en la Argentina podrán hacerlo a través de un delegado de la empresa, apoyando la negociación de su sindicato.

Pero, ¿qué sucede? El delegado de la empresa no es elegido por los trabajadores. El delegado de la empresa, que va a acompañar al sindicato, va a ser elegido por el sindicato. Y siempre se privilegia en el convenio colectivo de trabajo a la organización sindical con personería gremial en grado superior, cuando se debería favorecer la negociación de las empresas con los sindicatos de primer grado, que son los que están al tanto de los problemas de los trabajadores, y no a las federaciones, que a lo mejor están totalmente fuera de los problemas empresariales, por más que en el proyecto oficial la federación pueda auditar al sindicato que negocia.

Pero puede no hacerlo, puede inhibirse de negociar con un delegado del personal elegido por ella misma, con lo cual se borraría toda la representación auténtica y democrática de los trabajadores en la empresa para negociar con los patronos.

Es cierto que tiene que ser una organización sindical la que negocie. Pero no creemos que sea necesario poner esta facultad siempre en cabeza de la organización sindical con personería gremial de grado superior para que maneje los hilos de la negociación y decidir cuándo negocia ella y cuándo el sindicato de primer grado.

Es cierto que se establecen algunos sistemas en este proyecto que de alguna manera acotan el tema de la solidaridad en el caso de la tercerización del trabajo: código único para liberarse de las obligaciones del contrato de trabajo, del código único de identificación laboral, de la constancia de pago de la remuneración, de la copia firmada de los compromisos de pago mensual del sistema de seguridad social, una cuenta corriente bancaria y una cobertura de los riesgos del trabajo.

Tengo una cita de un maestro del derecho del trabajo argentino, Ernesto Krotoschin, que analiza los motivos de este sistema de la solidaridad. Dice

que el otorgamiento de este amparo especial se explica por el hecho de que el trabajo ejecutado por el contratista y los trabajadores a su cargo se hace exclusivamente por cuenta del empresario principal. Siempre es a cuenta del empresario principal, que es el que ordena la cuestión. También dice que el contratista, para hacer frente a los créditos de su personal, muchas veces depende de los pagos efectuados por aquél, sobre todo tratándose de obras de mayor importancia que tal vez excedan la capacidad económica del contratista. (Tratado práctico de derecho del trabajo, página 142, 1962.) Tratadistas como Justo López, Norberto Centeno y Juan Carlos Fernández Madrid han defendido el sistema de la solidaridad empresarial.

Entonces, nos parece que sin un acuerdo social que no existe y está patente; con discrepancias aunque no la tengan los senadores del oficialismo con un ministro de Trabajo que tiene que salir corriendo a rendir cuentas y a explicar por qué tiene que sancionar este proyecto ahora y no con lo que se comprometió hace pocos meses con el Fondo Monetario Internacional y que puede acarrearle sanciones a la Argentina; con un diputado del Grupo de los Ocho poniéndole palos en la rueda al desarrollo del proyecto oficial y amenazando con no habilitar su tratamiento o, por lo menos, intentar torcer el sentido del proyecto si fuera aprobado por este Senado; con los grupos sindicales en la calle esta misma tarde tratando de decirnos que no aprobemos este proyecto de ley y con todas las desventajas que he señalado sobre esta iniciativa hemos decidido rechazarla y decir también, con mucha claridad, que no compartimos la propuesta que presentó el Grupo de los Ocho en la Comisión de Trabajo.

Sr. Presidente (Yoma). — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes, Partido Autonomista.

Sr. Romero Feris. — Señor presidente: en nombre del bloque autonomista y por las razones que expondré a continuación vengo a fundar mi rechazo al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo de la Nación que modifica el Régimen de Contrato de Trabajo y la normativa vigente en materia de convenciones colectivas.

El proyecto ha sido motivo de largos trabajos y enmarañados trámites previos que después de numerosas marchas y contramarchas han conducido a un producto híbrido que en definitiva no conforma a las partes interesadas y tampoco a la ciudadanía que está profundamente preocupada con el problema de la desocupación.

Este, según lo indican las encuestas, constituye hoy el mayor motivo de inquietud de la población, sin distinción de edad, situación económica o lugar de residencia. Y debemos reiterar que el desempleo no se soluciona con este tipo de normas que se refieren a aspectos formales, que en última instancia son instrumentales, sino con modificaciones de fondo que protejan a la pequeña y mediana empresa, que es la que genera el mayor número de empleos, que promueven las economías regionales que han sido devastadas y a las empresas rurales de familia que están jaqueadas por la falta de acceso al crédito.

La negociación de este proyecto ha estado signada por dos premisas que se han calificado como contrapuestas y que considero son falsas. Por una parte, que el trabajador está excesivamente protegido por la legislación vigente; por la otra, que la ampliación de las fórmulas de contratación perjudica a aquel sector.

No ignoro que es imprescindible lograr una normativa que contemple las necesidades actuales de los empresarios, que deben afrontar nuevas exigencias derivadas de una economía globalizada y altamente competitiva. Pero también, señor presidente, es necesario e imprescindible salvaguardar los derechos básicos de los trabajadores que están expresados en el artículo 14 bis de la Constitución. Entre ellos, en el tema que nos ocupa, se destaca la protección contra el despido arbitrario.

A su vez, frente a normas como las referentes al preaviso, que pudieron resultar excesivamente rígidas, es necesario lograr una flexibilidad que no implique precarizar las relaciones del trabajo.

Tengo la convicción de que deben mantenerse las instituciones vigentes que protegen al trabajador y, en especial, que es un imperativo de toda política de empleo desalentar los despidos incausados.

La inestabilidad laboral produce un estado de ansiedad y angustia en la mujer y el hombre de trabajo que, en última instancia, conspira contra los intereses individuales y colectivos de la actividad económica. Pero también tengo la convicción de que deben encontrarse soluciones legítimas que faciliten el acceso de los jóvenes a su primer empleo.

El proyecto que se somete a este Senado no brinda, a mi criterio, solución cabal a ninguno de los problemas que encara.

Por una parte, los plazos del preaviso siguen siendo rígidos. Por la otra, continúa la vigencia de con-

tratos precarios que hacen posible el fraude laboral y crean problemas en el financiamiento de la seguridad social.

Voy a entrar directamente al proyecto en sí. El artículo 1º modifica el sistema vigente en lo que se refiere al denominado contrato de trabajo de aprendizaje.

La capacitación técnica es un punto fundamental para el fortalecimiento de la industria, sobre todo de la pequeña y mediana, y una de las características básicas de su regulación consiste en que deben preverse distinciones claras y específicas que tengan en cuenta las distintas formas de aprendizaje y la magnitud de las empresas. Esto con el fin de que, en la práctica, esta forma de contratación no se desvirtúe y se convierta en una modalidad que encubre ventajas que son exclusivas del empleador y que los mismos considerandos del proyecto señalan que han causado graves distorsiones en las relaciones del trabajo.

Estos recaudos deben ser contemplados en la ley y un punto mínimo es prever una distinción entre las empresas de acuerdo con su magnitud, de modo que sea distinta su regulación cuando se refiere a un taller con un número escaso de obreros que cuando se trata de una gran empresa. Las relaciones entre el aprendiz y quien controla su trabajo difieren sensiblemente en ambas situaciones.

Entiendo también que no se justifica que la edad máxima para el contrato sea fijada en veintiocho años. A esta edad la capacitación del trabajador ya debe estar perfilada. Es obvio que en estas circunstancias no puede hablarse de un aprendiz.

Consideramos que en estos aspectos el proyecto omite delinear con claridad una institución cuyo propósito fundamental es promover el empleo de quienes carecen de experiencia anterior. Tengo la convicción de que el contrato de aprendizaje constituye una modalidad apta para fortalecer la pequeña y mediana empresa y para ayudar a quienes acceden a su primer empleo. Pero su regulación debe ser minuciosa con el objeto de que no pueda servir de cuña para introducir fraudes laborales.

El proyecto ratifica la vigencia del contrato de pasantía. La única modificación al sistema actual consiste en que se delega en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la determinación de las reglas a las que quedará sujeto. Entiendo que esta norma es inconstitucional por las siguientes razones que paso a exponer.

El proyecto dispone delegar en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social su regulación, pero no establece pautas ni bases para ello. Esto contradice en forma expresa lo dispuesto por el artículo 76 de la Constitución, que dispone que el Poder Ejecutivo debe actuar dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca. Reitero que, de acuerdo con el proyecto, el Congreso omite toda base o pauta que brinde marco a la delegación. En segundo lugar, la Constitución es inequívoca en el sentido de que el Congreso sólo puede delegar el ejercicio de la competencia legislativa en el Poder Ejecutivo. Es por demás sabido que en nuestro sistema el Poder Ejecutivo es unipersonal y ejercido por el presidente de la Nación y no, desde luego por los ministros. Por su parte, el inciso 12 del artículo 100 dispone que el jefe de Gabinete de Ministros debe refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso. En consecuencia, la delegación en el Ministerio de Trabajo está en contradicción con el sistema establecido por la reforma constitucional de 1994 para esta institución y no puede contar con la aprobación del Congreso de la Nación.

Lamentablemente la pretensión del proyecto de sancionar los despidos discriminatorios, por su diseño defectuoso está destinada al fracaso. La enumeración de tres conceptos, sexo, raza, religión, no hace sino limitar, excluyendo otros motivos de discriminación. El Convenio sobre la Discriminación en el Empleo y Ocupación, ley 17.677, que tiene jerarquía superior a las leyes de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 75, inciso 22, de la Constitución, define que el término discriminación comprende "cualquier distinción, exclusión o preferencia basadas en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social". En el ámbito del trabajo la discriminación se da en distintos planos vinculados con las posibilidades de acceso, las enfermedades y, en determinadas ocasiones, los accidentes laborales sufridos con anterioridad; y no puede desconocerse que los despidos muchas veces se producen como consecuencia de antecedentes basados en estos supuestos.

Nuestra Constitución, a través de la incorporación de los tratados internacionales, prohíbe toda clase de discriminación. En consecuencia, entiendo que una correcta reglamentación de este principio, en el tema que nos ocupa, implica incorporar en la legislación los amplios parámetros determinados por esas cláusulas que, en general, califican como discriminatorias a las distinciones realizadas

por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Debe dejarse al criterio judicial establecer cuándo un despido puede calificarse de discriminatorio de acuerdo con los amplios parámetros de la Constitución.

Por su parte, el incremento previsto para los despidos discriminatorios que establece el proyecto, debe ser sólo una base indemnizatoria cuando el trabajador no pruebe daños mayores. Es incorrecta, también, la solución de imponer la carga de la prueba a quien ha sido despedido. Es evidente que, en estos casos lesivos a la dignidad, la prueba debe ser compartida. Sin duda que el trabajador deberá probar determinados presupuestos objetivos. Pero corresponderá al empresario la prueba de que su determinación fue tomada dentro de los presupuestos normales y en el marco de un razonable concepto de generalidad. Es necesario tener en cuenta que el trabajador no controla la documentación empresarial y, por lo tanto, su posibilidad de aportar prueba está disminuida.

Nos parece innecesaria la cláusula del artículo 9º que prevé que, en caso de falta de pago en término y sin causa justificada por parte del empleador de la indemnización por despido incausado o de un acuerdo rescisorio homologado, se presumirá la existencia de la conducta temeraria y maliciosa contemplada en el artículo 275 de la Ley de Contrato de Trabajo.

En efecto, esta disposición constituye una directiva para la interpretación de los jueces, las que siempre son inconvenientes, cuando no peligrosas.

El artículo 275 de la Ley de Contrato de Trabajo ya prevé que cuando se declarara maliciosa o temeraria la conducta asumida por el empleador que perdiera total o parcialmente el juicio será condenado a pagar un interés de hasta dos veces y media el que cobran los bancos oficiales para operaciones corrientes de descuento de documentos comerciales. Esta norma es suficientemente clara y no advierto el motivo por el cual se ha decidido por vía legal establecer pautas estrictas de interpretación que están dirigidas a los jueces.

Si el proyecto señala el criterio de presumir la existencia de conducta temeraria en los casos de falta de pago de la indemnización por despido incausado, no advertimos la razón por la cual se excluye de este criterio a los casos de los despidos en que se invoca fuerza mayor o falta de trabajo, en los que no se abonan las indemnizaciones previstas por la ley.

Nampero advertimos con claridad el fundamento para modificar el artículo 30 del régimen de contrato de Trabajo vigente. Un objetivo sustancial de la legislación laboral, señor presidente, es impedir que se consuman maniobras de fraude. La ley, siempre y ante todo, debe preservar el principio de la buena fe en todas las relaciones sociales. Existe una larga y bien fundamentada jurisprudencia en lo que se refiere a la subcontratación laboral en todas sus formas.

Considero que el artículo 30, en su actual redacción, constituye suficiente y clara protección para el caso de que los contratistas no cumplan con sus obligaciones laborales y ampara a los trabajadores aplicando el principio de solidaridad patrimonial en todos los casos de fraude o simulación.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, senador Eduardo Menem.

Sr. Romero Feris. — En lo que se refiere a las convenciones colectivas de trabajo tengo la concepción de que resulta imprescindible terminar con la ultraactividad; en ese sentido el criterio del proyecto merece mi apoyo. Muchas de ellas se remontan a la década del 70, cuando eran absolutamente distintos los parámetros de la actividad empresarial y de la competencia internacional.

En consecuencia, surge el interrogante de cuál es la razón por la cual se ha determinado que estas convenciones deben continuar en vigencia durante por lo menos dos años a partir del momento en que una de las partes solicite su caducidad. Si resulta conveniente para el desenvolvimiento de la economía nacional que las convenciones colectivas celebradas desde el año 1983 queden sin efecto y abran paso a otras convenciones modernizadas, me pregunto cuál es la razón para que ellas continúen en vigencia durante un lapso que, de acuerdo con los vertiginosos cambios de la economía y las relaciones de producción, resulta de una desmesurada amplitud.

Los derechos de los trabajadores, que es obligación constitucional respetar, deben estar reconocidos y protegidos por la legislación. Las convenciones colectivas de trabajo nada de sustancial pueden aportar al respecto.

Por eso, para terminar con estas breves consideraciones, en nombre del bloque autonomista vengo a solicitar el rechazo del proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, que considero constituye el resultado de acuerdos parciales y coyunturales que no significan aporte alguno a los problemas econó-

micos y sociales graves e impostergables que hoy padece nuestra comunidad.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes, del bloque liberal.

Sr. Aguirre Lanari. — Señor presidente: hoy entramos a considerar el proyecto de ley remitido oportunamente por el Poder Ejecutivo nacional.

En primer lugar, quiero destacar la permanente disposición de este honorable cuerpo para afrontar el debate e intentar las soluciones de fondo o coyunturales en temas como el que nos ocupa.

Buena prueba de ello y de la inquietud de mis pares —y también de quien habla—, han sido las reuniones, los debates y la sanción de diversas leyes en el campo del derecho del trabajo, entre las que podemos mencionar: la ley nacional de empleo 24.013; la de riesgos de trabajo, 24.557; la ley 24.465, de nuevo régimen de contrato de trabajo; la ley 24.467 referida a las pymes, cuyo Título III se refiere a las relaciones laborales en el ámbito de la pequeña y mediana empresa, y otras leyes laborales modificatorias de la Ley de Contrato de Trabajo, del régimen de convenciones colectivas, etcétera, en las que diversos señores senadores hemos participado. Aun aquellos que no integráramos la comisión que entendía en el tratamiento del tema en análisis, fuimos invitados por la referida comisión a participar del debate.

Debo señalar que en esta oportunidad no ha ocurrido lo mismo, razón por la cual nos vemos obligados —por lo menos en mi caso— a abordar con premura el dictamen que se somete a nuestra consideración. De manera que no se nos puede acusar de ser morosos en esta materia.

Hoy nos abocamos nuevamente al tratamiento de un proyecto de ley llamado de reforma laboral, que no es sino un proyecto más, dado que en la materia no importan los títulos que se den a tal o cual proyecto sino su contenido. Y lo hacemos con las mismas inquietudes con las que afrontamos otros debates celebrados en oportunidad del tratamiento de leyes a las que habré de aludir; inquietudes —digo— que surgen de problemas acuciantes que se reiteran: el desempleo, el problema del trabajo “en negro”, la necesidad de una mayor justicia y equidad en las relaciones del trabajo, la necesidad del país de modernizar su legislación laboral para adecuarla a los tiempos que vivimos y a una economía globalizada que nos exige cada vez mayor competitividad y menores costos.

Quisiera creer que con el proyecto de ley que estamos analizando conseguiremos establecer el

marco legal adecuado para afrontar exitosamente las dificultades que acabo de señalar. Pero me temo que no será así, anticipando que considero que, como bien lo han destacado algunos oradores preopinantes, el texto presenta claroscuros, o sea, algunos aspectos positivos y otros que no lo son.

Este proyecto de ley abarca diversas materias en los distintos capítulos que lo integran.

El Capítulo I considera aspectos regulados en la ley 24.465, como el contrato de aprendizaje, el llamado "período de prueba" en los contratos de trabajo por tiempo indeterminado y también el régimen de pasantías que, si no me equivoco, no está regulado por ley sino por normas jurídicas de menor jerarquía.

Con relación al régimen de pasantías, lo único que hace esta iniciativa es establecerlo por ley sin especificar su contenido, limitándose a señalar que debe celebrarse entre un empleador y un estudiante y difiriendo al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social su caracterización.

Considero que este tipo de relación laboral con una finalidad educativa debió merecer una caracterización más detallada, estableciéndose, además, los controles para evitar su empleo en fraudes a la ley.

Las modificaciones que el dictamen de comisión introduce a la Ley de Contrato de Trabajo y al denominado período de prueba en los contratos por tiempo indeterminado vigentes, en mi opinión tienen algunos aciertos y también ciertos errores que no considero substanciales. De ningún modo ayudan a solucionar los abusos que se han producido en el uso de estos institutos, por cuanto se han producido por la falta de una policía del trabajo eficaz. Esto también ha ocurrido con las pasantías.

Con referencia al contrato de aprendizaje, entiendo que es positivo que vuelva a ser considerado como lo que es: un vínculo contractual de naturaleza laboral; y también que se sancione al empleador que no cumpla la obligación contractual asumida, transformando el contrato en uno por tiempo indeterminado.

En cambio, no coincido con las modificaciones propuestas al período de prueba, instituto cuya característica más saliente es la de posibilitar la extinción del vínculo sin indemnización alguna por despedido.

En el proyecto de ley que estamos analizando, se reduce el plazo legal de 3 meses a 30 días, con una posibilidad supuesta de que el mismo plazo sea ampliado a 6 meses por convención colectiva, como

en el texto vigente. Pero a diferencia de éste, se prevé para los casos de despidos sin causa una indemnización reducida al 50 por ciento. Esto produce que el período de prueba que se propone sea parcialmente contradictorio con los fines que inspira el instituto, concebido como una prueba sin indemnización alguna en oportunidad de la extinción del vínculo.

El Capítulo II se refiere a diversos aspectos de la extinción del contrato de trabajo por medio del despido y al régimen de indemnizaciones pertinente, incorporando la figura del despido discriminatorio con una indemnización agravada en el artículo 14.

Me parece positivo que en el preaviso, a diferencia del régimen vigente, el plazo corra desde la notificación y no a partir del mes siguiente.

En cambio, no coincido con la confusa redacción del artículo 7º, que regula la indemnización por antigüedad en los casos de despido sin justa causa.

El artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo establece, para estos supuestos, una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de 3 meses. Esta fracción de 3 meses desaparece en el texto del proyecto de ley que consideramos, siendo substituido por la doceava parte de cada sueldo por mes o fracción mayor de 10 días.

Ello implica, por un lado, un pequeño incremento de la indemnización para quien haya laborado una fracción menor de 3 meses y una disminución de la indemnización para quien haya trabajado una fracción mayor de tres meses. Con esto se puede apreciar que es una reforma poco o nada substancial.

El proyecto omite abordar un supuesto carece de toda equidad y justicia, como es la existencia de un tope indemnizatorio máximo por mes para aquellos dependientes que tienen elevados haberes por mucha antigüedad.

Estas personas, en caso de ser despedidas, reciben hoy unas indemnizaciones disminuidas, pero no guardan relación alguna con sus ingresos. Los de corregir el problema, el proyecto nada hace al respecto. Tengamos presente, además, que estas personas suelen sufrir una forma de discriminación, velada pero muy real, como es la discriminación por la edad en un país donde quien superado cierta edad y ha tenido la desgracia de quedarse sin empleo viene a ser casi un marginal.

Pienso que era ésta la oportunidad para modificar este estado de cosas, incorporando alguna protección para estos dependientes y estableciendo, por ejemplo, que la indemnización por antigüedad que debieran percibir tendría que ser de un mes por año de antigüedad y que a la suma resultante se le quitaría el 25 por ciento, pero eliminando el tope máximo indemnizatorio mensual que rige actualmente. Esto mejoraría la razonabilidad de la ley vigente.

En cuanto al Capítulo III, referido a las convenciones colectivas de trabajo, poco o nada cambia el proyecto que analizamos, pues la caducidad de los convenios en el plazo de dos años que establece el artículo 12 de la iniciativa —que incorpora un segundo párrafo al artículo 6° de la ley 14.250— se refiere sólo a los convenios colectivos celebrados con anterioridad a la promulgación de la ley 23.545 que con posterioridad al 1° de enero de 1988 no hayan sido objeto de modificaciones por la vía de los acuerdos colectivos.

La realidad es que casi todos esos convenios han sido modificados, cuanto menos en sus cláusulas y escalas salariales, con lo que no se aplicará la caducidad que se dispone. Algo así como que hay que cambiar para que nada cambie.

Es una lástima que el proyecto desaproveche la oportunidad de impulsar la voluntad negociadora de las partes para que las soluciones a los problemas que se originan en el trabajo surjan del consenso de los empleadores y trabajadores, expresado en la negociación colectiva.

En cambio, me parece una buena iniciativa la de constituir un servicio de mediación y arbitraje que incorpore expertos en la materia con el fin de solucionar los conflictos colectivos de trabajo siempre que hubiere pedido de las partes para su intervención, como lo determina el artículo 13 del proyecto.

También resulta interesante que se pretenda dar participación a los representantes delegados del personal en la negociación colectiva, conforme lo establece el segundo párrafo del artículo 14 del proyecto que estamos considerando. Pero esto queda totalmente desvirtuado en el mismo texto al exigirse que ocurra solamente en unidades que registren la existencia de más de 500 trabajadores de una misma actividad y al determinarse que ese delegado del personal reúna las condiciones del artículo 40 y siguientes de la ley 23.551; entre otras, la de ser afiliado a la entidad sindical con personería gremial, debiendo ser nominado por esta última.

Así las cosas, se trataría de un delegado del personal que es, en realidad, un delegado sindical.

En cuanto a la derogación de las modalidades promovidas de contrato de trabajo, quiero dejar sentado mi desacuerdo parcial, pues si bien coincido con la eliminación de algunas de ellas, pienso que otras podrían ser útiles, como el contrato de trabajo de tiempo determinado por lanzamiento de una nueva actividad, que puede resultar atractivo para fomentar nuevas inversiones, siempre y cuando se lo sujete a un adecuado control de parte de los organismos que tienen a su cargo la policía del trabajo, con el fin de evitar los abusos que han ocurrido en los últimos tiempos, precisamente por falta de contralor. Tengamos presente que algunas de estas modalidades existen en otros países y pueden ser una fuente de trabajo que ayude a paliar el alto índice de desempleo.

Tampoco coincido con el artículo 22 del proyecto en análisis, que convierte a los contratos vigentes celebrados bajo algunas de esas modalidades en contratos de trabajo por tiempo indeterminado.

Señor presidente: considero que este artículo afecta gravemente la seguridad jurídica, pues esos contratos que están en curso de ejecución han sido celebrados en el marco de una ley vigente y deben cumplirse de conformidad con ella.

Al leer y releer el texto en análisis, con la premura que me impone el acelerado tratamiento de este proyecto, me hago la pregunta de para qué sancionarlo. Me pregunto si no será para cumplir formalmente con una imposición del Fondo Monetario Internacional; me pregunto cuál es la urgencia en su tratamiento; me pregunto qué se va a mejorar con ella. Y no encuentro una respuesta que me conforme en conciencia.

Este proyecto, que se presenta con el impactante nombre de "reforma laboral", no me parece que reforme gran cosa sino sólo algunos puntos, la mayoría de los cuales son poco trascendentes. Me parece que viene a sumarse a una legislación ya de por sí confusa y sobreabundante y que no implica una mejora sustancial de la actualmente vigente. Me parece que en nada ayudará a la superación del desempleo, ni a la modernización de la legislación laboral, ni a la reducción de costos, ni a la mejora de la competitividad de nuestro país. Tampoco me parece más justa o equitativa, ni que mejore la condición de los trabajadores.

A todo esto agregó que el proyecto no es fruto del consenso de los actores sociales. La parte empleadora está totalmente en contra de él. Y sólo

un sector de la parte trabajadora lo apoya, mientras que otro se opone. El resultado de esta falta de consenso es este proyecto de ley poco claro, que no corrige injusticias que existen, que no mejora nuestra policía del trabajo, que no beneficia — a mi juicio — sustancialmente a los trabajadores ni a los empleadores.

Por estos fundamentos, justifico mi voto por la negativa en general respecto de este proyecto de ley.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por el Neuquén.

Sr. Solana. — Señor presidente: los ajustes macroeconómicos que enfrentan los distintos países latinoamericanos, basados en una mayor disciplina fiscal y en la racionalización del gasto público, sentaron las bases de la estabilidad por la que transitamos actualmente. Fueron también las privatizaciones las que contribuyeron a ello, ya que desplazaron al Estado del centro de la escena económica y recrearon la posibilidad del mercado.

La apertura de las economías a la competencia internacional colocó a las empresas privadas ante el desafío de cambiar o desaparecer.

Estos ajustes han hecho sentir sus efectos sobre el empleo, directa o indirectamente, de hecho o de derecho, pero indefectiblemente.

Ahora bien, existen países donde estos cambios sociopolíticos se produjeron casi al mismo tiempo o inmediatamente después de lanzados los ajustes macroeconómicos en lo que respecta a su legislación laboral. Pero también existen otros que postergaron, con la vana ilusión de poder evitarlos, las modificaciones legislativas laborales que imponen estos cambios. Estas demoras fueron sin duda peores, porque los ajustes suelen ser más crueles cuanto más tarde se ejecutan. Las reformas laborales tardías se pusieron en marcha cuando las primeras ya recogían sus frutos.

Sin duda, los países latinoamericanos se encaminan ahora a dejar de lado rígidas, sobreprotectoras y hasta irreales políticas laborales; no siempre por gusto, sino empujados por la necesidad de nuevos empleos y de no quedar afuera del comercio mundial.

Actualmente son pocos los estados que no han modificado su legislación laboral en las últimas décadas. En algunos casos para disminuir las regulaciones; en otros, en contra de la corriente general, a veces atendiendo a urgencias político-financieras para fortalecerlas. Entre los primeros figuran Chile—1981— y posteriormente, Colombia, Ecua-

dor y Perú, que adoptaron legislaciones que facilitan el despido y amplían las posibilidades de contratos flexibles o precarios, según términos de la Organización Internacional del Trabajo. Entre las reformas que tendieron a fortalecer las regulaciones están las de Brasil, 1988, con la nueva Constitución; Colombia, 1991, y Venezuela, 1991/92, aunque en estos casos también se contempla la posibilidad de flexibilizar normas por medio de la negociación colectiva entre empleadores y trabajadores.

La Argentina no fue ajena a estos importantes cambios socio-políticos. Al contrario, luego de Chile y México fue y es la que marcó mayor ductilidad a esta nueva tendencia económica imperante.

Las reformas de organización productiva que se verifican internacionalmente también ocurren en la Argentina: ha cambiado la forma de producir y, por ende, la forma de trabajar y también los modos de relación económica interempresarial e interestadual.

El proceso de apertura económica por el que atraviesa la Nación nos pone en un camino donde las reestructuraciones evolutivas no sólo son inevitables, sino también deseables. La inversión y capitalización, los cambios organizativos y las innovaciones tecnológicas y comerciales llevan a la desaparición progresiva de productos y procesos que son reemplazados por otros. Este mecanismo, en la medida en que va acompañado de un aumento de la productividad, no es otra cosa que el desarrollo que hace posible el aumento del bienestar.

La apertura de la economía argentina y su participación en acuerdos de integración económica regional como el Mercosur suman, a su vez, un desafío adicional a la situación descripta. Surge entonces como evidente la necesidad de que el Estado nacional promueva medidas de corte horizontal que tiendan a igualar las oportunidades y las condiciones de producción entre los diferentes segmentos y sectores de la economía nacional.

Ahora bien, vale la pena advertir que una legislación laboral que no es adecuada para procesos de cambios tecnológicos hace que, considerando todo lo demás constante, los costos de inversiones y transformaciones técnicas sean mayores. Esto puede desalentar la inversión, entorpeciendo la creación de nuevos puestos de trabajo.

Como es de público conocimiento, en los últimos años hemos pasado de una situación cercana al pleno empleo a otra de alta desocupación. El problema central de la sociedad argentina actual

que de porcentajes próximos al 5 por ciento en octubre de 1985, llegamos hasta un pico del 18,4 por ciento en mayo de 1995. Actualmente estamos en el orden del 13,7 por ciento. Similar trayectoria enfrentó la subocupación. Lo peculiar de esta situación es que este fenómeno se dio en un contexto de mayor crecimiento económico. Porque la Argentina creció en un ritmo del 7 u 8 por ciento anual en su producto bruto interno.

Por lo tanto, para lograr que el crecimiento económico se traduzca en mayor empleo, aparece la reforma de un sistema de relaciones laborales como elemento clave que, pensado hace décadas, fue diseñado para un mundo productivo que ya no existe.

Merecen particular atención las pequeñas y medianas empresas, que generaron aproximadamente el 40 por ciento del producto bruto interno y ocuparon a más del 60 por ciento de la mano de obra de nuestro país. Ellas constituyen un factor clave de estabilidad y competitividad. Su importante papel en materia de creación de riqueza y generación de empleo, su flexibilidad de adaptación a los cambios producidos por los ciclos económicos y su gran sensibilidad a los cambios tecnológicos contrastan con las desventajas inherentes a su dimensión, a saber: inadecuadas condiciones de financiamiento; una legislación laboral que conspira contra su propia productividad y contra la generación de más fuentes de trabajo; déficit en la capacitación de su personal; dificultad para el acceso a mejores tecnologías; excesivos requisitos burocráticos en sus relaciones con el Estado, etcétera.

Es decir, que las micro, pequeñas y medianas empresas, aun realizando un importante aporte para el bienestar de los habitantes de la república, no cuentan todavía con posibilidades similares a las de las macroempresas.

El crecimiento económico, la generación creciente de empleos, la transparencia de los mercados, una distribución equitativa de la riqueza y la participación de las economías regionales en este proceso de transformación económica sólo serán posibles en el largo plazo si nuestro país desarrolla un sector de PYMES fuerte, dinámico y con capacidad de competir en una economía integrada en el mercado internacional.

Señor presidente: he realizado esta exposición en términos muy generales en atención a lo avanzado de la hora y a la situación de este recinto.

En cuanto al resto de mi exposición, que se relaciona especialmente con la necesidad de una reforma laboral en la Argentina, solicito que se inserte a continuación en el Diario de Sesiones. De esta manera, doy por terminada mi intervención que, en definitiva, sirve para marcar mi apoyo al dictamen en mayoría.

-Asentimiento.

-El texto de la inserción es el siguiente:

La necesidad de una Reforma Laboral Argentina.

El proceso de reestructuración económica de la Argentina que se inicia en 1989, con las trascendentes leyes: número 23.696 sobre reforma del Estado, por la que se instituyó el Programa de Propiedad Participada a favor de los trabajadores de las empresas privatizadas; y número 23.697 sobre Emergencia Económica, por medio de la cual se reordenan el empleo y las políticas salariales en la Administración Pública, marcaron el inicio de las reformas de las relaciones laborales en la Argentina.

La Ley de Convertibilidad número 23.928, de 1991, consolida este proceso.

Específicamente en los aspectos laborales: la Ley Nacional de Empleo número 24.013, introduce importantes novedades legislativas que facilitaron el acceso al mercado de trabajo al promover cuatro modalidades de contrataciones, estableciendo también para la situación de desempleo la figura de un seguro a fin de paliar la pérdida de trabajo; la Ley sobre Accidente de Trabajo número 24.028 abrió camino para la posterior Ley de Riesgo de Trabajo (ART) número 24.557; sin olvidar la Ley del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones número 24.241, de 1993.

El "Acuerdo Marco para el Empleo" suscrito por el Poder Ejecutivo nacional, la Confederación General del Trabajo y los Empresarios, en julio de 1994, marcó un hito de renovado impulso al proceso de reforma laboral, plasmado en las siguientes leyes:

a) Número: 24.465, introduciendo nuevas alternativas en la dinámica contractual de las relaciones individuales y regulando el contrato de aprendizaje.

b) Número: 24.467, que consagró el Régimen Especial para las Pequeñas y Medianas Empresas, en cuyo Título III, dedicado a las relaciones laborales en las primas, se destacan significativas innovaciones sobre la formación profesional de los trabajadores, facilitación de la contratación temporal y remodelación de la negociación colectiva.

c) Número: 24.522 de Concurso y Quiebras que, en la dimensión de las relaciones de trabajo, agiliza el tratamiento de los créditos laborales e incorpora una

modalización de la negociación colectiva para hacer frente a las situaciones concursales.

d) Número: 24.635 creadora de una instancia obligatoria de conciliación laboral para conflictos individuales de trabajo, preventiva de la litigiosidad judicial y a cargo de mediadores privados, con doble control de los Ministerios de Justicia y de Trabajo y Seguridad Social.

En este marco de avance de la reforma laboral, y atendiendo a lo que algunos autores han dado en llamar la "flexibilidad de hecho", reflejada en la incidencia del trabajo no registrado o "en negro", que alcanza a más de un tercio de los asalariados (treinta y cinco por ciento), se impone la necesidad de contar con una nueva reforma que resulte consistente con la economía de mercado que estamos construyendo y conducente a mejorar la situación del empleo en nuestro país.

Por eso, una legislación que regule las relaciones laborales no debe dejar de contemplar los siguientes puntos:

1°. Que reemplace el viejo equilibrio laboral que funcionó en los años cuarenta y cincuenta, por un equilibrio nuevo y diferente que funcione a la altura de las exigencias que tenemos.

2°. Que eleve la capacitación de nuestros trabajadores. Este es el punto central, ya que, esta capacitación es deficitaria en relación con las necesidades que tienen la producción moderna.

3°. Que conduzca a la reducción del índice de desempleo que actualmente existe en la Argentina, a través de la creación de un marco regulatorio específico que contemple las singularidades de las pequeñas y medianas empresas, y su papel dinamizador del empleo.

En nuestro mundo moderno, las pequeñas empresas son las que proveen la mayor cantidad de puestos de trabajo, ya que las grandes tienden a cambiar su perfil y a reemplazar empleo por alta tecnología. Por eso, es evidente que la pequeña empresa tiene una situación diferencial, que la legislación argentina no contempló ni en lo económico, ni en lo financiero, ni en lo laboral.

4°. Que esta flexibilización no vaya en desmedro de ninguna de las dos partes del binomio: capital-trabajo. Su objeto debe ser facilitar el acceso y permanencia en el empleo, aumentar las posibilidades de obtenerlo, permitir una mayor elasticidad en el cumplimiento de las tareas y acomodar la relación laboral a las necesidades y posibilidades del momento.

La flexibilización no tiene que destruir, ni siquiera minimizar, los principios laborales adquiridos. La disciplina laboral se encuentra en constante actividad. Es un crisol en que se funden todas las circunstancias del momento, del cual nacen nuevas instituciones o situaciones, así como desaparecen otras o se modifican las

existentes para adecuarlas a la realidad del momento. Es misión esencial del derecho laboral dar solución a todos los problemas que se presentan constantemente en las relaciones del trabajo.

5°. Que se eliminen algunas rigideces legales en el mercado laboral, las que si bien estaban de acuerdo a la época en que fueron dictadas, se encuentran obsoletas y traban el desenvolvimiento empresarial.

Por lo señalado, estoy convencido de que el presente proyecto de ley puede convertirse en un instrumento básico que contribuirá, sin duda, a la modernización laboral. Si bien los empresarios y la C.G.T. formularon sus críticas, considero que el fundamento y el contenido de esta iniciativa, en general, son positivos y servirá como posible disparador de otras reformas.

Del análisis del proyecto surgen los siguientes temas propuestos:

-La cuestión de la ultraactividad de los convenios colectivos.

-Los aspectos que pueden definirse como "flexibilidad de la negociación colectiva" (cláusulas que pueden ser negociadas, representación sindical).

-Los costos de la ruptura contractual (preaviso, indemnización por antigüedad con o sin causa).

-Las cuestiones vinculadas a las formas de contratación (período de prueba, contratos promovidos).

Señor presidente, señores senadores, todo proyecto es perfectible, pero esta sanción apunta, a mi criterio, a tres ideas centrales:

1. - Bajar los costos laborales, colaborando así con las empresas para que éstas sean más competitivas.

2. - Terminar con la ultraactividad de los convenios con plazos acotados, fomentando a la vez la negociación de nuevos acuerdos con incentivos para ambas partes y una solución para situaciones pendientes.

3. - Fomentar la negociación colectiva, por empresas, porque actualmente existen más de mil quinientos acuerdos que la avalan.

Por todo lo expuesto, con la convicción de que se trata de sancionar un instrumento que sea eficaz y colabore en la lucha contra el desempleo, adelanto mi voto positivo a esta iniciativa, la que aportará sin duda a la profundización del proceso de crecimiento de nuestro país y a la creación genuina de nuevos puestos de trabajo.

Sr. Presidente (Menem). - Tiene la palabra el señor senador por Salta del Partido Renovador.

Sr. Ulloa. - Tenemos entre manos un tema muy importante: la llamada flexibilización laboral. Es una cuestión que llega al debate en un momento

que preocupan al país tres aspectos fundamentales: la desocupación, el déficit fiscal y el déficit de la balanza de pagos.

Por supuesto, ninguna ley podrá resolver todos estos problemas. Pero cualquier norma que sancionemos en esta materia debe tener en cuenta la realidad.

Tenemos una desocupación que es producto de distintos factores concurrentes, como siempre sucede cuando se producen fenómenos sociales. En primer término, ha habido un incremento de la productividad en el trabajo; es decir, la incorporación de tecnología hace que la misma cantidad de horas de mano de obra sea capaz de producir mayor cantidad de bienes y servicios.

Paradójicamente, la incorporación de tecnología, lo cual es bueno, trae estas consecuencias negativas. Entonces, no necesariamente la desocupación obedece al incremento de la oferta laboral sino también a estas circunstancias.

Hay otros aspectos que también contribuyen a la desocupación, como el cierre de establecimientos, tanto en el sector de servicios como el productivo, a raíz de un fenómeno de evolución económica que presenta aspectos muy positivos, pero que produce estos efectos no queridos que se traducen en una mayor desocupación.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del H. Senado, senador Antonio F. Cafiero.

Sr. Ulloa. — A las personas que son expulsadas del mercado laboral por estos cierres les resulta imposible encontrar trabajo en los nuevos emprendimientos, fruto de inversiones importantes que se hacen en el país. Esto se debe, en primer lugar, porque muchas de estas personas no están capacitadas para las nuevas situaciones que se presentan y, en segundo término, a la distribución geográfica de los nuevos puestos de trabajo y a la distribución geográfica de los que se cierran.

Lamentablemente, y lejos de la realidad, la inversión va a las zonas más desarrolladas, pero es más frecuente el cierre de empresas y de comercios en las zonas marginadas o menos desarrolladas. De manera que en provincias como la que represento se produce una angustia por esta situación. Por ejemplo, el cierre de Y.P.F., que en muchos aspectos se justificaba, dejó un tendal de desocupados, lo mismo que en el caso de los ferrocarriles, produciendo bolsones de pobreza y angustias laborales, como el caso de las localidades de Tartagal y Mosconi y otras más. Además,

debe sumarse la mala situación que están sufriendo las economías regionales por distintas razones.

Existe asimismo un incremento de la fuerza laboral producido por el crecimiento demográfico y, además, por la incorporación de la mujer a la oferta laboral, fenómeno éste que se da en todo el mundo. Esto es positivo en sí y es necesario porque en los hogares se requiere un segundo sueldo para poder solventar los gastos. Pero se ocupan puestos con personas que antes no participaban en el campo laboral, con lo cual se incrementa la oferta.

Se observa el fenómeno del crecimiento demográfico de ciertas regiones. La provincia de Salta ha crecido demográficamente entre los dos últimos censos el doble con relación al promedio del país. La población del país creció un 16 por ciento entre los últimos censos y mi provincia un 31 por ciento. Esto también genera desocupación y angustias. En definitiva, hay una mayor oferta laboral en este sentido.

Este problema de los excluidos forzosamente del mercado laboral hace que el legislador deba tener presente no sólo al que trabaja, sino también al que busca empleo, al que tiene la angustia de no encontrarlo, que no tiene gremio que lo defienda ni obra social que lo proteja. De manera que cuando pensamos en un sistema o reforma laboral hay que hacerlo no sólo para el trabajador, sino para aquel que no tiene trabajo. Es decir, no sólo preocuparnos por quienes están dentro del mercado sino fundamentalmente —por lo menos para mi provincia— por los que están afuera del mercado. Muchos de ellos están afuera del mercado por un problema de capacitación. Hemos dicho que hay nuevas tecnologías y demandas. El crecimiento de los servicios requiere personal con mayor preparación, y todo esto excluye a mucha gente del mercado laboral. Este es uno de los aspectos.

Como conclusión: ante la desocupación, tenemos que ocuparnos no sólo de los que están dentro del mercado sino especialmente de la angustia de los que están afuera de él. Insisto: en la visión parcial de mi provincia, los que están afuera son padres de familia, y la mitad de la población no ha cumplido los veinte años. Es decir que respecto del trabajo tenemos una población activa reducida frente a los pasivos que tienen que atenderse.

El otro problema que quiero señalar y que también debe ser considerado es el del déficit fiscal. Aproximadamente el 50 por ciento de todo lo que recauda la Administración Federal de Ingresos Públicos —Dirección General Impositiva—, es destinado al pago de jubilaciones y pensiones.

Es decir que las jubilaciones son una de las causas que prácticamente genera la mitad de nuestro déficit fiscal. En consecuencia, cuando pensemos en facilidades o exenciones a los aportes previsionales, debemos que tener en cuenta —confrontando las necesidades de crear trabajo y de favorecer el empleo— que cada vez que damos exenciones estamos aumentando este déficit tan importante, fruto fundamentalmente de la transición —que va a durar unos cuantos años más— entre el sistema de reparto que teníamos y el de capitalización. Una gran parte de la recaudación previsional va al sistema de capitalización y debe ser sustituido con impuestos que producen déficit y endeudamiento.

Tampoco son ajenos al déficit fiscal la evasión impositiva subsistente y el trabajo en negro. Y aquí debo señalar algo que todavía no hemos atendido suficientemente: la falta en las provincias de una policía del trabajo eficaz. No existe una policía del trabajo que controle exhaustivamente las relaciones laborales.

No se necesita una policía del trabajo que vaya solamente a dirimir o intervenir en conflictos, sino que debe supervisar el cumplimiento de las leyes laborales y el pago de los aportes previsionales.

Lamentablemente, nuestra policía del trabajo no ha tenido ni tiene la eficacia necesaria para reducir este trabajo en negro, que es uno de los problemas que afectan el déficit fiscal.

El tercer aspecto que quiero señalar, y que tiene importancia en relación con este tema, es el déficit de la balanza comercial. La balanza comercial está relacionada íntimamente con el costo de producción y el costo laboral.

No vaya nadie a creer que estoy propiciando que nos convirtamos en un país que importe la pobreza, como estamos haciéndolo con países asiáticos en donde la mano de obra prácticamente es gratuita.

Los grandes países, los que están a la cabeza de la capacidad de exportación, son naciones que pagan buenos salarios. Este es nuestro desafío: competir con buenos salarios.

Y este déficit comercial de la balanza se ve afectado por lo que decidamos en cuanto a los costos laborales indirectos, sobre los que deben tomarse medidas, y no sobre los sueldos de bolsillo.

Por supuesto, ante esta situación de falta de competitividad, no sólo interviene este aspecto sino también el llamado costo argentino; el costo argentino por la ineficiencia o falencia de nuestros servicios, de nuestra capacidad de transporte.

Se ha avanzado mucho en este tema, pero todavía queda mucho por caminar.

El proyecto no soluciona estos temas —desde ya anticipo mi voto desfavorable a su sanción— y diría que es un intento parcial, casi de compromiso, tomado en un momento en que estamos debatiendo un proyecto, mientras que en Estados Unidos el ministro de Trabajo está tratando de convencer al Fondo Monetario Internacional de qué es lo que debe hacer y qué posibilidades hay de modificar el proyecto que pretendemos y en el que, a último momento, se incorporan modificaciones como éstas del artículo 22. Todo eso me hace dudar de la eficacia de esta medida.

El proyecto de ley elimina los contratos promovidados creados por este gobierno con la idea de incentivar la creación de empleos. Yo diría que la “precarización” del trabajo es un problema real que preocupa, pero al principio mencioné el problema de la desocupación. Si bien la situación precarizada del trabajo es preocupante, la eliminación de esta situación incrementaría la recaudación previsional. Pero quienes estamos en contacto con la gente, quienes recibimos el clamor angustioso de los que piden trabajo con tal de llevar el pan a sus hijos, no podemos dejar de privilegiar la angustia de los desocupados frente a los trabajadores precarios. En mi provincia al menos, la desocupación se ha disminuido con estos contratos precarios, solución incompleta, casi diría mala solución, pero cuando el hambre aprieta, cualquier solución empieza a ser buena.

Considero que la pretensión de convertir dichos contratos en una relación permanente ha sido realmente desafortunada. Lo que vamos a conseguir es que inmediatamente se produzca el despido de esta gente porque fueron tomados con una ecuación económica diferente. Por ley no se puede obligar a incorporarlos definitivamente; por ley no se crean puestos de trabajo, sí pueden facilitarse. Los puestos de trabajo se crean con el desarrollo y esto lleva tiempo.

Además, debemos tener presente que este proceso económico, al que yo le reconozco tremendos méritos, nos ha cambiado el enfoque del país nos ha dado la posibilidad de pensar en el mediano y en el largo plazo. Lamentablemente el poder económico se concentra en pocas manos, y esto lo dice claramente el informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo humano; aquella teoría del derrame, de que el crecimiento económico se difunde naturalmente hacia abajo no se cumplió. La naturaleza del hombre, lamentablemente, tiene as-

pectos egoístas y pretende beneficios inmediatos sin tener en cuenta la solidaridad. De manera que es necesario que el Estado intervenga, de esto no cabe la menor duda, pero tiene que hacerlo con medidas eficaces que tengan en cuenta la realidad en que vivimos.

Se disminuye el período de prueba de tres meses a un mes. Esto incrementa el costo y hace que mucha gente piense detenidamente en si le conviene tomar a un trabajador o no. Nuevamente, estamos ante la angustia de los desocupados.

También se eliminan franquicias previsionales. Esta medida, como he señalado, si bien favorece la disminución del déficit en la recaudación previsional, por otro lado, conspira contra la creación de puestos de trabajo. En este sentido, debo recordar que aquellos que fuimos gobernadores y firmamos el Pacto Federal Fiscal, básicamente lo hicimos porque encontramos en él un gran incentivo al fijar la disminución de las cargas previsionales en función directa de la distancia a la Capital Federal. Este incentivo nos llevó a tomar compromisos fiscales de importancia que, evidentemente, han dejado de cumplirse porque esa disminución del costo previsional no se ha dado para el interior. Además, insisto en que esto también es contradictorio con la necesidad de una mayor recaudación.

Señor presidente: quiero dejar sentado que solamente aludo a aspectos fundamentales del proyecto que justifican mi voto negativo.

Por ejemplo, me voy a referir a la decisión de ratificar el sistema de negociaciones centralizadas de los convenios colectivos de trabajo. Ellas se hacen en función de las grandes empresas y, en realidad, en las pequeñas y medianas la situación es totalmente distinta.

Justifico la necesidad de tener fuerza ante las grandes empresas que, de algún modo, tienen capacidad para definir las exigencias laborales. Pero actualmente se da un nuevo fenómeno. En otra época, en esas empresas, los trabajadores se enfrentaban y conversaban con sus dueños. Pero ahora, esas personas no son los dueños sino, simplemente, gerentes. Las decisiones se toman en otro lado. Entonces, esta situación obliga a que el Estado tenga una fuerte presencia que determine las condiciones de defensa del trabajador. Esto es cierto. Sin embargo, en el caso de la pequeña y mediana empresa debe tenerse en cuenta la realidad económica, laboral y social de cada una de ellas y, por ende, cargar la decisión laboral en el más alto nivel conspira contra la posibilidad de al-

canzar soluciones armónicas, eficaces y que respondan a una realidad.

Señor presidente: éstas son las principales razones que me llevan a votar negativamente el proyecto. Además, como ése será el sentido de mi voto, entiendo que no tiene caso abundar más detalladamente en los diversos artículos. No obstante ello, también comprendo que este proyecto de ley es absolutamente necesario porque después de haber solucionado el problema del acuerdo político en la vigencia plena de las instituciones, que hacen a la paz social, el problema más grave al que nos enfrentamos es el de las relaciones laborales. Lamento decir que, desde mi humilde punto de vista, el proyecto de ley en consideración no va a solucionarlo.

Sr. Presidente (Cafiero). — Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

Sr. Avelín. — Señor presidente: ante este tema, mi exposición no buscará lesionar a nadie ni tampoco será una respuesta a nada ni a nadie; únicamente responderá a mis propias convicciones.

Es por ello que, claramente, quiero exponer el significado de este proyecto.

Señor presidente: pienso que este proyecto de ley cambia algo para que nada cambie. Es lamentable que la equidad y la justicia, que deben llegar con premura a quienes menos tienen, tarden en hacerlo y, cuando se dan, lo hagan mediante el artificio de articulados que conducen a la zozobra y a la incertidumbre.

La flexibilización laboral está garantizada; pero por una legión abrumadora de mano de obra desocupada dispuesta a tomar cualquier trabajo o tarea bajo cualquier condición salarial o laboral con tal de salir de la marginalidad. Sin embargo, salir de la marginalidad con la pobreza a cuestas tiene el alto precio de aceptar la explotación del esfuerzo y del trabajo realizado, por cuanto en un mercado laboral desequilibrado hay mucha mano de obra y mucha especulación por parte de quienes lo manejan: un mercado negro que, con silenciosa explotación, conduce a la esclavitud salarial.

Señor presidente: el trabajo es una mercadería escasa, y los mercaderes del dinero y del capitalismo salvaje la explotan bien. Por ello, a mayor precarización, mayor empleo. Y dentro de ese marco de precarización, los empleadores de esta sociedad de mercado cometen abusos y esclavizan modernamente —con mucho lujo de detalles— al trabajador, quien ya no tiene horarios y debe trabajar doce, dieciséis y hasta dieciocho horas,

sin francos, trabajando hasta treinta días, con vacaciones reducidas o inexistentes. Es más, para muchos obreros del trabajo creador, ya no hay vacaciones.

Al respecto, quiero recordar algunas palabras del general Perón, ya que me gusta hurgar en las raíces de la historia y traer a colación el pensamiento de nuestros grandes políticos, porque de esa forma podremos construir el presente y proyectar el futuro. Perón decía: "Queden con su conciencia los que piensan que el problema puede solucionarse aprisionando con mano de hierro las justas protestas de la necesidad o los que quieren convertir a la Nación en un rencoroso régimen de trabajos forzados, sin compensaciones ni alegrías".

"La conciencia social ha desterrado al individualismo egoísta que luchaba por la comodidad personal, para buscar en la acción colectiva gremial la conquista de todos para todos".

Por ello, no se puede apoyar ningún proyecto de ley que vulnere los derechos adquiridos por la clase trabajadora, por cuanto la única riqueza de un obrero es su trabajo. Y su trabajo debe ser preservado, protegido y estimulado con el respeto que merece su condición humana.

En ese sentido, Perón decía: "En la economía estudiamos, en primer término, los problemas humanos, porque hemos pensado que nuestro compromiso con el país es dedicarnos a cuidar al hombre, y como el hombre es un factor económico dentro de la vida nacional, hay que cuidar todos los aspectos".

Y hay que cuidarlos porque ellos nos cuidan a nosotros, aquí y en todas partes: en el taller, en la chacra, en la fábrica, en la universidad y en todas las expresiones del trabajo creador donde el obrero es columna para proyectar la grandeza de la Nación; ese obrero que ha perdido credibilidad, que sufre los embates de la desocupación y la intolerancia de quienes golpean con la injusticia y la falta de solidaridad a millones de argentinos.

Pero claro, muchos no quieren ver esa situación; quieren ignorarla, marginarla o se hacen los desentendidos.

Por eso, Perón también decía: "Hemos orientado nuestro gobierno dando una vida digna a todos los trabajadores por todos los medios a nuestro alcance y en eso corremos líneas paralelas, convencidos unos y otros de que la felicidad ansiada para el mundo descansa solamente en la justicia social".

La justicia social es una lucha permanente de los pueblos sumergidos, golpeados y torturados en

sus propias esperanzas. En Africa, Asia —en muchos lugares del mundo— y aquí en la Argentina la justicia social está elaborada con fuerte contenido de solidaridad en la doctrina social de la Iglesia.

Y precisamente la doctrina social de la Iglesia fue el argumento del señor ministro Erman González al debatir por televisión con el presidente de la Unión Industrial el tema de la ley de flexibilización laboral. En base a esa afirmación busqué, empecé a indagar sobre algún artículo o párrafo de la ley en debate que afirmara el concepto doctrinario y social de la Iglesia; ese documento con tanta fuerza humana que el mundo entero admira y la humanidad aspira ver aplicado en todos los pueblos de la Tierra.

Lamentablemente, no encontré esa solidez doctrinaria que pudo haber elevado la jerarquía de equidad y de justicia para el obrero y para el patrón, para todos —porque este país es el conglomerado de la justicia, de la hermandad y de la solidaridad—, es decir, para el empleado y el empleador.

Se trata del pensamiento de la Iglesia en su doctrina social y cuyos lineamientos dijo seguir el señor ministro.

En la ley de flexibilización laboral no aparece lo que afirma la doctrina social de la Iglesia; no aparece lo que tuvo que ser el frontis de lectura de la proyectada ley de flexibilización laboral.

Efectivamente, la doctrina social de la Iglesia nos dice que la Iglesia desea para el obrero no sólo un salario justo sino también una cierta participación en la gestión, en la propiedad y en los beneficios de la empresa. Fíjense qué importante: "participación en los beneficios de la empresa". ¡Dios nos libre, señor presidente, de la sacudida que nos haría el Fondo Monetario Internacional ante la afrenta al capitalismo internacional, al capitalismo salvaje, al decir del Santo Padre de nuestra Iglesia en sus reflexiones!

Señor presidente: con más precisión afirma la Iglesia en los documentos de Medellín conceptos de profundidad humana, de valor social intransferible y de espíritu de elevada solidaridad. Lo afirma el documento que el señor ministro dice interpretar y que no concreta en la proyectada ley; se trata del famoso documento de Medellín, del que muchos tienen memoria en cuanto a su significado y su fuerza.

Dice el documento que con la lucidez que surge del conocimiento del hombre y de sus aspiraciones, debemos reafirmar que ni el monto de los capitales ni los planes económicos estarán eficaces

mente al servicio del hombre si los trabajadores, salvada la necesaria unidad de dirección de la empresa, no son incorporados con toda la proyección de un ser humano mediante la activa participación de todos en la gestión de la empresa—fijense qué importante: la activa participación de todos en la gestión de la empresa—, según formas que habrá que determinar con acierto y en los niveles de la macroeconomía, decisivos en el ámbito nacional e internacional. Esta no es una expresión comunista ni marxista. Es una expresión humana, solidaria, de la doctrina social de la Iglesia que todos están invocando en forma permanente, por supuesto que para salir del paso.

Y decía más la doctrina: que hay que darse prisa, hay que caminar más rápido, y que muchos países sufren y aumenta la distancia que separa el progreso de los unos del estancamiento, y aun el retroceso, de los otros. ¡Cuántas diferencias hay entre unos y otros en el país! ¡Cuánto es lo que separa la banda de los pocos que tienen mucho de la banda de los muchos que no tienen nada!

Y va más allá al afirmar que la empresa es una economía verdaderamente humana; que no se identifica con los dueños del capital porque es fundamentalmente comunidad de personas y unidad de trabajo que necesitan de capitales para la producción de bienes.

Una persona o un grupo de ellas no pueden ser propiedad de un individuo, de una sociedad o de un Estado. Las multinacionales se están apropiando de los Estados nacionales; están tratando de ver cómo pueden absorber y aglutinar la fuerza de integración de las naciones del mundo.

No se puede explotar al hombre, considerado como ser sagrado, con espíritu, sueños, ilusiones y esperanzas. Hasta el más pobre sueña, hasta el más infeliz tiene esperanzas, hasta el más pequeño de esta tierra de los argentinos tiene inquietudes e ilusiones. Y nosotros estamos bloqueando inquietudes, esperanzas, sueños e ilusiones.

Aunque se deroguen los contratos precarios, los contratos "basura", se golpea con fuerza al rebajar las indemnizaciones. No conozco ninguna empresa que haya quebrado cuando indemnizó a algún obrero o empleado.

Al rebajar las indemnizaciones, se vulnera un derecho y una conquista y, más allá, se estimula la ilusión del obrero con una pasantía o un aprendizaje. La pasantía no es más que un caramelo que sólo sirve para endulzar las expectativas del trabajador, y luego viene el golpe de hacha, que lo elimina.

¿Cuántas luchas libró el sector obrero de la patria? ¿Cuántos murieron? ¿Cuánta sangre hubo de derramarse para construir el gran movimiento nacional peronista? ¿Cuánto se hizo en este país para proyectar su grandeza?

Se juega con la esperanza del trabajo estable, de la seguridad futura, con los sueños del joven obrero o del hombre maduro que busca garantías en la ley, como lo hacen los hombres libres, sin miedo al miedo.

Al respecto Perón nos decía: "Deseamos una perfecta organización del trabajo argentino, con sus salarios, con sus condiciones de trabajo y con sus condiciones de descanso. Deseamos que el menor costo de la producción surja en el futuro de una más perfecta organización industrial [hablaba de la industria], de una más perfecta maquinaria [hablaba de la maquinaria, con tecnología apropiada], de un acabado más completo, por una excelente mano de obra [hablaba del perfeccionamiento y de la educación del obrero], pero jamás por la explotación de los obreros". Fijense qué importante es este pensamiento del general Perón, que hay que traer a colación permanentemente.

Más adelante, agregaba: "Tal equilibrio ha de basarse en que ni el capital ni el trabajo sean subestimados en su verdadero valor. Entendemos que tal perfeccionamiento social, en busca de esa armonía [siempre hablaba de armonía, del ensamble del obrero y el patrón], ha de basarse en tres factores tipo de gran importancia: evolución de la cultura social, dignificación del trabajo [del trabajo de todos] y humanización del capital [no de la explotación del hombre de trabajo por parte del capital]".

Como sentencia que debemos recoger para los tiempos—aquí no se trata de modernización ni de globalización—, nos decía: "Lo que el gobierno puede hacer es evitar que, entre todos los que producen, alguno se lleve la parte del león mientras que otros carguen con la parte del ratón".

En los últimos tiempos la variable de ajuste ha sido el obrero argentino—y muchos otros de naciones sometidas y claudicantes—. Las pruebas son contundentes, precisas, reales y alarmantes. Aunque la macroeconomía se esté levantando, abajo están el drama, el dolor, la angustia.

La canasta familiar se cubría en un ciento por ciento con el salario en la década del 70, en un 70 por ciento en la década del 80 y, en la actualidad, se cubre en un 50 por ciento. Y ahí están los marginados sufriendo una agobiante desocupación, con

miles de pequeñas y medianas empresas cuyo potencial económico está prácticamente destruido, con miles de obreros que están en la calle, sin la posibilidad de acceder a créditos bancarios para incorporar tecnología de avanzada que permita competir en los mercados interno y externo.

Yo pregunto, ¿cómo vamos a competir en el mercado internacional si no contamos con la tecnología apropiada ni con créditos bancarios que nos permitan incorporarla en el futuro?

Se anula la industria nacional; no existe mercado interno porque los salarios son muy bajos, prácticamente de hambre. Se anula la industria nacional por la miserable importación indiscriminada con la que llega lo que sea de cualquier parte —incluso chucherías—. Como consecuencia, la pequeña y la mediana industria cierran sus puertas para convertirse en empresas a nivel comercial porque sólo obtienen ganancias importando indiscriminadamente.

En la actualidad, prácticamente el 80 por ciento de la banca argentina se halla en manos privadas. ¡Dios nos libre, entonces, de la anunciada privatización del Banco de la Nación Argentina!

Las obras sociales se ven golpeadas por las prepagas. Ojalá aumente la cantidad de prepagas, pero siempre y cuando las obras sociales sigan siendo manejadas por los gremios; por esos gremios que tienen la obligación de defenderlas, de cuidarlas y de proyectarlas hacia el futuro.

Los gremios deben afrontar la construcción de sus hospitales y de sus clínicas pero, para ello, necesitan contar con la tecnología apropiada que les permita competir en áreas como las de la vivienda, las vacaciones, la cultura, las escuelas y las universidades; en definitiva, para lograr un desarrollo integral de la República.

Creo que debemos afrontar nuestra falta de confianza hacia el obrero argentino. ¡Claro que hay delincuentes! ¡Claro que hay corruptos! Pero también los hay en la clase alta y en la media.

Debemos tener confianza suficiente para que el día de mañana, una vez eliminados la corrupción, la perversidad y los negociados, la atención de la salud, de la educación, de la seguridad y de la cultura definitivamente quede resguardada en manos de los obreros.

Hablemos de solidaridad, señor presidente. ¡Qué concepto tan importante!

Hace poco tiempo hablamos de la solidaridad para ayudar a la gente del Litoral y del Sur. Precisamente por solidaridad, donamos el 25 por ciento

de nuestra dietas. Eso es solidaridad; pero si se pide dinero para luego darlo ya no se trata de solidaridad sino de intermediación para la atención de los que necesitan ayuda.

Esa solidaridad, señor presidente, muchas veces es una fantasía de los poderosos, de los que juegan a la bolsa, de los que no atienden el dolor del hombre ni tratan de remediar las injusticias sociales.

Alguien muy humano y sensible ante el drama de los pobres dijo con fuerza de convicción que la vergüenza —cualidad que no muchos tienen— debería cotizarse en la bolsa porque es un factor importante de las ganancias. De ser así, quisiera ver a cuánto cotizaría.

Ese mismo pensador agrega, mencionando a Shakespeare en *La Voz de Ariel*, que el infierno no existe porque todos los demonios están acá. Por supuesto, es una expresión que no comparto por mi condición de cristiano.

Pero hablemos de esa solidaridad que me permitió con audacia, humildad y mucha vergüenza pedir algo para mucha gente muy pobre que atraviesa una situación realmente dramática; para gente enferma y necesitada.

Entonces, tomé ánimo y escribí dos cartas, una de ellas dirigida al señor Macri. En ella decía: 'La vida para muchos argentinos es dura, triste y solitaria ... y más aun cuando la enfermedad carcome la psiquis y daña toda la dinámica física, somática y espiritual del ser humano.

'Ello me lleva a solicitarle en lo posible, siempre y cuando usted pueda brindar solidaridad a un reclamo de 70 enfermos mentales internados en el Hospital Mental El Zonda. Todos ellos hombres, mujeres y adolescentes olvidados por sus familias, sin respaldo estatal y a la deriva, en muchos casos, para una terapéutica adecuada y puntual. El pedido Sr. Macri, es de una movilidad (p. ej. una combi) para desplazarlos en algunos de sus momentos de tranquilidad psíquica y a veces la impasse de 'normalidad' que suelen dar estos cuadros patológicos.

'Su director, el Dr. Héctor González, les brinda lo que esté a su alcance y sólo con su afecto, buena voluntad y nobleza médica cubre lo que puede y lo que humanamente le permiten los recursos que le otorga el gobierno provincial.

'La movilidad llenaría una necesidad, incluso como terapéutica de dichas enfermedades al sacar al enfermo periódicamente de ese encierro que

abruma, bloquea y encadena aún más esa triste patología de las enfermedades de la mente.

"Mi profesión de médico con 44 años de actividad ininterrumpida me permite hacerle a Ud. este pedido, por supuesto agradecerle cualquiera sea su decisión al respecto.

"En nombre de los profesionales del Hospital, sus enfermos, los enfermeros y en el mío propio saludole con alta estima".

Quiero recordar que mandé dos cartas.

La respuesta del director de la Fundación Jorge Macri es la siguiente: "Hemos tomado conocimiento de la atenta carta que Ud. enviara al presidente de nuestra Fundación, señor Francisco Macri, en la cual solicita un vehículo, para el traslado de internados del Hospital Mental El Zonda. Deseamos informarle que, más allá de nuestros deseos, nos vemos imposibilitados de poder dar una respuesta positiva a su altruista solicitud, en virtud de que nuestra institución tiene totalmente comprometido su cupo de ayuda a centros de salud, en particular, con el Hospital Italiano". Esta es la respuesta que envían, en un acto de solidaridad.

No encuentro la otra carta a la que hice referencia, por lo que no puedo leerla.

El señor ministro de Trabajo afirma luego de su viaje a los Estados Unidos, ante el Fondo Monetario Internacional: "Estoy muy cansado, pero contento, porque me fue muy bien". Agrega: "No soy adivino, para saber cómo resultará el encuentro con Camdessus, pero a los técnicos les demostraré que nuestra reforma no tiene rigideces que vayan a asustar a los inversores".

¡Qué vergüenza tener que someter un proyecto de ley ante los poderosos del dinero, cuando es asunto de la Nación y es este Congreso el que debe legislar, interpretar, discutir y llegar a conclusiones justas y elevadas, sin interferencias extrañas, sin disposiciones que vulneren nuestra identidad y nuestro pensamiento para decidir qué es lo que tenemos que hacer y cuál debe ser el camino del ensamble armónico obrero-empresarial, y con ello conseguir la resultante del equilibrio de los esfuerzos de cada sector que integra la dinámica de la vida de la Nación!

Braden-Perón es lo que en este momento viene a mi pensamiento. Ellos o nosotros. Me sigo quedando con el pueblo argentino, con su libertad, su pensamiento y su identidad.

Repito, y lo hago con toda humildad: hay miedo al miedo. Miedo a los golpes de la vida, a la seguridad social, a la enfermedad, a la marginación,

etapa previa de la exclusión, en que la persona se convierte en un número, en un objeto, en un paria de su propia tierra. El miedo al miedo lleva a la extorsión, preludio del sometimiento y de la esclavitud.

Las leyes sociales, como ésta que debatimos, deben tener articulados claros, equitativos, justos y con base solidaria y de respeto al trabajo de los que menos tienen, que son lo que debemos proteger. Los otros se protegen solos.

Respecto de las malditas leyes del mercado, quiero decir que valoran más el dinero que al hombre en cuanto a su majestad sagrada; leyes del mercado que no pueden oprimir ni succionar el esfuerzo ni el sudor de los que necesitan seguridad en el trabajo y garantía de estabilidad. Debe existir una protección para el trabajo productivo y esa cobertura de dignidad que debe acompañar a los seres humanos, a los obreros y también a los auténticos empresarios, a los empresarios nacionales, a los empresarios que se jueguen por el país, a los empresarios que no vendan el trabajo y el dolor argentinos, cualquiera sea su condición en su paso por este mundo.

Señor presidente: deseo terminar éste, mi pensamiento. No tengo compromisos con nada ni con nadie sino con mi lucha muy humilde y muy lejana al servicio de la Nación. No intento lesionar el pensamiento de nadie porque no he venido para eso a este Senado. He venido a ver cómo se puede construir el pensamiento que el país necesita para reivindicar su fuerza y proyectar su grandeza. Sólo expongo lo que pienso para la Nación, lo que responde a mis principios y convicciones.

Pido permiso a todos los peronistas para traer las raíces de ese gran movimiento nacional, humanista y argentino, expresadas a través de ese grande de la política y del pensamiento nacional, el general Juan Domingo Perón, con todos los errores que pudo haber tenido, como podemos tener todos. No obstante, nadie puede sacar de la historia esa gloria política estampada en el corazón de todos los argentinos.

Pido perdón por el término que utilizaré repitiendo a Scalabrini Ortiz: muchos de ustedes conocen quién fue. Decía que se pusieron de pie los adoquines de la ciudad de Buenos Aires para aplaudir al general Perón el 17 de octubre. Además, al referirse a los grandes de la política hizo muchas reflexiones. Entre ellas, con fuerza y convicción nacional y argentina, refiriéndose a Perón, dijo: "viejo macanudo". Yo lo repito con el respeto que merece el gran presidente.

Necesito repetir el pensamiento de Perón. Lo haré como final de mi disertación. Me refiero a Perón porque es el peronismo quien manda en el país y quien tiene la mayoría. Decía Perón en sus escritos durante su propio gobierno: "Queden con su conciencia los que piensan que el problema puede solucionarse aprisionando con mano de hierro las justas protestas de la necesidad o los que quieren convertir a la Nación en un rencoroso régimen de trabajo forzado, sin compensaciones ni alegrías".

Alegrías: eso tenemos que darle al hombre de trabajo. Alegría y esperanza para fortificar su espíritu, para que la Nación tenga confianza en su futuro, para que el hogar sea la plenitud de vida de todos los argentinos. Seguridad en el trabajo y no explotación del trabajo del hombre que está creando y proyectando la grandeza del país.

"Viejo macanudo" —lo digo con respeto—: tu pensamiento tiene vigencia. Ojalá sigamos aprendiendo de esas raíces para no equivocar el camino. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Cafiero). — Tiene la palabra el señor senador por Córdoba.

Sr. de la Sota. — Señor presidente: hasta no hace mucho tiempo, los argentinos nos informábamos de los grandes cambios que se producían en el mundo a través de los medios de comunicación. Hoy ello no ocurre porque el escenario social de nuestro país tiene los mismos denominadores comunes que caracterizan a la mayoría de los países del mundo avanzado. Sus problemas son, en general, nuestros problemas. Sus desafíos son, en general, nuestros desafíos.

No se me escapan —por supuesto— las grandes diferencias que aún nos separan, pero los ejes alrededor de los cuales se encuadran las mayores tensiones y conflictos sociales son muy semejantes.

Dentro de este marco hay una variable que a escala universal actúa como un motor dinámico y determinante de las transformaciones que estamos viviendo. Estamos hablando de la tecnología.

Tanto en la primera como en la segunda revolución industrial, las consecuencias demográficas, económicas, sociales e institucionales fueron revolucionarias. Como lo señaló un agudo pensador del siglo pasado en un célebre opúsculo: "El mundo avanzó más en una centuria, que en todo el resto de la historia de la humanidad".

Debe haber resultado extraordinario y sorprendente para los pensadores de las dos primeras re-

voluciones industriales reflexionar sobre estos procesos portentosos que generaron progreso, pero muchas veces a costa de gravísimas consecuencias de tipo social. Fueron tiempos en que se multiplicaba la población, aumentaban las expectativas de vida, caía abrumadoramente la tasa de mortalidad infantil, surgían nuevos medios de transporte, los caminos acortaban los tiempos y las distancias, las tasas de alfabetización crecían geométricamente, se lograba resolver el problema de las grandes hambrunas y las pestes que diezmaraban los pueblos y ciudades, el comercio internacional se multiplicaba y crecía; en fin, como se dice actualmente, el mundo comenzaba a ser una aldea global. Pero como ya dijimos, todos estos avances fenomenales significaron elevadísimos costos sociales para vastos sectores de la población.

La emigración de los campesinos a los centros urbanos y el propio crecimiento caótico de las grandes ciudades generaron condiciones de vida pavorosas y en muchos casos denigrantes. Importantes movimientos políticos y sociales surgieron y se desarrollaron teniendo como meta central atenuar las desigualdades y morigerar la miseria. Todas las encíclicas sociales que nacieron a partir de la *Rerum novarum* de León XIII estaban inspiradas en estas genuinas y sanas inquietudes.

La lectura de las investigaciones sobre las condiciones de vida de la clase obrera del siglo XIX aún hoy produce escalofrío. En nuestro país, el primero de esos estudios se realizó a principios de este siglo. En el famoso trabajo de Bialek Massé surgía con extrema nitidez la tensión entre el progreso que trae la tecnología industrial y sus efectos no queridos pero inevitables, como las indignas condiciones de trabajo, desempleo y miseria.

No obstante lo señalado anteriormente, durante las dos grandes revoluciones precedentes se pudo lograr superar uno de sus más letales efectos: el desempleo. La mano de obra expulsada de algunos sectores era absorbida con creces por otros. Los sectores afectados por las nuevas tecnologías dejaban millones de desocupados; pero, por otro lado, los sectores más dinámicos que iban emergiendo de la nueva economía captaban muchos más trabajadores que los que se expulsaban. Ocurrió así, señor presidente, durante el tránsito de la economía rural a la economía industrial y de esta última a la de servicios.

Pero hoy debemos afirmar que lamentablemente todo ha cambiado. Los contrastes de la época en que vivimos ni siquiera pueden ser calificados como revolucionarios. Creo que el concepto de

revolución no alcanza a dimensionar la magnitud del cambio ni tampoco sus implicancias. El concepto de revolución tiene hoy connotaciones más adecuadas para evocar tiempos románticos que potencialidad para preannunciar períodos de complejidad y características inimaginables. La era que estamos iniciando es más que revolucionaria.

Por eso, se impone la rápida construcción de una nueva cultura y de una nueva actitud hacia el trabajo para impedir que importantes sectores sociales queden excluidos por el impulso de la nueva tecnología y la lógica de las condiciones con que funciona el mercado.

La nueva cultura del trabajo implica redefinir su propia importancia como valor social. Significa, además, que para poder posibilitar tasas atenuadas de desempleo se tendrán que establecer masivos sistemas de educación permanente. En este ámbito, tanto el Estado como la empresa tienen un rol estratégico a cumplir. Principalmente el Estado, que debe asumir la responsabilidad de diseñar e implementar flexibles planes educativos que permitan una rápida adaptación a los cambios, sean ellos producidos por la tecnología, por las innovaciones en las formas organizativas de los procesos de producción o por la dinámica del mismo mercado.

Resulta innecesario aclarar que las responsabilidades de las empresas no son menores. La sociedad de fin de siglo tiene la obligación de dotar al trabajador de todas las herramientas intelectuales que le permitan esa adaptación a los nuevos tiempos. De ello depende, en gran medida, que pueda insertarse o mantenerse en el mercado laboral.

Se puede afirmar que uno de los más importantes y modernos derechos del trabajador es el de acceder a la preparación y al conocimiento necesarios para desenvolverse laboralmente. Será función primaria e inmediata del Estado desarrollar mecanismos que aseguren al desempleado su integración a la sociedad, impidiendo su exclusión.

Por otra parte, debemos advertir que ha finalizado la época en que se podía abordar la problemática de las relaciones laborales y de las condiciones del trabajo dentro de criterios rígidos y conservadores. El tiempo que vivimos nos impone una mentalidad distinta. El valor que debe permanecer inalterable en el tiempo, cualquiera sea la profundidad de la revolución tecnológica futura, es el de garantizar que el trabajo se ejerza en condiciones de justicia y dignidad humana.

A partir de allí, "es necesario una nueva visión, nuevos criterios, elásticos, modernos, realistas, sus-

ceptibles de ser adaptados a las exigencias de los nuevos tiempos que nos toca protagonizar. Para decirlo con las palabras de Juan Pablo II: debemos crear una nueva cultura, atenta a las exigencias integrales del hombre actual. Es ese ideario el que nos orientó en el diseño de esta reforma laboral.

El proyecto que tenemos hoy en tratamiento procura dar un primer paso en orden a modernizar las relaciones en el mercado del trabajo, pero no quiere descuidar la protección de quienes siguen siendo expulsados del mercado laboral ante los vaivenes de una economía mundial que en este mundo globalizado golpea cada tanto a nuestro país.

Nuestro gobierno ha venido realizando en pocos años una de las transformaciones más formidables del siglo, pero la profundidad de esas transformaciones exige velar por todos los miembros de nuestra sociedad.

En este fin de siglo, cuando las tecnologías reemplazan a la mano de obra humana, desplazándola en forma casi permanente del mercado del trabajo, es necesario legislar también para esos desplazados. Es necesario velar por ellos, tutelarlos. Eso es también lo que estaremos haciendo esta noche cuando aprobemos este proyecto de ley.

El artículo 11 del dictamen que estamos tratando es una muestra de esta filosofía. Establece una diferenciación clara entre un despido por causas laborales o sin causa y el despido discriminatorio. Actualmente, un despido originado en motivos de raza, sexo o religión, tiene el mismo tratamiento que un simple despido. Este proyecto de ley penaliza esta discriminación laboral, sin perjuicio de lo que penalmente le quepa, con un adicional de indemnización de un 30 por ciento, sin el tope que se establece para el resto de las indemnizaciones por despido.

En línea con esta necesaria protección a los desplazados es imprescindible encarar decididamente la capacitación de quienes van a ingresar al mercado laboral.

En el tercer milenio no tendrán cabida quienes no se capaciten para el trabajo. Nos está ocurriendo hoy. Hay una oferta laboral que está requiriendo que el empleado tenga capacitación técnica especializada con nivel terciario de formación. Y hay una desesperada pretensión de inclusión de nuestros desocupados en el mercado laboral que choca contra la limitación propia de tener formación primaria o secundaria incompleta, que los inhabilita aun para desempeñar las tareas más simples en la economía de servicios que hoy estamos protagonizando en este fin de siglo.

Este proyecto de ley que seguramente aprobaremos hoy contempla este aspecto, que deberemos profundizar intensamente en sucesivas normas y que seguramente será prioridad de este Parlamento.

Es particularmente grave la situación de los jóvenes que anhelan trabajar. Aún no se ha logrado una articulación entre el colegio o la universidad, y las empresas. Quienes están estudiando y desean trabajar para costearse sus estudios, o los que han terminado su formación y quieren ingresar al mercado laboral, viven un drama cotidiano. Juegan en su contra la falta de experiencia —que siempre es reclamada en los avisos de requerimiento laboral— y la falta de capacidad para moverse en un ámbito que les resulta extraño.

En este proyecto de ley se ha tratado de contemplar esos aspectos. Se hace hincapié en el contrato de aprendizaje, con una finalidad netamente formativa o en el régimen de pasantías, también en procura de la mejor capacitación del trabajador joven.

Está claro que aquí no se agota lo que el Poder Legislativo puede hacer. Pero reafirmar estas modalidades en que se potencia la relación trabajo-capacitación es un buen punto de partida que tenemos por delante.

Esta reforma es un paso más en un largo camino iniciado por nuestro gobierno a comienzos de la década. Ese largo camino transitado ha sido fructífero. Parte de los éxitos se ven hoy cuando ya es claro que hemos comenzado a vencer la batalla contra la desocupación que alcanzara su máximo pico en 1995. Lo dije hace poco en este recinto, al referirme al día del trabajo, que estamos viviendo una etapa histórica bisagra, en la que dejamos de ser lo que fuimos y empezamos lentamente a ser lo que seremos. No es un juego de palabras.

En estas etapas los conflictos producidos por el cambio aparecen claramente frente a quienes lo sufren, y los beneficios que el cambio conlleva aparecen como mediatizados en el tiempo y de difícil apreciación por parte de quienes somos los actores de la realidad social que hoy vivimos.

Sin embargo, ya hay cosas que aparecen más claras. Los datos en la mano de 1997 nos permiten decir que el nivel de empleo creció en noviembre último un 5,3 por ciento respecto de igual mes de 1996. Este aumento fue récord, partiendo de diciembre de 1995.

Aumentó también la cantidad de horas promedio trabajadas, lo que muestra un aumento adicio-

nal en la actividad laboral. Además, el empleo que crece es "en blanco", dándole a los trabajadores toda la protección legal.

Los datos que tenemos muestran que el ochenta por ciento del aumento del empleo en el Gran Buenos Aires corresponde a asalariados que aportan a su sistema previsional, es decir que no son empleos "en negro" ni temporarios. Es más, según la última encuesta permanente de hogares, el desempleo en la Argentina cayó al 13,7 por ciento, llegando al nivel promedio actual de los países europeos.

En sólo cinco meses se pasó de un 16,1 por ciento a un 13,7 y esto significó la creación de más de 300 mil puestos de trabajo.

Junto con la mejora del mercado laboral, expresada a través del aumento del empleo, los últimos cálculos revelan que continúa la incorporación de personas al proceso de búsqueda activa de nuevos trabajos.

Una de las causas que contribuyó a este aumento es nada más ni nada menos, señor presidente, que el incremento del Producto Bruto Interno en un 8 por ciento. Las transformaciones operadas en la economía argentina lograron lo que durante muchos años no se pudo concretar: la creación de empleos privados.

Sólo en octubre de 1997 se crearon 65 mil puestos de trabajo en el sector privado; la mayor dinámica en la generación de empleo durante ese mes se observó en el sector de las pequeñas empresas. En los últimos doce meses incrementaron su dotación de personal en un tres por ciento.

En todo este proceso mucho tuvo que ver la disminución del costo laboral unitario. Como ya dijimos, en consonancia con el crecimiento del empleo, entre 1993 y 1997 el costo laboral unitario experimentó una caída del 30 por ciento, según cálculos del Ministerio de Trabajo. Y la productividad media anual del trabajo en la Argentina creció a una tasa cercana al 3,6 por ciento anual, superando a los países emergentes contemporáneos más dinámicos.

Dentro del contexto internacional, nuestro país creció en competitividad en términos relativos, ya que en el mismo período el costo laboral unitario subió el 13 por ciento en el Brasil y bajó un 8 por ciento en el Japón y un 12 por ciento en Alemania.

Otro de los aspectos a destacar sobre las transformaciones producidas en la Argentina, es que desde 1995 —en que se llegó al pico de desocupación a causa del "efecto tequila" y de la situación

económica global— el aumento del empleo ha ido acompañado por una lenta pero sostenida mejor distribución del ingreso.

Los sectores de ingresos bajos aumentaron su participación en un 2,25 por ciento; los de ingresos medios aumentaron en un 3,5 por ciento.

Son muchos los éxitos que podemos mostrar, señor presidente. Y cuántos más nos gustaría poder exhibir en medio de un dinámico proceso de cambio como el que hemos debido enfrentar —con prudente audacia— en los últimos años.

Ojalá podamos exhibir muchos más en el futuro.

Quiero adelantar mi voto favorable a esta reforma laboral con la satisfacción de saber que se da un paso vigoroso en relación a los derechos del trabajador. Hoy el primer derecho es aumentar las posibilidades de nuevos empleos. Yo sé que en un ánimo retórico, cuando hablamos de soberanía en términos pasados, con estos cambios muchos se plantean en la apertura de nuestra economía y en la inserción de la Argentina en el mundo, cuánto es el proceso de trasnacionalización de nuestra economía.

Recuerdo una entrevista con el ex presidente del gobierno español, de la cual participamos juntos, señor presidente. Me estoy refiriendo al señor Felipe González, en una visita que nos hiciera allá por 1987, cuando el justicialismo comenzaba a adaptarse a los cambios mundiales para llegar a la responsabilidad de tener el gobierno que hoy detentamos. Y recuerdo que cuando él nos hablaba de la necesaria apertura de la economía española para integrarla dentro del proceso de globalización y de la integración de la Comunidad Económica Europea, usted, señor presidente, le preguntó cuánto era el porcentaje de trasnacionalización que había sufrido la economía de España. Y Felipe González con la simpleza y la claridad que lo ha llevado a estar más de doce años al frente del timón de la Madre Patria nos dijo: "No lo sé, pero sé cuál es el porcentaje pero mi principal preocupación no es hoy cuánto se ha trasnacionalizado. Mi principal preocupación es que esos capitales que llegaron no se vayan, y no yéndose garanticen cada vez más empleo para los españoles".

Señor presidente, considero que éste debe ser el criterio con el cual enfoquemos la idea de la soberanía. Hoy un país es cada vez más soberano en tanto y en cuanto le garantiza a sus habitantes empleo, comida, educación, salud y, por supuesto, mejores condiciones de dignidad en su condición

laboral. Seguramente con esta legislación estaremos evolucionando en el mercado laboral.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H. Senado, senador Eduardo Menem.

Sr. de la Sota. — Por supuesto que faltarán ajustes legislativos. Por supuesto que cualquier deterioro que se pueda producir en la relación laboral nos deberá tener con el ojo atento y vigilante para enmendar a través de la legislación cualquier problema que se nos pueda presentar. Pero quiero decirle, señor presidente, que esta legislación ayuda a los cambios que se vienen produciendo y no por nada ha sido aprobada y respaldada por el movimiento obrero organizado del país.

Yo sé que en el sector empresarial hay críticas y disconformidad frente a la legislación que vamos a aprobar esta noche, pero quiero plantear desde este recinto a los empresarios argentinos, que ellos comiencen también a hacer el balance social de sus empresas y no sólo el de la rentabilidad económica que los cambios y la estabilidad afortunadamente han originado para ellos.

Señor presidente: debo decirle que este legislador no está en contra de que en la Argentina haya cada día más ricos pero siempre estará en contra de que en la Argentina haya cada día más pobres y esto deben contemplarlo especialmente quienes detentan el capital de inversión en el país: nuestros empresarios, a los cuales podemos dar una recomendación del general Perón que ha sabido tener sabias expresiones. El nos dijo una vez que lo óptimo suele ser enemigo de lo bueno. Seguramente esta legislación que aprobaremos hoy no es óptima, pero tratemos de que sea buena y que cada día la podamos perfeccionar para dar a los trabajadores la primera y primordial garantía, la existencia del trabajo; para mejorar en competitividad, para bajar nuestros costos y ser cada vez más competitivos en el mundo global y para avanzar en el camino de la integración en el marco del Mercosur y garantizar empleo y dignidad a nuestra gente.

Por ello, señor presidente, voy a votar afirmativamente el dictamen en mayoría que está en consideración.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Formosa, Unión Cívica Radical.

Sr. Maglietti. — Señor presidente: nuestro bloque votará negativamente este proyecto y, en ese sentido, ya hemos escuchado los claros argumen-

tos expuestos por el señor senador López, miembro informante de nuestra bancada.

Pienso que no tiene sentido tratar este proyecto porque si en este momento tuviéramos que considerar una iniciativa relacionada con el problema laboral, deberíamos proponer un proyecto con dos artículos. El primero derogaría todas las disposiciones que sancionó este gobierno para facilitar los contratos precarios de trabajo y, el segundo, dejaría vigente la ley 20.744, sin ningún tipo de modificaciones, a los efectos de que se haga un estudio para el perfeccionamiento de esa ley, que mejore la situación de los trabajadores y no que la empeore, como sucede con el proyecto en consideración.

En efecto, la modificación a la legislación vigente, tal como lo propone este proyecto, perjudica a los trabajadores porque disminuye la indemnización por preaviso y por despido. Además, la figura de la pasantía quedará al arbitrio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y también constituirá un tipo encubierto de contrato precario de trabajo.

Por otra parte, también se modifica el contrato de aprendizaje y se eleva la edad hasta los 28 años. Eso también me hace pensar que estamos en presencia de otro nuevo tipo de contrato precario. De manera tal que, aunque se apruebe este proyecto, que en algo podría mejorar la situación de los trabajadores argentinos, en definitiva, no es muy importante lo que puede ganarse.

Este gobierno basó la transformación económica del país en las privatizaciones, que tan criticadas fueron por su procedimiento y que, además de ser violatorias de la ley, trajeron graves consecuencias. Justamente, como consecuencia de esos procedimientos, hoy tenemos servicios caros y monopolizados, con tasas dos y tres veces superiores al mercado internacional. También trajeron como consecuencia la destrucción de las PYMES, que son las verdaderas generadoras de fuentes de trabajo en todos los países del mundo.

Se han cerrado más de cuarenta mil PYMES en todo el país que significaron desocupación porque las grandes empresas, en lugar de crear fuentes de trabajo, expulsan trabajadores. Por eso es que nos encontramos con ese problema crítico.

A esta destrucción de las PYMES mediante la apertura indiscriminada de nuestro mercado, que destruyó miles de fábricas porque no tuvieron tiempo de hacer los cambios necesarios para sobrevivir y adecuarse, le debemos agregar una política

económica que crea un tremendo privilegio para el gran capital. Es cierto que al país vienen a radicarse los grandes capitales, pero no es menos cierto que lo hacen para obtener beneficios exorbitantes. En el caso del sector bancario, por ejemplo, para cobrar intereses que son tres o cuatro veces superiores al mercado internacional. En el caso del sector automotriz, para vender unidades que duplican los precios internacionales. Sin embargo, cuando se trata de los productos argentinos, sí se aplican los precios del mercado internacional, que no rigen casi nunca para las empresas extranjeras radicadas aquí. Además, no sólo obtienen enormes privilegios sino que encima son las grandes evasoras de impuestos, con el agravante de que están implicadas en hechos gravísimos de corrupción como el caso IBM-Banco Nación y otros que han resultado ser un escándalo en el orden nacional e internacional.

En nuestro país se ha seguido una política totalmente inversa a la aplicada por el Mercado Común Europeo, porque ellos conservaron todos los derechos de los trabajadores e, incluso, los mejoraron. Es cierto que allí también la desocupación aumentó a dos dígitos, pero no lo es menos que las medidas que piensan adoptar algunos gobiernos como Francia y Alemania, no tienen que ver con la denominada flexibilización laboral—con la consiguiente desaparición de los derechos de los trabajadores y la elaboración de contratos precarios como aquí se pretende—, sino que estudian soluciones de otra naturaleza como, por ejemplo, disminuir la jornada laboral de ocho a seis horas, medida que entrará en vigencia, probablemente, a partir del año 2000. Eso es lo justo.

En el siglo pasado tuvimos un capitalismo como siempre explotador en la medida de lo posible y en tanto no tuviera barreras por parte de los gobiernos democráticos. Esas barreras llegaron y, así, las jornadas de trabajo que superaban las doce horas tuvieron que circunscribirse a esa cantidad de horas. En aquel entonces, eso se consideró una conquista social. Luego vino una nueva lucha, para establecer una jornada de ocho horas, la que se impuso—por supuesto— luego de largas controversias con las grandes empresas.

Pero hoy ese capital, que tiene ganancias extraordinarias porque la producción está multiplicada por la tecnificación, debe tener como contrapartida una nueva disminución del horario de trabajo. En este país y en todos los países del mundo, hoy debería existir la jornada de seis horas. Incluso, debo vaticinar que no está lejos y que lle-

gará el momento en que esa jornada será de cuatro horas, porque a medida que el gran capital crece, a través de las nuevas tecnologías sus ganancias se transforman en exorbitantes. En virtud de ello expulsan cada día a más trabajadores, reducen fuentes de trabajo y traen miseria y pobreza para todos los países del mundo, especialmente para los del Tercer Mundo.

Lógicamente, la humanidad tiene que luchar contra esos grandes intereses y tratar de que la jornada laboral disminuya cada vez más. En realidad, creo que tendrá que disminuir porque las ganancias son cada día más grandes y, proporcionalmente, también los capitales pueden pagar a los obreros con jornadas de seis horas hoy y, tal vez mañana, de cuatro. Esa es la evolución que tendrá que sufrir el mundo del trabajo.

En este país estamos lejos. En Francia y en Alemania, por ejemplo, se están acercando a la jornada laboral de seis horas.

Pero, ¿qué ocurre en países como el nuestro? Realmente, debo confesar que nunca imaginé que la Argentina retrocedería tanto. Tuvimos muchas luchas laborales para lograr la jornada de ocho horas. Cuando se conquistó, ¿quién podría imaginarse que eso podría ser destruido? Sin embargo, hoy en la Argentina hay un sector importante del trabajo que debe cumplir jornadas de doce y más horas. Estamos volviendo al capitalismo sin frenos de ninguna naturaleza, porque este gobierno está demostrando debilidad, porque no pone los frenos adecuados y porque sigue parámetros que no emplean los países desarrollados, sino sólo los del Tercer Mundo, que no tienen los medios ni las instituciones adecuadas, como por ejemplo un Poder Judicial fuerte o entes reguladores que pongan freno a los abusos de los grandes capitales. Como consecuencia de ello, también poner un freno al desquicio que quiere transformar el derecho laboral, porque pretenden eliminar las conquistas de los trabajadores; y en nuestro país ya lo han logrado en una tremenda proporción.

Hoy tengo que manifestarle al gobierno que por lo menos este proyecto mejora en algo la situación de los trabajadores, pero no elimina totalmente el estado en que hoy se encuentran ni elimina las posibilidades de los abusos que se están cometiendo a través de los contratos precarios.

Es reconocido por la Organización Internacional del Trabajo que el costo laboral incide muy poco —diría que nada— en la elaboración de los productos. Se lo voy a demostrar con mucha facilidad.

Según la Organización Internacional del Trabajo el obrero argentino gana 5,20 pesos por hora; en Estados Unidos, 18; en Alemania, 32; en Francia, 20. Podemos decir que los países del Mercado Común Europeo, agregando al Japón, participan del 80 por ciento del comercio del mercado internacional. Quiere decir que los países que remuneran mejor a sus trabajadores son los que tienen el 80 por ciento del comercio internacional.

En consecuencia, el costo laboral no incide porque de otra manera no puede ser que los países que tienen los jornales más altos sean los que tengan entre sí el 80 por ciento del comercio internacional. Si el costo laboral fuera tan importante, esos países no podrían mantener los precios que hoy les pagan a sus trabajadores. Pero evidentemente, ese ejemplo demuestra que los costos laborales prácticamente no inciden en el precio final del producto; ahora bien, en los países del Tercer Mundo los jornales son inferiores, so pretexto de que hay que abaratar costos. Esta expresión no se ajusta a la realidad en ningún lugar de los países desarrollados, siendo aplicable únicamente a los del Tercer Mundo. Lógicamente se trata de la explotación clara que hace el capitalismo abusivo en estos países, porque no tiene freno de ninguna naturaleza. Ello es así porque en los países del Tercer Mundo las democracias no se pueden defender de este capitalismo, que es más fuerte que los propios Estados y, como consecuencia de esto, imponen sus reglas de juego y lógicamente actúan pensando sólo en los beneficios y nunca en el bienestar de los trabajadores.

Entonces reafirmo —porque lo sostienen todos los economistas— que la competitividad a escala internacional no depende del costo laboral sino de otros factores, como el de la producción. En los países desarrollados ganan mucho más los trabajadores, incluso con menos horas de trabajo, porque tienen una mayor producción con una mejor tecnificación.

La precarización del trabajo se produce fundamentalmente en estos países del Tercer Mundo. Como dije, desgraciadamente ya es común la jornada de doce o más horas de trabajo; es un hecho terrible que tenemos que reconocer. Esa es la situación en la Argentina y en otros países del Tercer Mundo; no hay descanso dominical ni vacaciones.

¿Y qué tenemos que hacer entonces los argentinos? Tenemos que luchar contra este sistema perverso, porque lo exige la sociedad, porque lo exigen los argentinos, con una desocupación cada vez

más tremenda, una miseria y una pobreza cada vez más grandes y donde —nos guste o no— cada día el 10 por ciento de los argentinos tiene una participación casi del 40 por ciento del total de la riqueza del país. Es decir que la franja de pobreza ha aumentado tremendamente. Como consecuencia de ello hoy tenemos un índice de delitos mucho más elevado, más analfabetismo, pagamos las consecuencias en el área de la salud y sufrimos otros problemas derivados de la desocupación, de la miseria y de la pobreza.

De acuerdo con encuestas realizadas, se considera que el alto porcentaje de desempleo que tiene el país alcanza al 17 por ciento, si bien el último índice arrojó como resultado poco menos del 14 por ciento. Pero debemos reconocer que eso obedeció a que se incorporaron cuatrocientas noventa y cinco mil personas en el denominado "Plan Trabajar"; aunque, de acuerdo con los especialistas, no podemos hablar de personas ocupadas, puesto que se trata de subsidios. En consecuencia, podemos afirmar que el índice de desocupación en el país se mantiene.

No por nada el Banco Mundial sostuvo que para bajar la desocupación al 8 por ciento anual, la Argentina necesita tener un crecimiento sostenido del cinco por ciento durante veintiocho años, lo cual es prácticamente imposible ya que, generalmente, los promedios en períodos largos no superan el dos o tres por ciento anual.

Cierto es que la economía creció un 35 por ciento como consecuencia del plan económico de este gobierno, pero no es menos cierto que la desocupación abarca hoy a dos millones de personas y la subocupación, a un millón seiscientos mil; es decir que entre desocupados y subocupados existen en el país tres millones seiscientos mil personas, lo que representa casi el 30 por ciento de la población laboral.

El mayor impacto lo sufren las mujeres y los jóvenes de 14 a 25 años, que constituyen la mitad de la masa de desocupados, según el índice aparecido en un matutino de esta ciudad.

Observen qué grave es todo esto. Los trabajadores "en negro", los que poseen trabajos precarios, los subocupados y los desocupados comprenden nada menos que el sesenta y cinco por ciento de la masa laboral; en tanto que los trabajos estables y con cobertura social solamente benefician al treinta y cinco por ciento de los trabajadores.

Evidentemente, el país ha entrado en una etapa muy grave, al respecto. Creo que la crisis que afecta

al sector del trabajo es gravísima y muy difícil de superar.

Lo mismo ocurre con el sector de los trabajadores autónomos, que suman tres millones y medio. En 1994 aportaron al sistema previsional un millón trescientos ochenta y cuatro mil trabajadores; en 1997 lo hicieron solamente ochocientos noventa y cinco mil; es decir que dejó de aportar medio millón de trabajadores.

Esta es una demostración clara de la crítica situación en que hoy se encuentran los trabajadores autónomos, que además deben pagar elevados aportes previsionales, que alcanzan casi a cien pesos mensuales, que no pagan porque no se encuentran en condiciones de hacerlo.

Por otra parte, los contratos precarios, con bajos niveles de remuneración, y el aumento del horario de trabajo a doce horas trajeron también como consecuencia una situación injusta en la distribución de la riqueza.

Según el INDEC y la FIDE, el cuarenta y tres por ciento de nuestra población gana menos de quinientos pesos mensuales y la canasta familiar tiene un costo de mil seiscientos.

En los partidos del Gran Buenos Aires, sobre una base de tres millones de personas, de cada diez ciudadanos, cuatro tienen ingresos de aproximadamente ciento cincuenta pesos mensuales.

Dado que mi tiempo se agota, no me voy a referir a los pronunciamientos de la Iglesia —que son numerosos—, que critica el rumbo neoliberal del gobierno, hace advertencias sobre la desatención de las urgencias sociales y formula reclamos respecto de la humanización de la economía.

También en la reunión que mantuvieron con el presidente en 1996, los obispos del Episcopado lo hicieron notar la preocupación por la desocupación, así como la necesidad de evitar la flexibilización laboral que compromete las conquistas sociales y destruye los derechos de los trabajadores.

El desempleo sigue en aumento pese a que el gobierno lo niega ahora como lo negó antes. Primero dijo que el desempleo no existía, luego sostuvo que era consecuencia de la cantidad de trabajadores que vinieron de los países limítrofes, posteriormente dijo que era un fenómeno mundial y, por último cuando reconoció su existencia y el INDEC ya indicaba un nivel del 17 por ciento, consiguió reducirlo al 13,8 por ciento a través del empleo de 495.000 personas que se incorporaron al Plan Trabajar. En consecuencia, no se trataba de una reducción real, como dije, sino de un subsidio.

Quiere decir que la desocupación continúa en los mismos niveles y sin ninguna posibilidad de que disminuya en el futuro.

Hago esta afirmación porque la situación de las PYMES continúa siendo crítica y ellas son, precisamente, las fuentes reales creadoras de trabajo, ya que en casi todos los países del mundo absorben entre el 60 y el 80 por ciento de la mano de obra. Como aquí la situación de las PYMES cada día es más crítica, lo más probable es que la desocupación continúe en aumento.

Lógicamente, en la Argentina esa desocupación no sólo es fruto de la crisis de las PYMES, sino que viene aparejada por la apertura indiscriminada de los mercados, por la falta de créditos accesibles a intereses internacionales y por la privatización masiva de las empresas del Estado que dejó a miles de personas desocupadas.

Con la adquisición de empresas argentinas por parte del capital extranjero, plantas que contaban con hasta 1.000 obreros se vieron reducidas prácticamente a la mitad, en algunos casos, como consecuencia de su nivel de tecnificación.

Es necesario encontrar soluciones; y las soluciones no están en la precarización del trabajo, sino en el apoyo a las PYMES.

Es necesario contar con una legislación que favorezca y proteja a los trabajadores y que elimine la apertura indiscriminada de los mercados.

Esto me hace recordar lo acontecido en el Brasil. Allí, cuando se abrieron los mercados, se importaron juguetes del Oriente. Como consecuencia de ello, se cerraron más de la mitad de las más de 1.000 fábricas existentes. Cuando el gobierno se dio cuenta de que iba a ocurrir lo mismo con las demás, impuso normas de calidad. Como consecuencia de esta medida, en el Brasil actualmente existen más de 500 fábricas de juguetes.

El Brasil, que es nuestro socio más importante, ha tomado diversas medidas para evitar la desocupación que hoy existe en la Argentina y que nuestros problemas lleguen a ellos. Actualmente, el Brasil tiene sólo un 5,6 por ciento de nivel de desocupación gracias a una política económica que defiende sus industrias, los derechos de los trabajadores y que, bajo ningún punto de vista, permite el cierre indiscriminado de las PYMES; ya que cuentan con un alto grado de estímulo, incluso, para ingresar al mercado exportador.

Y no hablemos del caso de Chile, donde de 6.000 empresas que exportan, 5.800 son PYMES. Esto se ha logrado mediante la implementación de pro-

gramas de gobierno que, con mucho acierto, dieron resultados formidables.

La disminución de la jornada laboral, como dije anteriormente, deberá llegar en su momento.

La tecnología, como también mencioné, aumentó la producción, con expulsión de la mano de obra. Lo lógico sería que el aumento de la producción, que implica un aumento extraordinario de las ganancias, viniera acompañada, insisto, por la disminución de la jornada laboral. Pero las grandes empresas lucharán para que eso no ocurra.

Al respecto, quiero mencionar una frase que demuestra lo acertado de ese principio. En un interesante libro de Vivian Forrester llamado *El horror económico*, se indica que, según Edmund Feltz, en los Estados Unidos se alienta el empleo en detrimento del salario, mientras que en Europa se favorece el salario en detrimento del puesto de trabajo. Puede ser —dice— pero nada, en ninguna parte, va en detrimento de las ganancias. Reitero: nada, en ninguna parte, va en detrimento de las ganancias.

Es decir que nada de lo que hoy se hace en este mundo globalizado va en detrimento o en contra de las ganancias de las multinacionales, que se han multiplicado en forma terrible, que manejan el mundo financiero y que en horas pueden crear crisis internacionales, como ha ocurrido en México y en los países del sudeste asiático. Ni siquiera los órganos internacionales —como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional— están en condiciones de controlar esos fondos financieros impresionantemente elevados.

Es así como la introducción de capitales a corto plazo puede generar una crisis, tal como ocurrió en los países que acabo de mencionar. Repito: ante cualquier circunstancia adversa, estas empresas pueden retirar inmediatamente del país los capitales y crear crisis que no pueden ser sostenidas por ningún órgano internacional; menos aún un país como la Argentina.

Quiero traer a colación otro ejemplo de lo que se ha hecho en este país con relación a las ganancias exorbitantes que obtienen las empresas. El gobierno propició la disminución de los aportes patronales entre el 30 y el 80 por ciento en el año 1995. Con ello se redujeron en 2.800 millones los fondos que dejó de recaudar el Estado y nuestro sistema previsional entró en crisis. Esto tuvo como objetivo que las grandes empresas lograran un mayor beneficio. No trajo aparejado una disminución de precios, ni un aumento de los empleos, ni

de los salarios, como afirmaba erróneamente el Poder Ejecutivo.

Esta situación quedó reflejada en los balances de las empresas a través de un mayor beneficio. Es decir que esta medida que tomó nuestro gobierno, desgraciadamente sirvió para que las grandes empresas obtuvieran más ganancias y para que el Estado se perjudicara al no percibir 2.800 millones de pesos anuales, que tanta falta hacen a nuestro sistema previsional.

Ahora existe el agravante de que se están elaborando nuevos proyectos para reducir aún más los aportes patronales y para que el Estado obtenga una menor recaudación. Además, se crean nuevos impuestos que van a afectar a la población en general. Es decir que todos los impuestos que se pretende crear son pagados por la población y ninguno por los grandes capitales.

Quiero citar un ejemplo. He presentado un proyecto en el que me acompaña un grupo de senadores radicales por medio del cual se grava la negociación de las acciones en la Bolsa, tal como existió en nuestro país desde 1989 a 1992. En todos los países desarrollados están gravadas las transacciones en las bolsas. Esto no ocurre aquí, porque la norma fue derogada en el año 1992.

Si aplicamos un impuesto de tan sólo un 1 por ciento a la transferencia de las acciones en la Bolsa, de un 1 por ciento a la tenencia de las acciones y de un 5 por ciento al incremento patrimonial de los bancos podremos recaudar 1.800 millones de pesos. Con este dinero podremos financiar la situación de los docentes, que tanto reclaman desde esa carpa blanca que está frente al Congreso.

Para solucionar su situación el Poder Ejecutivo ha elaborado un proyecto por el cual se crea un nuevo impuesto para gravar los automotores. En este caso lo volvería a pagar el pueblo y no las grandes empresas que tienen enormes beneficios y que este gobierno privilegia a través de todos los medios.

Veo que mi tiempo se está acabando. Para terminar, quiero decir que no era necesario presentar este proyecto. Creo que simplemente se requiere la derogación de los contratos precarios. Pero debe ser la derogación sincera, no disfrazada con otro contrato como el de aprendizaje o el de pasantías u otros relacionados con la situación actual.

Por estos motivos, los senadores del bloque de la Unión Cívica Radical nos vemos obligados a votar en contra de esta iniciativa, que si bien debemos reconocer mejora la desastrosa situación de

los trabajadores, la empeora con relación a la ley 20.744 que está vigente. No sólo debemos hacer críticas a los desaciertos del gobierno, sino que también debemos tener la nobleza necesaria para reconocer aquellas cosas que se hacen bien. El actual gobierno tiene sus cosas buenas, pero en este aspecto también tiene graves equivocaciones. Necesariamente debemos criticarlas para hacer conocer cuáles son los puntos de vista de la Alianza y fijar claramente cuál es nuestra postura en cada problema que afecta al pueblo argentino.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja, del bloque justicialista.

Sr. Yoma. — Señor presidente: voy a ser muy breve, fundamentalmente teniendo en cuenta lo avanzado de la hora y que seguramente no vamos a tener el número suficiente para que la norma se vote hoy. Pero habida cuenta de que vamos a tratar de avanzar en la lista de oradores para poder votar directamente el proyecto en la próxima sesión, es interesante plantear algunos temas para que en el curso de esta semana podamos inclusive introducir algunas modificaciones que puedan mejorar en algunos aspectos la redacción del dictamen.

Quiero decir que voy a acompañar el proyecto con mi voto afirmativo. Creo que definitivamente es un avance con miras al otorgamiento de una mayor seguridad a los trabajadores. ¿Por qué digo esto? Creo que el empleo es, definitivamente, el tema del fin de siglo. Lamentablemente, tenemos un recinto vacío en este debate tan importante, en el que hay algunos aspectos de la propuesta que pone a consideración de la Cámara el gobierno nacional que merecen ciertas reflexiones, sobre algunas de las que ya estuvimos conversando con los compañeros de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Se me ocurren un par de prevenciones respecto de este tema, pero abonadas por datos estadísticos. Una cosa es plantear el tema del empleo con una tasa de desocupación del 18 por ciento —como la que tenía la Argentina cuando se sancionó la actual legislación, que establece contratos por tiempo indeterminado y distintas variantes de contratos promovidos— y estando inmersos en un proceso de recesión importante, y otra distinta es la reforma laboral que se plantea al año siguiente con una tasa de desempleo del 13 por ciento, con una economía que ha generado 900 mil puestos de trabajo en un año, con una tasa de desempleo en franco descenso y habiéndose superado la aguda recesión que azotó al país a fines de 1994 y duran

de 1995. Son importantes estas reflexiones porque el gobierno y nuestro bloque consideran —en esto creo que nos asiste la razón— que es tan afligente la situación del trabajador desempleado como la de aquel que tiene el trabajo inseguro. Entonces, una cosa es generar modalidades de trabajo que puedan implicar fundamentalmente para las PYMES la creación de puestos de trabajo a través de distintas promociones al empleo —con una tasa de desempleo altísima—, y algo distinto es comenzar a consolidar esos puestos de trabajo que se han generado, tarea en la que estamos ahora.

Obviamente, hay algunas dudas, que planteé al presidente de la comisión; hay algunas prevenciones que creo que deben ser compartidas y que son parte del dictamen.

Si tomamos algunos datos estadísticos, una de las dudas que me surge se refiere a la modalidad de contratos promovidos, que se ha duplicado en un año ya que formaba parte del 4 por ciento de toda la masa de contratos de empleo mientras que ahora lo hace en un 8 por ciento. Esto habla a las claras de que ésta es la modalidad contractual que más adherentes ha ido generando dentro de las PYMES, que son las que adoptan este tipo de variantes.

Entonces, nuestra primera preocupación consiste en determinar cuál puede ser el efecto no deseado que provocará la eliminación del contrato promovido. No sea cuestión que esto provoque una masa de trabajadores en negro. Este es el primer signo de interrogación, la primera señal amarilla. Frente a la cultura empresarial argentina, ¿qué garantía tenemos de que al eliminar esta modalidad de trabajo no pasemos a engrosar el trabajo en negro? Estamos hablando de aproximadamente 300 mil puestos de trabajo, que obviamente no es poco. Como dije, ésta es la primera duda que tengo.

Pasemos a otro tema. Si consideramos la tasa de empleo que alcanzó nuestro país, advertiremos que en el último año estamos entre los primeros países de la Tierra. Tomemos por ejemplo el crecimiento del empleo en miles de personas. Entre octubre de 1996 y octubre de 1997, la Argentina generó 810 mil puestos de trabajo. Es el país que mayor tasa de empleo registra en ese año en el mundo: 7,7 por ciento. Con esta tasa superó a países como Noruega, que registró un 3 por ciento; España, 3 por ciento; Canadá, 2,7; Portugal, 2,6; Finlandia, 2,5; Estados Unidos, 1,9; Reino Unido y Gran Bretaña, 1,8; y Dinamarca, 1,3.

Es cierto que de este 7,7 por ciento puede haber un 2 por ciento que se podría considerar dentro de

los distintos programas de empleo financiados por el Estado nacional. Supongamos que no sea ese porcentaje, sino el 5 por ciento. Aún así, sigue siendo formidable esta tasa de empleo generada por la política económica de este gobierno. Pero obviamente tenemos un gran componente de contratos promovidos.

La garantía que perseguimos con este proyecto —que voy a apoyar, a pesar de mis prevenciones—, su espíritu, es consolidar el contrato promovido, pero evitar que dicha modalidad pase a engrosar el trabajo en negro. Por esta razón ya manifesté al presidente de la comisión que hay una cláusula que particularmente considero negativa con miras a ese objetivo. En efecto, aunque los motivos de la cláusula sean buenos, hay un efecto no deseado. Me refiero al artículo 22 del dictamen, Cláusula transitoria, en el que se establece que a la sanción de la ley todos aquellos contratos promovidos pasarán compulsivamente por vía legislativa a ser considerados trabajos por tiempo indeterminado, es decir, que los trabajadores pertenecerán a la planta permanente.

Conversábamos con el presidente de la comisión y con los compañeros del bloque acerca de que teniendo en cuenta la cultura de los empresarios argentinos, tememos que anoticiados a través de los medios de que puede ponerse en vigencia una norma de este tipo, tal vez comience un proceso de cesantías, a fin de evitar que la ley coloque en la planta permanente a los trabajadores contratados con distintas modalidades de contratos promovidos. Esto podría provocar una ola de despidos a partir de mañana mismo, cuando la patronal argentina tome conocimiento de que puede darse una situación de este tipo.

Entonces, si bien esta cláusula persigue un fin alto al dar estabilidad al llamado contrato precario, podría tener un efecto negativo en la tasa de empleo y en la fuente de trabajo.

Por eso, voy a plantear en el ámbito de la comisión que cuando llegue el momento de la votación —no creo que sea hoy, sino la próxima semana— se modifique o se elimine esa cláusula transitoria, tratando de buscar otra redacción para que no produzca estos efectos no deseados, que pueden ser nocivos para la formidable tasa de empleo que ha generado la economía argentina durante un año. Ese es uno de los temas que voy a plantear cuando llegue el momento del tratamiento en particular de esta iniciativa.

Es imposible desligar el debate sobre el empleo de las políticas tributaria y educacional. Hay paí-

ses como Gran Bretaña, por ejemplo, que han vinculado directamente la educación con el empleo. Tan directa es esa vinculación en Gran Bretaña que existe un ministerio de educación y empleo. De esa manera, la capacitación se vincula directamente con la generación de empleo.

Precisamente, eso se está presentando en nuestro país como un problema central. Resulta imposible desligar a la educación del debate sobre el empleo.

A continuación, voy a analizar el comportamiento del nivel educativo en la tasa de desempleo. Este es un dato concluyente de lo que implica la educación y el empleo. Dentro de la tasa de desocupación de la Argentina, el 71 por ciento de los desocupados son personas que no han completado el secundario y sólo el 28 por ciento tiene el secundario completo. Es decir que hay un gran componente de personas con nivel bajo de educación dentro del más alto nivel de desempleo.

Repito: el 71 por ciento de los desempleados no ha completado la escuela secundaria. Entonces, debemos hablar del tema de la capacitación en el marco de las políticas, proyectos y propuestas tendientes a seguir derrotando al desempleo, algo que efectivamente está haciendo este gobierno de acuerdo con los datos objetivos que marcan las estadísticas.

Además, hay 300 mil puestos de trabajo bajo la modalidad de contratos promovidos y un 40 por ciento de trabajo en negro en la Argentina. Es insostenible tamaño tasa de empleo en negro en una economía y un cuerpo social sanos. Por eso, se torna imprescindible el debate que hoy está promoviendo el peronismo. Es lamentable que desde la oposición se haya elegido el camino de la demagogia y del oportunismo y no el del debate serio frente a los datos que se registran hoy en la sociedad argentina.

Y digo que la oposición eligió el camino de la demagogia porque recuerdo algunas declaraciones realizadas hace pocas semanas atrás, de conspicuos dirigentes de la Alianza, por ejemplo, del diputado Carlos Alvarez quien en todos los diarios sostuvo: "Vamos a apoyar la reforma laboral que propone el gobierno". Obviamente, esas manifestaciones provocaron un profundo debate y distintas críticas dentro de la Alianza y de parte de sus aliados ocasionales —entre ellos, una parte del gremialismo—, lo que los obligó a arriar la bandera del discurso y del debate serio para plantear un debate demagógico y oportunista.

La propuesta del gobierno no cambió sustancialmente, por cuanto sigue siendo la misma. No obstante, ahora dicen: "No, la Alianza va a llevar su propio proyecto. No vamos a compartir el debate serio que nos propone el gobierno porque electoralmente quizá no nos convenga."

Todavía estamos esperando la propuesta de debate serio que nos va a hacer la Alianza en el tema del empleo, que los hizo abandonar su proyecto originario de acompañar el debate que estaba llevando a cabo el gobierno.

También es importante el debate de las formas contractuales promovidas porque dentro de los distintas variantes del contrato por tiempo indeterminado en las negociaciones colectivas, el 40 por ciento ha sido pactado por parte de los gremios como distintas modalidades promovidas. Entonces, no es una tarea fácil o simple borrar con un artículo de la ley dichas modalidades contractuales. Si lo hacemos livianamente, corremos el riesgo —reitero— de aumentar el porcentaje del trabajo en negro o de perder puestos de trabajo, como puede suceder con la mencionada cláusula transitoria contenida en el artículo 22.

En estos temas encontré eco en la Comisión y en los compañeros de bloque; forman parte de nuestras preocupaciones. Si el proyecto se vota hoy o dentro de una semana, vamos a tratar de dar una respuesta en el marco de este apoyo positivo a lo que consideramos que es un paso adelante para la consolidación del trabajo de los argentinos y para eliminar la precariedad laboral.

También voy a plantear en su momento una modificación —ahora voy a ser breve dado la hora— al artículo 11 respecto del despido arbitrario por discriminación. Esta propuesta es para mejorar la redacción y saldar un debate que está hoy en ciernes en cuanto a la interpretación de la ley 23.597 denominada antidiscriminatoria, que sancionó este Congreso. Hay juristas que dicen —incluso tengo entendido que hay fallos de primera instancia de la justicia ordinaria— que cuando la ley antidiscriminatoria habla de la discriminación por sexo se refiere al género, pero no a la orientación sexual. Entonces quedaría afuera de la interpretación de la norma la discriminación por orientación sexual.

Además, cuando esa norma habla de ideología política, también quedaría afuera la opinión política o gremial como materia de protección en lo que hace al despido arbitrario por discriminación.

En este sentido, voy a acercar a la Comisión una propuesta de modificación en el artículo 11 del dictamen. Donde dice: "Será considerado despu"

discriminatorio el originado en motivos de raza, sexo y religión" debe decir: "Será considerado despedido discriminatorio el originado en motivos de raza, sexo, orientación sexual, religión". Y la redacción continuaría con lo que se prevé en la ley 23.592, agregándose "ideología u opinión política o gremial". Luego voy a acercarme al presidente de la comisión la redacción definitiva de la modificación que voy a proponer para salvar —reitero— esta interpretación que violenta el espíritu de la ley antidiscriminatoria en cuanto al sexo y a la ideología política.

Considero que está fuera de discusión cuál fue el espíritu de los constituyentes al establecer esto. Pero hay juristas y jueces que opinan lo contrario, lo cual ha generado un debate. Creo que es bueno que en esta ley lo saldemos. Por eso es que voy a proponer la eliminación de la cláusula transitoria contenida en el artículo 22 o su modificación, por los motivos que expresé anteriormente respecto al trabajo promovido, y esta modificación al artículo 11.

Sr. Presidente (Menem). — Antes de ceder la palabra al señor senador por la provincia de Jujuy, quiero manifestar a los señores senadores que como no hay quórum suficiente para votar, voy a pasar lista cuando terminen de exponer los oradores anotados.

Luego de pasar lista la Presidencia va a llamar durante cinco minutos antes de levantar la sesión.

Esto es tener un mínimo de consideración por los señores senadores que permanecen en sus bancas o en el Senado hasta esta hora.

Tiene la palabra el señor senador por el Chaco.

Sr. León. — ¿Por qué no pasa lista ahora y se sigue el debate el próximo miércoles?

Sr. Presidente (Menem). — Porque estaba previsto el debate para esta sesión. La Presidencia considera que se debe respetar a los señores senadores que están presentes hoy; todos tienen las mismas oportunidades.

Sr. León. — Señor presidente: lo que yo manifesté fue con total consideración.

Usted acaba de decir que hay mucha gente que no ha respetado eso.

Sr. Presidente (Menem). — Por eso voy a pasar lista.

Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

Sr. Tell. — Señor presidente: como usted lo ha manifestado, cuando tenemos que tratar proyectos importantes nos quedamos solos.

También estuvimos solos en la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Pensábamos que la oposición iba a acercarse un proyecto alternativo y tuvimos que trabajar exclusivamente con el proyecto de reforma laboral presentado por el Poder Ejecutivo nacional.

Sobre el aspecto técnico-legal de la cuestión laboral, ya se ha referido el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. En consecuencia, yo abordaré el tema desde otra óptica.

El debate que damos hoy sobre su contenido se realiza en el marco de una franca oposición de los sectores empresarios. Sectores que, sin escatimar la utilización de recursos económicos, han intentado convencer a la sociedad argentina sobre lo inconducente y contraproducente del texto en tratamiento.

La mención de la actitud empresaria no intenta recrear enfrentamientos clasistas, hoy abandonados afortunadamente en el país. La sociedad, y principalmente sus dirigentes gremiales, han abandonado el dogmatismo de antaño en aras de lograr la modernización reclamada por todos los trabajadores argentinos, razón más que suficiente para requerir a quienes por interés o compromiso participan en este debate, dejen de lado fórmulas rígidas y dogmáticas e intereses político partidarios, en pos de realizar un concienzudo análisis de errores del pasado y las necesarias correcciones que es necesario adoptar en el futuro.

Este Honorable Senado, sin presiones de ningún tipo e inspirado en el único objetivo de lograr el pleno empleo de nuestra población trabajadora, sancionó oportunamente la ley 24.013 llamada comúnmente "ley de empleo".

La citada norma creó una serie de modalidades promovidas, dando a los empresarios flexibilidad en la disolución del vínculo laboral y claras ventajas de índole fiscal, produciendo importantes rebajas en la contribución patronal.

Asimismo, este Honorable Cuerpo incorporó el artículo 92 bis a la ley de Contrato de Trabajo, estableciendo el período de prueba de tres meses, lapso durante el cual los empleadores están casi exentos de contribuciones a la seguridad social. Vencido dicho plazo pueden prescindir de los trabajadores sin el pago de indemnización alguna.

Paralelamente, el Poder Ejecutivo nacional dispuso significativas rebajas en las contribuciones patronales; rebajas que de acuerdo con el decreto 492/95, mínimamente son del 30 por ciento, y lle-

gan hasta el 80 por ciento en zonas donde la desocupación registra altos niveles.

Paralelamente realizo la presente síntesis porque se intenta simplificar el debate, queriendo convencer a la sociedad de que la sanción de la presente ley ocasionará la elevación de los niveles de desempleo, lo cual es una afirmación absolutamente falsa y maliciosa. Como es falso, señor presidente, que el gobierno es indiferente a este flagelo.

El Estado nacional, a través de sus Poderes Legislativo y Ejecutivo, intentó e intenta todos los caminos posibles para combatir el desempleo en la Argentina. Cuando los empresarios manifiestan que el problema del empleo en negro y la generación de nuevas fuentes de trabajo dependen de aliviar la carga fiscal, el Poder Ejecutivo nacional, en el entendimiento de la validez de tal afirmación, redujo los aportes patronales y el Congreso Nacional, por similar convencimiento, crea modalidades promovidas con claras ventajas en este aspecto.

Sr. Figueroa. — ¿Me permite una interrupción?

Sr. Tell. — Sí, señor senador.

Sr. Figueroa. — En el marco de combatir el desempleo y la desocupación el Poder Ejecutivo nacional, por iniciativa de esta Cámara de Senadores, votada por unanimidad, creó la Secretaría de la Pequeña y la Mediana Empresa, que todos sabemos es el motor dentro de la economía para movilizar todos los factores que hacen a la ocupación en los países del mundo y, especialmente, en los países de la posguerra. Por eso el presidente Menem, en una resolución que ha tomado, a través de la Cámara de Senadores, creó la Secretaría de Estado que depende de la Presidencia de la Nación.

Sr. Tell. — Lo que usted plantea es muy cierto, como así también que el gobierno y, fundamentalmente, este Senado han demostrado esa actitud para la creación de las PYMES.

Prosigo, señor presidente. Cuando los empresarios hablaron de la necesidad de abaratar el costo del distracto laboral, el Congreso Nacional, merituando la razonabilidad del reclamo empresario, estableció los contratos a plazo fijo, modalidad que acotó los gastos de despido o rescisión del vínculo laboral.

Cuando los empresarios plantearon la necesidad de crear un mercado de capitales en la Argentina, el Congreso Nacional reformuló todo el sistema previsional, reforma que intentó resolver la obsolescencia de nuestro régimen jubilatorio y paralelamente crear un mercado de capitales inexis-

tente como forma de motorizar el crecimiento económico y disminuir el costo del dinero.

Cuando los empresarios plantearon tarifar el riesgo económico de los accidentes de trabajo, este Honorable Senado, convencido de tal objetivo, sancionó la ley de riesgos de trabajo, eliminando la vía civil del artículo 1.113 y dándole a los empresarios la posibilidad de prever de forma cierta su costo en materia de accidentes y a los trabajadores la certidumbre de cobro a mérito de la habitualidad con que los empleadores se insolventaban ante el pago de infortunios laborales.

Este cuerpo deliberativo, el mismo que sancionó las leyes que posibilitaron esta gran transformación en la Argentina, hoy no sólo tiene autoridad legal sino moral y técnica de plantear las correcciones necesarias.

Todas las modificaciones a la legislación laboral y previsional, modificaciones que en lo personal comparto plenamente, tuvieron el efecto no querido de someter al Estado nacional a un persistente déficit fiscal, déficit que hasta ahora es perfectamente manejable pero que tiene que ser una señal de alerta para quienes participamos directa o indirectamente en el manejo de la cosa pública.

Este persistente déficit fiscal, lejos de haberse combatido con una seria reforma impositiva se intenta controlar con el mantenimiento de una elevada alícuota del impuesto al valor agregado.

No hace falta que informe a los pocos señores senadores presentes quiénes son los más perjudicados por elevados impuestos al consumo.

Es de extrañar que se intente convertir al Senado de la Nación en ariete del atraso, que se nos diga a través de los medios de comunicación que vamos a contramano del mundo. Y todo porque intentamos corregir las normas que quizá tuvieron su justificación en la oportunidad de haberse dictado, pero que necesariamente deben adecuarse a los tiempos, habida cuenta de su desactualización y uso abusivo por quienes hoy critican esta reforma, obviando las responsabilidades que les caben por sus conductas.

Señor presidente: los trabajadores argentinos han hecho el aporte a la modernización que las circunstancias imponían. Consintieron, no sin gran esfuerzo, el pago de los impuestos al consumo más altos del mundo como forma de financiar el déficit ocasionado por los cambios del régimen jubilatorio y las ventajas fiscales dadas a los empleadores en la reducción de aportes patronales.

Los trabajadores argentinos aceptaron mayoritariamente el cambio de la legislación de riesgos del trabajo. Dicha aceptación se hizo en la inteligencia de que si bien perdían la posibilidad de reclamar por la vía civil, ganaban en tranquilidad al no depender de su empleador para el pago de los beneficios laborales.

Los trabajadores argentinos, sobre todo los más jóvenes, consintieron la "precarización" de su situación laboral en pos de poder trabajar. Pero el esfuerzo de los trabajadores argentinos no puede ser eterno y no tener contraprestación de los restantes actores de la economía argentina.

Cuando se habla del costo laboral, manifestando como cuestión vital su reducción para entrar en el primer mundo, recuerdo el dogmatismo con que los sindicalistas de antaño planteaban la resolución de sus problemas. También recuerdo, cuando se habla del costo laboral, a aquellos empresarios, en algunos casos los mismos que hoy nos critican, que modifican el concepto de libertad pretendiendo hacernos creer que podía existir libertad económica sin libertad política.

Señor presidente: se equivocaron entonces y se equivocan ahora.

Quien habla está sumamente interesado en que en nuestro país se establezcan las condiciones de competitividad necesarias para posicionarnos mundialmente. En ese entendimiento, tenemos que hablar del costo argentino, del cual el costo laboral es una parte, quizá mínima; costo laboral que la situación actual indica que no se puede rebajar o flexibilizar más de lo que tratamos de hacer con esta norma.

Señor presidente: entiendo que este cuerpo ha cumplido acabadamente con su responsabilidad y que los trabajadores argentinos han dado más que suficiente en pos de la modernización de este país. Ahora, la responsabilidad es de quienes hoy nos critican.

Del sector financiero, de reducir sus costos y lograr que las tasas de interés se establezcan dentro de los parámetros mundiales, hecho que parece molestarle a mérito de la oposición que realizan al proyecto regulador de las tasas percibidas por las tarjetas de crédito o compras, tasas que llegan actualmente y en promedio a un 50 por ciento anual, monto que en los países del mundo que siempre se dan como ejemplo por parte de quienes nos critican, serían consideradas usurarias y delictivas.

De los empresarios concesionarios de servicios públicos que pretenden abonar salarios más bajos

que los que pagan en sus países de origen, pero con tarifas más altas que las percibidas por sus casas matrices.

De los empresarios en general, quienes se tienen que allanar a la modificación de nuestro obsoleto sistema tributario, basado en impuestos al consumo, hecho que no registra ninguna legislación tributaria de los países tomados como modelo.

Y, finalmente, de todos los actores políticos y económicos de nuestro país, que debemos plantear el debate sobre las rectificaciones y cambios necesarios despojados totalmente de apetencias político-partidarias y sepultando definitivamente el dogmatismo que tanto dolor nos ha causado.

Por ello, a los trabajadores argentinos quiero expresar mi agradecimiento, por haber contribuido a la modernización del país, esperando que su ejemplo sea imitado por quienes no miden las consecuencias de adoptar políticas dogmáticas y arcaicas, fundadas en un excesivo afán de lucro e insensibilidad social.

Señor presidente: por todo lo expuesto, voy a votar afirmativamente el proyecto de ley en consideración.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires, del Partido Justicialista.

Sr. Caffero. — Señor presidente: entrar en este debate a esta altura de la noche, seguramente no resulta muy didáctico. Sin embargo, tal vez la ocasión es buena, porque posiblemente estemos considerando el tema más controvertido y más exigente del tiempo histórico que nos toca vivir, no sólo a los argentinos sino al mundo entero.

Recuerdo que Carlos Marx iniciaba su *Manifiesto comunista* con una frase famosa, según la cual un fantasma recorre el mundo: el comunismo. Ciento cincuenta años después, yo diría que otro fantasma recorre el mundo: el desempleo, que se ha instalado en la sociedad moderna como producto de varios cambios sustanciales.

En efecto, ha habido un cambio ético en el mundo. En la posguerra, el pleno empleo se asumía como una obligación del Estado; asegurar el trabajo era la primordial tarea que se imponían las sociedades de la posguerra. Recuerdo incluso una ley de los Estados Unidos, llamada *The employment act* —de 1946—, que obligaba a mantener el empleo total. Dicha ley, obviamente, no pudo cumplirse.

Sin embargo, hoy el mundo del trabajo está conmovido por otras situaciones, producidas a raíz de los cambios tecnológicos y a raíz del cambio de

postura ética de la sociedad, que mira el desempleo, simplemente, como una consecuencia de los ajustes económicos.

En ese sentido, el cambio tecnológico de esta tercera revolución industrial se basa, fundamentalmente, en la sustitución del hombre por la máquina. Esto ya ocurrió en la primera revolución industrial y trajo, realmente, consecuencias muy graves: crisis sociales y revueltas. Al respecto, cabe señalar que lo ocurrido en la Comuna de París y las revoluciones sociales, fueron la consecuencia de haber dejado que fuese el mercado, simplemente, el que resolviese la situación abrumadora de desempleo producida por esos cambios tecnológicos.

¿Y qué nos dicen los futurólogos? ¿Qué nos dicen hombres de una precisa y brillante capacidad intelectual como Jeremy Riskin o Jean Paul Fitoussi, quien estuvo hace poco tiempo entre nosotros? ¿Qué pronostican? "El fin del trabajo", como se llama el libro de Riskin. ¿Qué nos dice en él dicho autor? Que de continuar esta tendencia, el hombre dejará de trabajar en la forma que hemos conocido el trabajo hasta ahora, a lo largo de la humanidad; que el trabajo pasará a ser más una actividad individual desarrollada en el seno de la propia familia, y no de manera agrupada en grandes establecimientos industriales o de servicios como hoy ocurre. Y también, que la cantidad de "parados" llegará a tal nivel que será necesario introducir en la vida de las naciones alguna suerte de ingreso ciudadano básico para poder dejar que las familias tengan el mínimo de su existencia asegurada. Ya no va a provenir del trabajo ni del salario sino del asistencialismo en gran escala. Es el famoso impuesto inverso a la renta que Milton Friedman—entre muchos otros economistas—ha propuesto alguna vez, a pesar de provenir del pensamiento neoliberal.

Hemos escuchado cuál es el problema en la Argentina. Sabemos que hay un índice de desocupación muy alto para la tradición histórica de nuestro país y también ha habido un proceso de regresiva distribución del ingreso.

A nosotros, que tenemos una filosofía muy especial para juzgar los fenómenos que ocurren en nuestra modernidad, esta situación no nos puede tomar desprevenidamente y hacernos pensar y gobernar sosteniendo que en definitiva el problema del desempleo es por culpa de los asalariados. Cuando el asalariado no acepta el precio de mercado de su trabajo surge el desempleo como una respuesta natural del mercado. Y todo lo que se intente hacer fuera de las normas del mercado no

servirá para solucionar este problema, y mucho menos el otro que viene anexo a la desocupación: la distribución regresiva del ingreso. Esto genera una suerte de desafío nacional.

Muchas veces he insistido desde esta banca en cuanto a que los temas que la Argentina tiene por delante no son de ningún partido político en especial. Son temas de la sociedad argentina como tal.

Tenemos que inaugurar las políticas de Estado en las que cooperemos oposición y oficialismo porque hay asuntos que deben ser sustraídos del debate electoral porque su trascendencia histórica supera los designios de un partido político. Por eso no me ha gustado el énfasis que escuché por parte de algún senador de la oposición, que en un momento me pareció que se alegraba porque se detenía el crecimiento económico. No nos damos cuenta de que si se detiene el crecimiento económico no hay sector de la sociedad que se vaya a salvar de un mayor desempleo y también de una peor distribución del ingreso.

También me parece relativamente fuera de tono insistir en que esta nueva ley de reforma laboral que estamos tratando no nació del acuerdo social cuando precisamente quienes hoy lo han dicho desde estas bancas nunca se han caracterizado por buscar los acuerdos sociales. Aquí el fundamento de los acuerdos sociales, del contrato social, es el justicialismo, que siempre llamó a esa tríada de factores constituida por el Estado, los empresarios y los trabajadores.

No podemos mirar esta ley si pensamos en la sociedad industrial de hace cincuenta años, cuando el justicialismo inició e instaló las primeras reformas sociales en la Argentina. Hoy el mundo es totalmente diferente. No sólo la globalización no ha puesto en la necesidad de tener que competir en el mundo sino que también las condiciones de trabajo han variado sustancialmente. Se acabó el taylorismo y el fordismo, el gigantismo empresarial; se acabó esa jerarquía autoritaria y omnímoda de los gerentes o de los dueños con respecto al personal. Se acabó esa forma de trabajar parcelada donde el trabajador sólo podía ser —y era— el único que quería ser— una microparte de un proceso de producción. Hoy el mundo industrial es distinto: hace falta flexibilización en los empresarios y en los trabajadores; hace falta generar el trabajo en equipo, el aprendizaje permanente.

Dada la naturaleza de estos procesos industriales, el trabajador deja de ser un agente pasivo del proceso productivo y se transforma también

gente activo. Por ello, también hay que modificar el rol de la empresa privada en la sociedad moderna. Hemos hablado mucho al respecto.

Días pasados, cuando el Grupo de los 8 estuvo en nuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social, les dije: "Señores: ustedes hablan del sindicalismo, de las convenciones colectivas de trabajo, y olvidan de admitir que hoy el problema del desempleo ha dejado de ser un problema del Estado; es un problema de la sociedad, y ustedes tienen responsabilidad en esto. Ustedes no pueden lavar las manos frente al problema del desempleo, porque hay una responsabilidad superior que la empresa, en la economía moderna y en la sociedad moderna, tiene que asumir".

No sé si fue el señor senador que me precedió en el uso de la palabra quien se refirió al balance social que debe existir en una empresa, además del balance económico. Ignoro si ocurrirá en la Argentina, pero creo que en alguna parte del mundo—en Francia se han hecho muchos estudios al respecto— esta cuestión va a incitar a las nuevas generaciones a plantearse un nuevo esquema empresarial. No sólo lo sostenemos los políticos de raíz populista—como nos denominan—; también se lo he leído a David Rockefeller, a George Soros, a Harry Fould, presidente del Club de Davos.

Todos ellos están empezando a admitir que también existe una responsabilidad empresarial en esta situación afligente mundial, que no sólo conduce al superdesempleo, sino también a la creciente inequidad en la distribución del ingreso.

Sr. Figueroa. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. Cafiero. — Con mucho gusto, señor senador.

Sr. Presidente (Menem). — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador por Santiago del Estero.

Sr. Figueroa. — Respecto de la referencia que hace el señor senador por Buenos Aires, quiero traer el recuerdo—alguna vez lo dije en el bloque— de un discurso pronunciado por Enrique Iglesias, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, en un congreso realizado en Punta del Este por el Programa Bolívar para la Pequeña y Mediana Empresa. Decía, entonces, en muy pocas palabras, que la macroempresa genera el desempleo, y el empleo público encubierto lo degenera. Y que todo el tema de la capacitación no tan sólo pasa por el empleo en sí que puedan ofrecer las empresas, sino también por el rol importante que tienen que

jugar las universidades en la capacitación del nuevo profesional.

Las universidades deben terminar hoy con los viejos tradicionalismos—esto es, con aquellos estudios que son propios de las carreras tradicionales—, con el fin de formar profesionales emprendedores, para que, en lugar de que un ingeniero hidráulico o un abogado tengan que salir a manejar un taxímetro, egrese de la universidad un profesional capacitado para emprender una micro, pequeña o mediana empresa.

Sr. Cafiero. — Comparto su preocupación, señor senador, y agrego que el arma más eficaz para combatir el desempleo es hoy la capacitación laboral, desde el punto de vista de los trabajadores.

Sr. Figueroa. — Lo planteó Michael Camdessus.

Sr. Cafiero. — Así es.

Hoy, en el mundo, después de agotados los efectos del famoso Consenso de Washington y de esta ola neoliberal que arrasó con todas las teorías de la economía y se instaló como pensamiento único en materia económica, hay un regreso del péndulo. Hoy existe un regreso a la aceptación de formas más humanas, más sociales, de la actividad económica.

En la Argentina debemos generar las condiciones para que esta abrumadora carga social que experimenta nuestra sociedad—sobre todo, los sectores más postergados— comience a ser saldada.

Hace falta generar en nuestro país un nuevo contrato social, un nuevo pacto social, si es que creemos que esta política, así como las referidas a la educación, a la salud—y por qué no incluir a la política exterior—, son políticas de Estado. En ese momento alcanzaremos el necesario grado de cohesión nacional y social que necesitamos los argentinos para corregir los efectos más distorsivos de la globalización.

Consideremos ahora los elementos que esta norma introduce en la legislación nacional. Según el enfoque de Reich, que fue secretario de Trabajo de Clinton, existen dos modelos en el mundo: el de los Estados Unidos, que privilegia el empleo, y el de Europa en general, que privilegia el ingreso.

Dirijo el siguiente comentario a quienes aclaman el modelo norteamericano porque sostienen que prácticamente logró eliminar la desocupación en los Estados Unidos.

En los Estados Unidos se consagra la precariedad casi total del trabajo. No existe el trabajo por tiempo determinado. A pesar de lo que establezcan las leyes, la facultad de despedir y contratar

es tan amplia que virtualmente puede hablarse de una flexibilización total. Por ello, los americanos se jactan de que mientras el nivel de desocupación de los europeos oscila entre el 12 y el 15 por ciento, el de su país apenas alcanza el 4 por ciento.

En su libro sobre el fin del trabajo, Riskin sostiene que el desempleo tecnológico ha alterado fundamentalmente la sociología de la comunidad americana de color. La falta sistemática de empleo condiciona una creciente ola de crímenes en las calles de las ciudades de América y la total desintegración de la vida familiar de los miembros de esta comunidad. Las estadísticas son abrumadoras: a finales de la década de los 80, uno de cuatro varones de origen afroamericano se hallaba en prisión o en libertad condicional.

Si bien dispongo de más datos, considero suficientes los que acabo de mencionar. Ellos muestran la cara oculta de un sistema que, a través de la precariedad total de las normas de trabajo, logró alcanzar altos niveles de ocupación.

Sr. Figueroa. — ¿Me permite una interrupción?

Sr. Presidente (Menem). — El señor senador por Santiago del Estero le solicita una interrupción, ¿se la concede, senador Cafiero?

Sr. Cafiero. — Cómo no.

Sr. Presidente (Menem). — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador por Santiago del Estero.

Sr. Figueroa. — Señor presidente: quería agregar que en los Estados Unidos funciona el Small Business Administration desde 1952. Se trata de una Secretaría de Estado dependiente de la Presidencia de esa nación.

En tal sentido, debo mencionar que en los Estados Unidos están registradas 22.500.000 PYMES.

Sr. Presidente (Menem). — Continda en el uso de la palabra el señor senador por Buenos Aires.

Sr. Cafiero. — Agradezco la contribución del señor senador por Santiago del Estero, quien siempre pone de manifiesto su obsesión por el rol de las PYMES de una forma plausible y encarnizada. (Risas.)

Yo diría al señor senador Figueroa que algún día seguramente debatiremos sobre este tema.

Sr. Presidente (Menem). — Senador Cafiero: va a agotar su tiempo en el diálogo con el senador por Santiago del Estero.

Sr. Cafiero. — ¿Ya agoté mi tiempo, señor presidente?

Sr. Presidente (Menem). — No; pero, si sigue en este tren, va a agotar el que le resta dialogando con el senador Figueroa.

Sr. Cafiero. — Hablaba de dos modelos: el americano, con bajo nivel de desocupación y mala distribución de los ingresos, y el europeo, con alto nivel de desocupación pero con una distribución del ingreso más equitativa. ¿Donde se ubica la Argentina? Lamentablemente, tenemos los dos aspectos negativos de esta ecuación: alto nivel de desempleo y mala distribución del ingreso, lo que nos habla de la complejidad de esta cuestión.

Si comparamos la situación actual con la de la economía argentina hace diez años, podría decirse que hemos mejorado.

Indudablemente, la creciente regresividad en la distribución de los ingresos no puede atribuirse sólo a los efectos del modelo económico. Esta situación tiene su punto de partida en la década del 80, cuando comienzan a crecer los niveles de pobreza y recesión. Indudablemente, allí comienza la creciente disparidad regresiva en la distribución del ingreso.

Comparemos la situación de hoy con la de hace 20 años. En esa época, el 10 por ciento más pobre de los argentinos tenía el 3,1 por ciento de los ingresos, mientras que ahora tiene el 1,6 —o sea aproximadamente la mitad—. El 20 por ciento más rico pasó del 41 al 51 por ciento de participación en la distribución del ingreso. Y no hay cifras sobre la distribución de las rentas o de los ingresos nacionales entre salarios y utilidades. Esta es una vieja estadística que durante mucho tiempo nutrió la literatura distributiva en la Argentina pero que ahora, desde hace ya varios años, el Banco Central ha dejado de publicar. Si miramos los resultados desde un punto de vista equitativo, serían realmente catastróficos. *

Es probable que la participación de los salarios en el ingreso nacional haya sido del orden del 40 al 45 por ciento hace 20 años y hoy no se sabe si llega al 25 por ciento. El gran desafío que tienen los economistas y los gobiernos es que hay que crear una nueva vía, una tercera vía en esta idea de que aun dentro del modelo económico es posible alcanzar... (Risas.)

Sr. Alasino. — "Spartacus".

Sr. Cafiero. — No me hable de los esclavos romanos, senador. Me habla de "Spartacus", señor presidente... (Risas.)

Sr. Presidente (Menem). — Ruego a los señores senadores no dialogar.

puesto en formación profesional; en el Reino Unido los programas de empleo de emergencia tienen actualmente un componente formativo; Canadá ha resuelto aprovechar el recién estrenado equilibrio presupuestario para dotar de más fondos a los planes de educación y capacitación; España invertirá en cuatro años 5.000 millones de dólares en acciones de capacitación; Chile acaba de aprobar un programa de ahorro-formación al que pueden acceder los trabajadores y sus hijos, lo que les permitirá financiar los estudios terciarios; en Alemania se propone un impuesto especial a las empresas que no ofrezcan acciones de capacitación; en Dinamarca se han comprometido a consagrar el derecho a la formación continua con dos semanas anuales retribuidas; el gobierno de los Países Bajos está a punto de aprobar el proyecto "aprender durante toda la vida", con importantes inversiones y severas obligaciones a cargo de los docentes y una desgravación del 20 por ciento del costo de los cursos para las empresas que inviertan en capacitación; la Unión Europea, en la Cumbre de Luxemburgo, resolvió adoptar planes que contengan incentivos a la inversión privada en capacitación; y los belgas hicieron lo que yo propondré en algún momento, para lo cual quisiera que en alguna ocasión nos reunamos para darle forma legal en la Argentina. Concretamente, los belgas proponen la reducción de aportes patronales como incentivo a la inversión en capacitación.

Bien, señor presidente, entro al último punto por que quiero abreviar este mensaje. Otra de las grandes deudas que existe en la Argentina es la deuda por productividad. Estamos acostumbrados a hablar de la deuda social por todo aquello que se le debió al sector jubilado en algún momento y que se debe a los trabajadores activos. Es preciso admitir que todo este proceso de crecimiento económico tan espectacular que la Argentina viene sosteniendo desde hace seis o siete años no ha sido acompañado por un aumento en los salarios reales de la población, ni en los del sector activo ni en los del sector pasivo.

En efecto, hay un hecho que merece ser señalado. Entre 1991 y 1996, la Argentina incrementó la productividad del trabajo en un 65 por ciento. ¿Qué significa esto? Todos sabemos qué significa la productividad del trabajo. Resulta de dividir los bienes producidos por el número de horas-obrero trabajadas. Si a igual cantidad de bienes producidos se trabajan menos horas, esto quiere decir que se aumentó la productividad del trabajador. Los libros de economía nos enseñaron que de acuerdo

con la teoría neoclásica, todo aumento de la productividad del trabajo, a través de la reasignación de recursos y de ingresos que hace el mercado, se traduce en un aumento de salarios o en una rebaja de precios. En la teoría neoclásica nunca se admite que un aumento de la productividad sea apropiado por otro factor que no sea la rebaja de los precios o el aumento de los salarios.

Por eso, yo pregunto adónde fue a parar ese 65 por ciento. Ha sido apropiado por el sector capital de la economía. Sostengo que eso no es justo en términos éticos, pero tampoco es equilibrado en términos estrictamente económicos. Por ello, señor presidente, cuando discutamos en particular este proyecto de ley, voy a proponer al señor presidente de la comisión la siguiente modificación del artículo 15. En el último párrafo, luego de donde dice: "La facultad de acordar la disponibilidad colectiva prevista en el presente artículo", propongo que siga así: "queda condicionada a la generación de empleo o la distribución equitativa de la mayor productividad". En buen romance: la utilización de los mecanismos de disponibilidad colectiva que se crean a través de esta ley, la vigencia de algunas modalidades productivas y todo aquello que tienda a generar empleo, también debe tener como variable de ajuste la distribución equitativa de la mayor productividad.

Hoy, para poder mejorar la actual distribución regresiva del ingreso nacional, los trabajadores no cuentan, como antes, con la presencia de un Estado activo que, a través de normas legales o administrativas, o de convenciones colectivas de trabajo aprobadas por la autoridad correspondiente, les permita mantener el poder adquisitivo de sus salarios y la lucha por la redistribución progresiva del ingreso. La redistribución progresiva del ingreso consistía en compensar las caídas que se producían en el nivel adquisitivo del salario como consecuencia de la inflación. Hoy no hay inflación. ¿De dónde va a surgir, en consecuencia, la posibilidad de distribuir de una manera más progresiva el ingreso nacional? Simplemente, del hecho de que todo aumento de productividad que se verifique en la empresa sea redistribuido con los trabajadores.

Apelo a un antiguo slogan de hace 40 años, cuando el gobierno justicialista organizó el Congreso de la Productividad Nacional. Por primera vez en la Argentina se empezaba a hablar de ese tema.

Todavía tengo en mi poder los folletos que se escribían en aquel entonces. Hoy, me parecen absolutamente primarios, pero en aquel momento eran

una contribución bastante importante y saludable al problema de la productividad del trabajo.

Debemos volver a ese espíritu. Tenemos que instalar el concepto de la productividad laboral como tema central en las negociaciones colectivas de trabajo, ya sea a nivel de empresa, de actividad o de rama.

A continuación, voy a hablar brevemente sobre la presencia del sindicato en la vida social argentina. Esa presencia forma parte de una nueva legislación laboral en la que sin caer en posturas ni en organizaciones que fueron propias del pasado "taylorista" o "fordista" se intente de alguna manera recrear la fuerza sindical como el órgano que tiene capacidad para mejorar el agobio que significa esta redistribución regresiva y, por ende, inhumana o ahumana del ingreso entre los argentinos.

Como usted me hace una señal, señor presidente, que no sé si son dos minutos, la "V" de la victoria u otro signo tan conocido en la historia de los argentinos, doy por terminada mi alocución.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por el Chaco del bloque de la Unión Cívica Radical.

Sr. León. — Señor presidente: sé que se está por levantar esta sesión. Por ello, reitero mi pedido de que se pase lista ahora y se levante la sesión para que, de esa manera, quede por lo menos un orador de la oposición para el próximo miércoles.

Sr. Presidente (Menem). — Señor senador: no voy a poner en consideración una moción de orden, en primer término, porque no hay número para votar y, en segundo lugar, porque entiendo que desde un punto de vista de estricta justicia los señores senadores que han hecho uso de la palabra hoy, ante este número de colegas presentes en el recinto, estarían en desventaja frente a quienes podrían hacer uso de la palabra en la próxima sesión, dado que tendrían otra expectativa, otro nivel de concurrencia y más tiempo para preparar sus discursos.

Por ese motivo, voy a hacer proseguir este debate hasta su culminación y, luego, voy a pasar lista.

Sr. León. — Entonces, no voy a hacer uso de la palabra hoy y me voy a anotar para hacerlo en la próxima sesión.

Sr. Presidente (Menem). — Voy a dar por cerrada la lista de oradores y no tendrá oportunidad de hablar en el tratamiento en general durante la próxima sesión. Le hago esa advertencia, señor senador.

Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Alasino. — Señor presidente: si esta sesión se levanta por falta de número tendremos que hacer una nueva. Reglamentariamente, eso es lo que corresponde. Esta sesión debería terminar con la votación y, en caso de que no exista quórum, deberá iniciarse una nueva sesión durante la próxima semana. Ahora no podemos aprobar pasar a cuarto intermedio porque no tenemos quórum.

Ahora bien, si acordamos dar por cerrada la lista de oradores, la próxima sesión sería sin debate. Pero si algunos de los señores senadores no quiere hablar ahora y desea hacerlo en la próxima sesión, lamentablemente, vamos a tener que respetar esa decisión.

Nosotros venimos haciendo gestiones desde hace varios minutos y considero que está sellada la suerte de esta sesión. En este momento, en el Senado hay diecinueve senadores justicialistas, cuatro radicales y un representante de los partidos provinciales...

Sr. Berhongaray. — Cinco radicales.

Sr. Alasino. — Bueno, cinco radicales. El informe me lo pasaron hace diez minutos.

Sr. Berhongaray. — No me moví del Senado.

Sr. Alasino. — Estaría durmiendo. *(Risas.)*

Sr. Berhongaray. — No me moví del Senado.

Sr. Alasino. — Entonces, sin más trámite, señor presidente, salvo su decisión de tomar lista, que se levante la sesión y empecemos de nuevo la semana que viene. El senador que quiera repetir el discurso, que lo haga. Si alguien quiere hablar en la sesión que viene, tiene todo el derecho a hacerlo. Esta es la realidad.

Me da la impresión que el motivo por el cual ahora no se acompaña este proyecto de ley, por lo menos de parte de nuestro bloque, se debe a lo avanzado de la hora y no a definiciones de tipo ideológico. Se trata de una iniciativa que la hemos trabajado durante mucho tiempo. No sé si de parte del bloque radical habrá alguna observación más de fondo, aparte de lo que expresaron los dos o tres oradores que estaban anotados, o de los senadores del Frepaso o de los partidos provinciales.

Dado lo avanzado de la hora y la situación en la que estamos, podríamos acordar a quién se da por pronunciado su discurso y a quién no en la próxima sesión de la semana que viene, y luego votemos. Si el señor senador por el Chaco se mantiene en su posición de hacer uso de la palabra en la próxima sesión, no tenemos más remedio que admitirlo.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. López. — Señor presidente: cada uno ha expuesto sus argumentos. Estamos en un momento difícil, no solamente por la cantidad de senadores presentes en el recinto sino por la situación social y política del país y por las cosas que están pasando a nivel general. Entonces, me parece prudente que posterguemos el debate y que se dé una nueva posibilidad de discutir e, incluso, de acordar. ¿Qué bueno sería que pudiéramos lograr una legislación laboral acorde con los tiempos y a las necesidades argentinas!

Reitero que me parece prudente que cerremos el debate de hoy y que la semana que viene debatamos de vuelta el tema de la relación laboral en la Argentina. Es una idea. O por lo menos que haya un orador de la oposición en igualdad de condiciones para tratar los temas frente al público y al conjunto de los senadores cuando se debatan los argumentos principales del proyecto.

Por esta razón, adhiero a la posición sustentada por el presidente del bloque oficialista.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por el Chaco quien me hizo señas hace un rato.

Sr. León. — Señor presidente: le agradezco su buena memoria y la captación de imágenes.

Quiero aclarar que cuando yo hice mi propuesta bajo ningún concepto quise disminuir a los oradores que ya habían hecho uso de la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Córdoba.

Sr. de la Sota. — Señor presidente: para evitar problemas mediáticos en cuanto a la hora en que la oposición dé su mensaje, propongo que el miércoles que viene este proyecto se trate como primer tema de la sesión. Me permitiría sugerir al señor presidente que la sesión se convoque más temprano porque pareciera que esta Cámara sólo va a poder sesionar en horario de televisión, y si es posible en categoría A.

Como éste es un tema que importa a todos y que indudablemente el país lo está esperando, algunos con expectativas positivas y otros negativas, le pediría al señor presidente que incluyamos este tema como primer punto de la próxima sesión y debatamos todo lo que tengamos que debatir. Sugiero que la sesión del próximo miércoles empiece a las 15 y 30 y que este proyecto sea el único tema. De esta manera la oposición podrá presentar un proyecto alternativo en su dictamen,

más que un proyecto de rechazo, porque nos gustaría saber qué piensan sobre el modelo laboral de este tiempo, y no solamente que rechacen lo que nosotros pensamos. Nos parece que el diálogo es propuesta y contrapropuesta y no propuesta y rechazo.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Tucumán.

Sr. Miranda. — Señor presidente: solicito en primer término que se pase lista para ver cuántos senadores están presentes.

Lamento que la poca paciencia de los colegas senadores no haya permitido terminar esta sesión. Evidentemente, no se ha evaluado en su profundidad la importancia que tiene, y pido disculpas a los sectores intervinientes en esta reforma, es decir, Confederación General del Trabajo y a quienes ellos representan —los trabajadores—, porque aunque demora sea de una semana, realmente este proyecto es de trascendental importancia.

Reitero mis disculpas a los trabajadores por esta demora y pido que se cierre la lista de oradores para la próxima sesión.

Sr. Presidente (Menem). — Si ningún otro señor senador desea hacer uso de la palabra, voy a dar por cerrada la lista de oradores, lo cual no significa que los señores presidentes de bloque puedan disponer que se reabra el debate en la próxima sesión.

En definitiva, se hará lo que los presidentes de bloque decidan. Lo que a mí —como presidente de esta sesión— me pareció que no correspondía que después de estar varias horas debatiendo que algunos señores senadores tuvieran la paciencia de hablar con dos o tres colegas escuchando, se les dé la oportunidad a quienes se fueron hoy y dejaron a la Cámara sin quórum de haber en el recinto ante todo el conjunto de senadores con todos los medios de difusión.

El otro tema es el siguiente: ¿qué estuvimos nosotros haciendo aquí, más allá de los excelentes discursos escuchados, si vamos a hacer nuevamente el debate en la próxima sesión? Perdimo tiempo en forma lastimosa.

En cuanto a lo que propone el señor senador por Córdoba, yo no voy a convocar ni a fijar hora de inicio porque eso lo hacen los presidentes de bloque, pero me permito hacerle notar al señor senador que más allá de la hora que se fije, tiene ningún valor porque la sesión comienza cuando se reúne el quórum. A veces fijamos el inicio a las 15 y empezamos a las 17 o 18, entonces es

depende del presidente ni de los presidentes de bloque sino de la hora en que los señores senadores vienen a ocupar sus bancas.

Teniendo en cuenta que ningún otro señor senador hará uso de la palabra, doy por cerrada la lista de oradores y por Secretaría se pasará lista de los senadores que se encuentran presentes.

Sr. Berhongaray. — Lo del cierre de la lista de oradores se refiere a esta sesión porque la otra será una nueva reunión.

Sr. Presidente (Menem). — La Presidencia no se va a referir a la otra sesión porque ello será materia de lo que decidan los presidentes de bloque. Es decir, los presidentes dispondrán la labor parlamentaria de acuerdo con el Reglamento.

Sr. Berhongaray. — Así es, de acuerdo con el Reglamento.

Sr. Presidente (Menem). — Por Secretaría se va a pasar lista.

—Están presentes los señores senadores Alasino, Baum, Bauzá, Berhongaray, Cafiero, Costanzo, de la Sota, Figueroa, León, López, Maglietti, Martínez Almudevar, Menem, Miranda, O'Donnell, Peña de López, Rivas, Sáez, Sager, Salum, Tell, Ulloa, Yoma y Zalazar.

Sr. Secretario (Piuzzi). — Hay veinticuatro señores senadores presentes.

Sr. Presidente (Menem). — Como no hay quórum, queda levantada la sesión.

—Es la 1 y 52 del jueves 14 de mayo de 1998.

MARIO A. BALLESTER.

Director del Cuerpo de Taquígrafos.